



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Retóricas expertas en el debate sobre adopción gay en Colombia

Leidy Paola Moreno Cortés

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas, Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia

Bogotá, Colombia

2016

Retóricas expertas en el debate sobre adopción gay en Colombia

Leidy Paola Moreno Cortés

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Estudios Sociales de la Ciencia

Directora:

Ph.D., Olga Restrepo Forero

Línea de Investigación:

Ciencia, Experticia y Públicos

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas, Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia

Bogotá, Colombia

2016

*A mi familia por acompañar, fortalecer y
alentar la culminación de este enriquecedor y
complejo proceso de escritura y de pensamiento.*

Agradecimientos

En la consecución de este logro quiero resaltar la contribución e inspiración de diversas personas. A los docentes de la maestría por su tiempo y dedicación en la tarea de aportar a los diversos e interesantes proyectos que surgen en el programa. De forma especial, agradezco a la profesora Olga Restrepo por su paciencia en la producción, revisión y orientación del presente documento; al profesor José Antonio Amaya por su compromiso con la investigación histórica y social que propicia el buen ánimo y el interés necesarios para conducir un proyecto académico; a la profesora Tania Pérez-Bustos, quien me permitió desmontar nociones generales sobre el conocimiento vislumbrando la manera en la que las personas de carne, hueso y alma lo producimos; al profesor Yuri Jack Gómez quien incentivó mi vinculación y proceso en la maestría.

Reconozco de manera grata los comentarios y las reflexiones de mi colega Bruno Andrés Jaraba sobre la comunidad psicológica, que me brindaron un claro ejemplo de los diversos retos que hay que afrontar para construir y mantener un punto de vista crítico sobre el conocimiento *psi* en el país.

Destacó, las experiencias compartidas y el intercambio académico con los estudiantes de sociología que cursaron cursos de la maestría y a mis compañeros de programa quienes permitieron discutir y esclarecer el campo de los Estudios Sociales de la Ciencia desde los diversos intereses que nos congregó en clases y en eventos.

También resaltó la valiosa gestión de los asistentes de la maestría William Sánchez, Rafael Mendivelso y Miller Díaz respecto a los diversos procesos administrativos del programa.

Así mismo, agradezco la atención por parte de la secretaria, Flor Sanabria, quien ayuda a simplificar los trámites en las oficinas de la universidad.

Resumen

Este trabajo compila el corpus de textos colombianos de jurisprudencia generados en el debate jurídico sobre adopción gay en Colombia con el objetivo de describir la toma de decisiones por parte de la Corte, particularmente, en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 evidenciando la manera en la cual son integrados textos remitidos por expertos y analizando las retóricas sobre familia y roles parentales que emergen en el proceso jurídico. La sentencia cumple el papel de tecnología literaria para ensamblar hechos y legitimar las decisiones de la Corte. Dentro de las sentencias, los *Amicus Curiae* funcionan como mecanismo de incorporación de conocimiento especializado para la producción de decisiones y el establecimiento de justicia. La definición de la categoría social de “familia” fue un foco estratégico en el debate para tratar de establecer intereses a favor y en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo; así mismo, fue relevante la discusión acerca de quiénes pueden y deben cumplir los roles parentales para el cuidado y la protección de los menores.

Palabras clave: toma de decisiones, controversia pública, Corte Constitucional de Colombia, Amicus Curiae, homoparentalidad, adopción gay, conocimientos expertos.

Abstract

This work compiles the corpus of Colombian jurisprudence texts generated by the debate about gay adoption in Colombia. The aim was to describe the decision-making by the Court in C-802 of 2009 and C-710 of 2012 sentences showing the manner in which they are integrated texts submitted by experts and analyzing the rhetoric about family and parental roles that emerge in the legal process. The sentence fulfills the role of literary technology to assemble facts and legitimizing the decisions of the Court. In the sentence the Amicus Curiae function as a mechanism for incorporating specialized knowledge and the production of justice. The definition of the social category "family" was target strategic in the debate to try to establish interest for or against the adoption by same-sex couples, as well as, was relevant the discussion about who can and who should play parental roles for the care and protection of minors.

Keywords: decision-making, public controversy, Constitutional Court of Colombia, Amicus Curiae, homoparentality, gay adoption, expertise.

Contenido

	Pág.
Introducción.....	15
1. Toma de decisiones públicas como escenario de circulación, uso y producción de experticia.....	24
1.1 Movilización social a través del ámbito jurídico: la “adopción gay” como un problema convertido en un asunto de interés público	27
1.2 Más allá de la división entre legos y expertos: los ensamblajes para la producción de conocimiento legal.....	30
1.3 Producción y usos del conocimiento, la experticia y la evidencia en las cortes	35
1.4 Conocimiento sobre sexualidad y orden social sobre parentalidad: una comprensión desde la co-producción.....	41
1.5 Visibilización de intereses en la toma de decisiones: las posibilidades de un análisis retórico de la justicia	44
1.6 Narrativas sobre justicia en la Corte: versiones divergentes sobre la homoparentalidad.....	47
2. Producción de órdenes sociales a favor y en contra de la homoparentalidad en la Corte Constitucional de Colombia	52
2.1 Producción de conocimiento y configuración de orden social en torno a la homoparentalidad: repertorios argumentativos.....	56
2.2.1 Derechos de los adultos vs derechos de los menores: la familia como una cuestión heterosexual.....	57

2.2.2	Protección, cuidado y afecto entre figuras homoparentales y menores: los signos del reconocimiento jurídico igualitario.....	64
2.2.3	De la defensiva a la ofensiva el desprestigio de la visión sobre homoparentalidad de la contraparte.....	71
2.2.4	Conclusiones.....	77
3.	Producción experta de relaciones parentales en la sociedad colombiana.....	87
4.	Expresiones de experiencia/experticia entre públicos y expertos	89
5.	El gran debate sobre las familias homoparentales: conocimientos e intereses públicos	91
	Anexo A.....	93
	Bibliografía.....	101

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1: Textos producidos en el debate jurídico sobre adopción gay en Colombia.....36

Tabla 2: Listado de intervenciones de grupos de interés presentadas en calidad de Amicus Curiae en las sentencias de 2009 y 2012..42

Lista de abreviaturas y siglas

Abreviatura	Término
-------------	---------

C	Sentencia Corte Constitucional
CP	Constitución Política
ESC	Estudios Sociales de la Ciencia
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
SU	Sentencia unificadora de la doctrina constitucional

Introducción

A lo largo de su historia, la sociedad colombiana ha venido apropiándose del modelo de “la familia”, esto es, la unión de un hombre y una mujer con una descendencia de sangre o, excepcionalmente, de adopción, descendencia reconocida por la autoridad. Este modelo de “la familia” obedece a la necesidad que tiene la sociedad de perpetuarse, dotándose de textos normativos destinados a facilitar y garantizar el reemplazo de las generaciones que envejecen.

Desde hace varios años, numerosas personas viven una sexualidad diferente a la heterosexual y han obtenido un reconocimiento legal de las llamadas uniones “gay”, que constituyen de manera durable cuando no permanente. Hoy por hoy, tal reconocimiento concierne sobre todo a la vida económica de las dos partes contractuales de la unión: derecho a la cobertura en protección social en salud, régimen de protección patrimonial, reconocimiento de la pensión de sobreviviente y garantía efectiva de la misma.

Hoy en día, tanto hombres como mujeres que viven en “unión gay” y no les satisface el mero reconocimiento de su participación económica en el producto interno bruto del país, ni la mera aceptación de su elección de vida pretenden integrarse a la renovación de las generaciones mediante la adopción. A partir de entonces reivindican el derecho de fundar una “familia”. De tener éxito, esta reivindicación se traduciría en la ampliación de los textos actuales que regulan el proceso de adopción. Ello conduciría al deslizamiento semántico de “unión gay” a “pareja de personas del mismo sexo”, y por ende transformaría la percepción de los homosexuales en la sociedad, en el sentido de que los objetivos de la “unión gay” serían asimilables a los de las uniones tradicionales: fundar una “familia”. De este modo, las razones que suelen conducir a dos personas del mismo sexo a formar una pareja no podrían seguir siendo consideradas como asociadas con el goce afectivo, sexual o económico, dicho de otra manera de la irresponsabilidad que genera la desviación. Esta reivindicación alimenta en nuestro país, como en numerosos países occidentales, el llamado debate de “adopción gay”, que quizá sea más exacto llamar “adopción homoparental”.

Este trabajo compila el corpus de textos colombianos de jurisprudencia generados por este debate en curso. Luego se lo somete a análisis con el fin de evidenciar el espíritu, y más exactamente el paradigma que dicta los argumentos a favor y en contra que esgrimen quienes deciden y sus expertos. En este sentido, parece primordial establecer e identificar la lista y el papel de los jueces especializados en el tema. En seguida, se evidencia la manera en la cual los informes de expertos científicos, jurídicos y activistas han nutrido la reflexión de los diferentes grupos con la finalidad de identificar las instituciones, las profesiones y las personas que han sido convocadas para que expresen sus dictámenes y, como es natural, aquellos que han sido descartados del debate “oficial” y de ser posible indagar el por qué de esta separación. Además, será pertinente comparar los argumentos y las conclusiones de estos informes oficiales con los puntos de vista que los expertos

hubiesen podido comunicar ulteriormente sea al gran público, sea a los especialistas nacionales o internacionales, sin perder de vista en ningún momento que sólo la palabra del legislador y la del juez tienen carácter compulsivo.

También será necesario determinar hasta qué punto la ciencia y otras experticias han sido capaces de permanecer “objetivas” en esta materia, puesto que este es el argumento decisivo que imprime a su palabra una dimensión “sagrada”; concretamente describiendo la manera en la que los expertos representan su conocimiento como criterio decisivo en la controversia. También será necesario precisar cómo esta “palabra experta” ha sido recibida, interpretada y utilizada por aquellos que deciden.

Escenario jurídico como espacio de reivindicación de la adopción homoparental

En la sociedad colombiana el reconocimiento de los derechos civiles de las personas con sexualidades alternativas se encuentra mediado por reivindicaciones jurídicas que se han escenificado en las altas cortes. Allí los grupos interesados intentan normativizar el acceso a beneficios que tradicionalmente han estado confinados al modelo heterosexual de pareja y de familia. Aunque las Cortes no han sido el único espacio de manifestación social en búsqueda de ampliar el sentido y el reconocimiento de las relaciones de pareja y el establecimiento de lazos parentales más allá de la heterosexualidad, estas constituyen un lugar estratégico de cambio social debido a que ha sido el marco jurídico donde la visión tradicional de familia se ha cristalizado.

Con el interés de visibilizar relaciones de poder que han sido socialmente esencializadas, perspectivas feministas han entendido la heterosexualidad como una práctica sexual hegemónica, ligada a otras instituciones como la familia, la reproducción y la división sexual del trabajo; por tanto, una forma de dominación donde se regulan y limitan los roles de hombres y de mujeres. Inspirada en esta mirada, Ochy Curiel (2010), entiende la heterosexualidad como un acto normativo basado en la diferenciación sexual desde donde se entiende y se hace obligatorio lo que es un hombre y una mujer. La autora indica que en 1991 la Constitución Política de Colombia consagra a hombres y a mujeres desde la diferencia sexual y desde allí son convencidos de la heterosexualidad como forma imperativa de sexualidad y de conformación de “la familia”.

Sin embargo, esto no quiere decir que la totalidad de los ciudadanos comprendan y vivencien su sexualidad bajo un imperativo de diferenciación heterosexual. Grupos interesados en visibilizar y lograr reconocimiento de formas no heterosexuales de pareja han conseguido que la Corte Constitucional apruebe demandas sobre la protección del derecho a la pensión de la pareja del mismo sexo, el derecho de alimentos mutuos, y la protección patrimonial. Recientemente, los esfuerzos se han articulado en torno a la aceptación de lazos matrimoniales y la protección de las uniones del mismo sexo como familia. De este modo, ciudadanos y grupos interesados intentan mostrar la existencia de un sector social que no encuentra garantías para ejercer los mismos derechos civiles que un ciudadano o ciudadana heterosexual; esto significa, el cuestionamiento del modelo tradicional de diferenciación sexual y la negociación de categorías sociales desde allí definidas como la familia y la práctica efectiva de los roles parentales.

Así pues, la Corte Constitucional, se ha convertido en el principal escenario de la controversia en torno al reconocimiento y reclamación de derechos para las parejas del mismo sexo, y ha llegado a consolidarse como un lugar estratégico, debido a su carácter regulatorio, en la negociación del orden social sobre sexualidad, pareja y familia en la sociedad colombiana. Los reclamos jurídicos actuales sobre matrimonio igualitario y adopción gay evidencian que las exigencias de las personas con sexualidad alternativa no se limitan a las garantías individuales sobre salud y patrimonio, que por ahora han obtenido, sino que se han organizado para representar la naturaleza de sus uniones como matrimonio y la crianza de menores a su cargo como familia.

Movilización jurídica en torno al reconocimiento de la homoparentalidad en Colombia

Las acciones de tutela y las demandas de inconstitucionalidad, como estrategias de movilización jurídica, han estado orientadas a obtener diferentes resultados regulatorios. La Corte se pronunció a favor de los reclamos presentados en las acciones de tutela, los cuales presentan casos de personas homosexuales concretas que reclaman su reconocimiento como figuras parentales de menores que se encuentran a su cargo; mientras que en torno a las demandas de inconstitucionalidad, que se encuentran dirigidas al cambio de la ley, ha presentado varias respuestas que van desde denegar la primera demanda presentada en el 2000 hasta un pronunciamiento positivo sobre adopción gay como respuesta a la última demanda de 2014. A continuación la Tabla 1 presenta las acciones llevadas a cabo por los ciudadanos interesados en reivindicar las figuras homoparentales como familia.

Tabla 1.

Textos producidos en el debate jurídico sobre adopción gay en Colombia.

Demanda	Tipo de acción	Sentencias emitidas por la Corte Constitucional
Charles Burr en el 2011	Tutela	T-276 de 2012
Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero en el 2009	Tutela	SU-617 de 2014
Luis Eduardo Montoya Medina en el 2000	Inconstitucionalidad	C-814 de 2001
Luis Eduardo Montoya Medina en el 2008	Inconstitucionalidad	C-802 de 2009

Sergio Estrada Vélez, Karen Patricia Ramírez Arcila, María Camila Soto Moreno, David José Hernández Hoyos y Allan David Rodríguez Aristizábal en el 2011	Inconstitucionalidad	C-710 de 2012
--	----------------------	---------------

Sergio Estrada Vélez, Karen Ramírez Arcila, Allan David Rodríguez Aristizábal, Carlos Andrés López Pineda, Alejandro Sánchez Hincapié, Eliana Arango Restrepo, Daniel Bermúdez Herrera, Juan Pablo Morales Calle, Juan José Arango Ruíz, Daniel Felipe Valencia Vásquez, Angie Katherine Valdés Arroyave, Alejandra Hincapié Montoya y Camila Andrea Mazo Mejía en el 2014	Inconstitucionalidad	C-683 de 2015
---	----------------------	---------------

Fuente: elaboración propia

Frente a estas estrategias de reivindicación de la homoparentalidad la Corte expresó diferentes argumentos que representan un intento por establecer lo que es la familia en el país y lo que significa el cumplimiento de roles parentales para el cuidado de menores. En torno a la acción interpuesta por el ciudadano norteamericano Charles Burr, la Corte, establece la defensa de la adopción que había sido aprobada y ejercida por Burr pero que fue disuelta luego de que expresará su orientación homosexual. Este caso establece como discriminatorio negar o revocar adopciones solicitadas a título personal con base en la orientación sexual. Respecto a la acción de tutela interpuesta por Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero, una pareja de mujeres que concibió sus hijos mediante inseminación artificial, luego de casi cinco años¹ la Corte estableció la posibilidad de que la pareja accediera a la adopción consentida².

En torno a las demandas de inconstitucionalidad, el primer pronunciamiento de la Corte fue expresado en la sentencia C-814 de 2001. Allí la Corte declaró que el Código del Menor solo admite la adopción para las parejas unidas por el matrimonio y las parejas conformadas por un hombre y una mujer, y que el estudio de la inclusión de las parejas del

¹ La pareja de mujeres interpuso la acción de tutela en el 2009 y en el 2014 la Corte emitió la sentencia SU-617 con la cual se iniciaría el proceso de adopción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

² La adopción realizada por el compañero permanente del padre o madre biológico de un niño

mismo sexo para la adopción conjunta requiere evaluar si existe una comisión legislativa al respecto, asunto que no fue objeto de la demanda.

Posteriormente, un nuevo escenario de discusión surge cuando es expedido el Código de Infancia y Adolescencia de 2006 que reemplaza al Código del Menor. En respuesta a una nueva demanda de inconstitucionalidad en la sentencia C-802 de 2009 la Corte amplía, la discusión sobre la homoparentalidad remitiéndose a los efectos que tendría en el menor su convivencia con parejas homosexuales. Sin embargo, la Corte indica que la demanda no aborda todas las posibilidades en las cuales una persona homosexual puede adoptar sino que se limita a la posibilidad de adopción conjunta y no se refiere a la posibilidad de adopción consentida. La sentencia declara que expresar la inconstitucionalidad de las normas demandadas implica referirse simplemente a la adopción conjunta lo cual dejaría sin resolver los casos en los cuales existe un vínculo biológico y la pareja desea realizar un proceso de adopción consentida. Por ello el fallo declaró la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo.

En el 2012, la Corte se expresa nuevamente en torno a la homoparentalidad mediante la sentencia C-710 donde se declara inhibida para emitir un fallo. El texto de la sentencia expresa que el interés de los demandantes es que la Corte declare inconstitucional la imposibilidad de que las personas homosexuales puedan adoptar pero que el objeto demandado es la idoneidad moral; por esta razón los argumentos presentados por los ciudadanos son considerados incorrectos. De acuerdo con la Corte, la demanda trata de conducir al juez a resolver una controversia que no se relaciona con el objeto demandado.

Finalmente, en la sentencia C-683 de 2015 la Corte declaró exequible el Código de Infancia y Adolescencia demandado pero emitió un pronunciamiento aclaratorio expresando que dentro de las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia.

Toda esta movilización de intereses para la regulación de la homoparentalidad involucra el uso estratégico de recursos para tratar de establecer un orden social pro-homoparentalidad. Las acciones de tutela fundamentalmente movilizan la vulneración de derechos de las personas involucradas en el reclamo mientras que las demandas de inconstitucionalidad enmarcan el asunto de la homoparentalidad en términos de una violación inconstitucional de derechos. En principio, las demandas de 2000 y 2009, se concentraron en el trato discriminatorio hacia las personas homosexuales mientras que las demandas de 2011 y 2014 estuvieron orientadas a denunciar no solo la vulneración de la igualdad de las personas homosexuales respecto a las heterosexuales sino la violación del derecho de los niños a tener una familia reconocida por el Estado colombiano.

En ese sentido, las sentencias constituyen el foco de atención del presente análisis puesto que conforman el espacio de toma de decisiones donde las partes, a favor y en contra de la adopción gay, movilizan conocimientos para producir una comprensión pública y un

orden social respecto a la posibilidad de que las parejas del mismo sexo cumplan roles parentales en la sociedad colombiana. De tal manera, el siguiente análisis tiene como propósito evidenciar la toma de decisiones jurídicas en torno a la homoparentalidad, describiendo el uso de mecanismos jurídicos y de los conocimientos de los que hace uso la Corte, dentro de las sentencias, para estabilizar el orden social sobre las relaciones parentales y la definición de familia.

Hacia una perspectiva analítica en la toma de decisiones: reflexiones desde el estudio de la ciencia

El estudio del conocimiento científico ha contado con variadas perspectivas históricas, filosóficas y sociológicas que tratan de explicar cuál es el tipo de comprensión que la ciencia fabrica sobre la realidad y sobre cómo produce y moviliza cambios en nuestras formas de vida. El campo de los Estudios Sociales de la Ciencia (ESC) se ha consagrado como una perspectiva que se centra en describir la construcción de conocimiento científico como un asunto que responde a relaciones sociales y alianzas estratégicas entre actores sociales científicos y no científicos. Esta investigación se encuentra realizada desde la perspectiva de los ESC de ahí que a continuación realice una breve caracterización del campo.

Los investigadores en los ESC han desarrollado diversas estrategias para describir y discutir la producción social del conocimiento de ahí que este campo no pueda considerarse de forma homogénea. Shapin (1995a) identifica cuatro idiomas desarrollados en el campo de los ESC para comprender la producción de conocimiento: el realismo sociológico, las redes tecnocientíficas, la reflexividad del discurso y el conocimiento situado. El realismo sociológico se concentra en describir el conocimiento científico como condicionado a las relaciones sociales de aquellos que producen conocimiento; en esta línea de trabajo Michael Polanyi, Barry Barnes y David Bloor, señalan que recursos que generan confianza tales como la costumbre, la convención y los intereses son comunes para fijar hechos.

Respecto a las redes tecnocientíficas los ESC han tratado de comprender de qué manera la ciencia viaja en diversos contextos y genera una imagen social de conocimiento universal. A partir de esa inquietud, Bruno Latour y Michel Callon han visibilizado que algunos de los recursos mediante los cuales el conocimiento científico se hace exitoso son retóricos y técnicos, y que son articulados a redes de acción que hacen a la ciencia durable y aplicable a diversas circunstancias.

Por su parte, la reflexividad del discurso cuestiona las explicaciones acerca del conocimiento científico en términos de intereses; pues los intereses corresponderían, más bien, a un objeto de negociación en el proceso de producir conocimiento más que un factor desligado de esa producción. Además, esta mirada indica que, para evitar afirmar los hechos que se encuentran en discusión por un conjunto de actores, el análisis sociológico de la ciencia debe dar cuenta de las categorías culturales que las partes en una controversia tratan de defender.

Finalmente, el conocimiento situado se concentra en mostrar la variabilidad de las prácticas científicas a través de su dimensión local. Por ejemplo, Simon Schaffer, Michael Lynch y

Steven Shapin se han centrado en las condiciones de acceso, el equipamiento y el carácter privado o público de los laboratorios para describir los factores locales en la producción de ciencia.

Recientemente, los ESC continúan diversificándose pero comparten una mirada particular sobre la producción de ciencia y el conocimiento situado ha sido desarrollado en un sentido específico por parte de las críticas feministas a la ciencia. Básicamente, los ESC comparten la mirada simétrica sobre la producción de conocimiento. En los primeros años de formación del campo, David Bloor (1998/ [1976]) indicaba que la verdad o falsedad de un tipo particular de conocimiento es el resultado del proceso de su producción más que una característica inherente al mismo. A partir de este principio, los análisis sociológicos que pretenden dar cuenta de la producción de conocimiento se han encargado de describir simétricamente, es decir en los mismos términos, las acciones que cada una de las partes lleva a cabo para establecer un tipo de saber como verdadero y autorizado independientemente de si este conocimiento se considera como científico, pues es justamente el estatus del conocimiento lo que se trata producir en el ejercicio de hacer ciencia.

Por su parte, los estudios de ciencia feministas han identificado que el campo de los ESC puede guardar pretensiones de neutralidad y objetividad haciendo invisibles diversas relaciones sociales involucradas en la construcción del conocimiento sobre ciencia. Haraway (2004) señala que durante la producción de conocimiento algunos sujetos sufren procesos de marcación de género, clase o raza que convierten su saber en parcial, opaco y no objetivo frente a “el científico” que hace invisible sus propias marcas presentándose a sí mismo como un testigo modesto de la naturaleza y a sus descripciones como objetivas y neutrales no sesgadas por el espacio social que ocupa.

La crítica de Haraway permite revelar que las investigadoras y los investigadores en los ESC -así como en otros campos- no se expresan desde ninguna parte desde donde mantienen su simetría y neutralidad sino que lo hacen desde un espacio social, que debe hacerse explícito, pues es desde allí que problematizan la realidad. Como respuesta a la objetividad tradicional, la producción de un “conocimiento situado” que haga explícitas las marcaciones de las investigadoras, como parte del orden social que pretenden explicar, puede dar lugar a la construcción de un conocimiento responsable de lo que conoce, de cómo lo mira, que sea consciente y consistente con la parcialidad desde la cual es construido (Haraway, 2004). De esta manera, apropiar esta crítica en el presente trabajo involucra visibilizar la perspectiva desde la cual produzco un análisis sobre la adopción gay. Aunque un análisis situado no solo incluye la descripción sobre las marcaciones de mi mirada respecto a mi objeto de conocimiento sino también mostrar la parcialidad desde la cual las partes hacen uso de conocimientos expertos y evidenciar que, el hecho de definirlos como tal, implica unas relaciones de poder y de exclusión.

Así mismo el análisis situado involucraría la pregunta acerca de cómo la adopción gay significa una reivindicación de unos sujetos marginalizados; que, sin embargo, tras estar centrada en las parejas del mismo sexo puede significar la marginalización de personas bisexuales y transexuales como figuras parentales. De esta manera, el análisis situado es relevante para mostrar diversas aristas acerca de la reivindicación de figuras parentales no heterosexuales; sin embargo, en lo que se desarrolla a continuación se presentará un análisis simétrico referido a la movilización jurídica en torno a las sentencias C-802 de 2009

y C-710 de 2012. Un análisis situado requiere una mirada integral sobre la movilización social sobre la homoparentalidad, lo cual puede ser realizado de una forma adecuada fuera de las sentencias constitucionales en la que se muestren los anclajes sociales, económicos y culturales de categorías como la familia y los roles parentales. De ahí que al final del presente documento haya una presentación de los capítulos 3, 4 y 5 en los cuales se encuentra proyectado un análisis con componentes situados dentro y fuera de la sentencia.

Para finalizar esta introducción describiré la manera en la que abordaré de forma simétrica el análisis y señalaré brevemente, y quedando en deuda analítica con un análisis situado, mi propia posición sobre el objeto del debate que me propongo describir que aunque no reemplaza la descripción de los arraigos culturales que cada una de las partes, a favor y en contra de la homoparentalidad, trata de defender me permite ubicar la parcialidad de mi propio conocimiento. Realizar un análisis de tipo simétrico sobre la toma de decisiones en la adopción por parte de parejas del mismo sexo, puede evitar la pretensión de otorgar autoridad al conocimiento de una u otra parte del debate. Por ello, en este trabajo, me alejo de la pretensión de otorgar validez o desautorizar el conocimiento de las partes involucradas en el debate sobre adopción gay puesto que mi análisis consistirá en evidenciar cómo los actores sociales usan y producen el conocimiento para defender una posición y, dentro de este uso, me pregunto cómo intentan desprestigiar y autorizar cierto tipo de evidencia. Es decir que trato la veracidad del conocimiento como un aspecto que los actores negocian, puesto que, como indica Collins (1995/[1975]) la verdad y el error justamente están en proceso de construcción en las controversias.

De este modo, describiré el conocimiento de las partes como formas de defensa de unas nociones específicas de sexualidad y de familia que se encuentran en debate debido al desafío que involucra el reconocimiento de la homoparentalidad en Colombia para las formas tradicionales de familia. Por ejemplo, algunos de los aspectos que han estado en discusión son, la eficacia de los roles parentales de parejas del mismo sexo ante la ausencia de una figura masculina y femenina, el desarrollo integral de los menores en un entorno homoparental y su entendimiento de los roles de género.

Respecto a mi posición sobre el debate, me ubico en un espacio social en el que cuestionó la familia tradicional (madre, padres e hijos) como única forma de establecimiento de lazos parentales, puesto que el reconocimiento exclusivo de esta conformación familiar justifica ejes de dominación heterosexual que condicionan y niegan la legitimidad, no solo de las familias homoparentales, sino la diversidad en la renovación de las generaciones y el cuidado de los menores que muchas veces toman la forma de familias monoparentales, familias conformadas por tíos, tías o abuelos. Es decir que, considero que las conformaciones familiares no se limitan a lazos establecidos por herencia biológica, sino que se extienden a otro tipo de vínculos relacionados con el cuidado, el apoyo mutuo y el afecto.

Así pues, el presente trabajo busca visibilizar la homoparentalidad como una de esas variadas conformaciones familiares que han sido mantenidas al margen del reconocimiento social y jurídico pues involucra tensiones que han sido concentradas en la Corte tanto por los interesados en que el concepto de familia se extienda a las parejas del mismo sexo como por aquellos que tratan de defender una noción tradicional, heterosexual y de diferenciación sexual en los roles parentales. A continuación presento la investigación en cinco capítulos de los cuales el primero se concentra en presentar los elementos

conceptuales que, desde el campo de los ESC, permiten pensar el papel del conocimiento experto en las cortes. El segundo capítulo, corresponde a un escrito analítico en el cual se discuten y evidencian algunos de los conceptos presentados en el primer capítulo. Los capítulos tercero, cuarto y quinto corresponden a propuestas analíticas sobre la movilización de los expertos, las respuestas del público al debate y el papel de los medios de comunicación en la configuración de concepciones y posturas sobre la adopción gay; estos últimos capítulos son esencialmente esbozos para su subsecuente desarrollo pues involucran un proceso investigativo completo. Además, incluyo un anexo en el que presento el proyecto de maestría, que originó la presente investigación, donde puede verse un esquema preliminar de las ideas que son desarrolladas en lo que sigue.

1. Toma de decisiones públicas como escenario de circulación, uso y producción de experticia

Los ESC constituyen un campo de conocimientos en el que los investigadores realizan seguimiento a la producción de ciencia donde quiera que esta se presente. Esto quiere decir que, aunque algunos trabajos se han dedicado a analizar las prácticas en el laboratorio, evidenciando que los científicos transportan estratégicamente sus hallazgos desde la incertidumbre hasta el establecimiento de un hecho que llega a ser considerado indiscutible por la comunidad científica (Knorr-Cetina 1981; Latour, 1992; Woolgar, 1991) los analistas no se han limitado a describir la construcción de hechos en contextos que pueden identificarse como característicamente científicos.

El campo de los ESC ha descrito a la ciencia como un recurso que contribuye a configurar formas de vida en los seres humanos y a su vez como un conocimiento que es reconfigurado justamente por la manera en la cual las personas se relacionan con la tecnociencia (Law, 2004). De ahí que, en línea con una visión sociológica del conocimiento, investigaciones en el campo se han dirigido a explorar la producción, circulación y uso de la ciencia, fuera del laboratorio y las revistas especializadas, hacia el escenario público donde es utilizada por grupos interesados y por tomadores de decisiones para establecer políticas públicas y sentencias jurídicas (Endmond y Mercer, 2000; Hannah 2011).

El caso analizado en el presente trabajo, justamente, responde a estas dinámicas de articulación de conocimiento científico y toma de decisiones públicas. En la movilización jurídica sobre la adopción gay en Colombia, el conocimiento especializado de la psicología, el derecho y los activistas en diversidad sexual fue convocado al servicio de la Corte Constitucional en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 para resolver demandas de inconstitucionalidad que buscaban la posibilidad de que las parejas del mismo sexo realicen procesos de adopción de la misma forma que lo hacen las parejas heterosexuales.

Dentro de los recursos de comunicación y circulación de hechos dentro de la comunidad científica, la escritura juega un papel fundamental pues permite establecer autoridad y credibilidad para producir de forma efectiva hechos naturales y sociales (Bazerman, 1988; Shapin, 1995b; Restrepo, 2004). Pero en el ámbito jurídico no opera el mismo lenguaje que aquel que circula en la ciencia; posiblemente en los documentos de la Corte son conjugadas las formas de autoridad científica y la jurídica. Por ello es relevante identificar

cuál es el papel de los conocimientos especializados en las sentencias jurídicas que dirimen las discusiones de constitucionalidad sobre la adopción gay en Colombia. Tanto en la ciencia como en el derecho hay diferencias en la manera en la que es producido, utilizado y movilizado el conocimiento; el que hacer de los científicos ha sido tradicionalmente entendido como asociado a la generación de un saber sobre la naturaleza o la sociedad mientras que el qué hacer de jueces y abogados ha sido entendido como referido a la producción de justicia (Caudill, 2002).

Sin embargo, en la Corte Constitucional es común que participen actores intervinientes dentro de los cuales se cuentan representantes de conocimientos especializados que la misma Corte considera como relevantes para resolver un caso particular. Por ello, las relaciones entre ciencia y derecho constituyen un campo de interés para registrar las formas en las que son articulados dos ámbitos que rara vez son entendidos como asociados. La Corte requiere de expertos porque de hecho los problemas que son introducidos en el ámbito jurídico resultan siendo tratados de una forma altamente especializada.

En el ámbito del derecho Bernal (2006) indica que la demanda de inconstitucionalidad es un medio de acción pública porque todos los ciudadanos pueden hacer uso de esta y argumenta que se trata de una herramienta que ameniza los rigores técnicos del derecho pues no es concebida únicamente para los especialistas en el tema sino para los ciudadanos que consideren vulnerados los derechos consignados en la Constitución. Sin embargo, el despliegue de recursos textuales en la Corte, incluyendo los expertos que cita para resolver cada demanda de inconstitucionalidad, reintroduce los términos del problema social al ámbito específicamente jurídico haciendo de la demanda una cuestión especializada que es entendida como un problema de derechos.

Es decir que, aunque las demandas de inconstitucionalidad son un instrumento de movilización de problemas públicos se trata de una cuestión que es definida y resuelta en términos expertos. Específicamente, las personas interesadas en la defensa de la homoparentalidad apropian y usan estratégicamente el lenguaje del derecho para defender un modelo de familia alternativo al heterosexual. Adicionalmente, los magistrados de la Corte movilizan los objetos demandados hacia comunidades de expertos en áreas que consideran estratégicas para el proceso de decisión. La sofisticación con la que son tratadas las acciones públicas no es una cuestión extraña pues Collins (1995/[1975]) ha señalado que una controversia que despierta amplias tensiones hace que la discusión tienda a tecnificarse. Algo similar puede ser identificado para los casos de inconstitucionalidad que resuelve la Corte, pues se trata de problemas que son convertidos en preocupaciones públicas por ciudadanos que esperan una respuesta a su demanda de derechos. De ahí que la Corte realice su proceso de toma de decisiones articulando diversos conocimientos expertos para solucionar tensiones generadas por las demandas de inconstitucionalidad.

Particularmente, la discusión sobre la homoparentalidad ha involucrado un uso estratégico de la experticia para estabilizar intereses alrededor de la categoría de familia y en torno al establecimiento de quiénes deben cumplir roles parentales. El campo de los ESC ha rastreado diferentes casos en los que actores sociales definidos como “expertos” participan en el foro público defendiendo los intereses de las partes. Por ejemplo, Jasanoff (2008) ha identificado que en virtud de esa relación intrincada entre experticia e intereses sociales

algunos actores dentro de una controversia se concentran en cuestionar la autoridad y legitimidad del conocimiento de la contraparte como estrategia para debilitarse mutuamente. En ese sentido, el campo de los ESC revela el problema de la representación de la autoridad y de la validez del conocimiento científico como un componente estratégico para que una de las partes en una controversia para definir el orden social acorde con sus intereses.

En el proceso de toma de decisiones la cuestión de la autoridad es relevante debido a que los posicionamientos en contra o a favor de la homoparentalidad pueden estar representados por los expertos y en ese sentido la Corte puede encontrarse con evidencia que apoya perspectivas contradictorias en la controversia. Dentro de las posibilidades analíticas para el registro de intereses, experticia y su articulación al foro público los investigadores en los ESC han desarrollado los análisis de controversias, los cuales constituyen un tipo de análisis dentro del campo, que permiten dar cuenta de los esfuerzos de las partes en disputa que defienden una versión particular de lo que, en la posteridad, llegan a considerarse hechos (Collins y Evans, 1993). Dado que las demandas interpuestas en la Corte involucran un uso estratégico de conocimientos especializados partes el análisis del debate sobre adopción gay desde los ESC permite caracterizar la producción y el uso de la ciencia, y de otros conocimientos, a través del proceso de decisión como un escenario en el cual se ensamblan y negocian intereses, saberes y concepciones sobre categorías sociales como “la familia”.

Algunas investigaciones en los ESC que tratan de dar cuenta del uso del conocimiento en escenarios públicos, han optado por análisis de controversias públicas para caracterizar las complejas formas de producción de conocimientos, intereses sociales y estilos de negociación en la construcción de decisiones sobre políticas y regulación jurídica (Turner, 2001). Para el caso de la adopción gay, el análisis de la controversia en el ámbito jurídico permite evidenciar las acciones que los grupos interesados realizan a favor o en contra de la homoparentalidad y para describir cómo las movilizan discursivamente en las sentencias de la Corte Constitucional para dotarlas de un carácter normativo a favor o en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

De acuerdo con lo anterior, el presente apartado tiene como propósito mostrar algunas herramientas analíticas desde el campo de los ESC para dar cuenta de la movilización social por la homoparentalidad en Colombia como una controversia pública en la cual son ensamblados conocimientos, intereses y valores acerca de la sexualidad y la familia. Este tratamiento permite el registro y análisis de conocimientos especializados y papel en la toma de decisiones públicas a través de las sentencias sobre adopción gay. A continuación el presente apartado se encuentra desarrollado en seis secciones; en la primera, describo las particularidades del campo jurídico que hacen que la cuestión sobre la homoparentalidad se transforme en un problema público en donde participan actores sociales que representan los intereses de las partes en conflicto; particularmente, resalto el rol del lenguaje en la definición del problema social como un asunto que es interpretado de forma estratégica en términos de derechos tanto por los actores intervinientes a favor de la adopción gay como aquellos en contra.

En la segunda sección, señalo elementos que me permiten pensar la forma estratégica en la que es definido y movilitado el conocimiento como un saber experto mientras que en la tercera sección llevo estas herramientas conceptuales al ámbito de la toma de decisiones para dar cuenta del ensamblaje del conocimiento experto en el escenario jurídico. En la

cuarta sección, retomó el idioma de co-producción como una idea que es útil para describir las formas en las cuales el ámbito jurídico y el científico llegan a constituir híbridos tanto sociales como técnicos para el establecimiento del orden social lo cual me brinda pistas para comprender el papel de la ciencia en las cortes. En la quinta sección, identifiqué la articulación de conocimientos especializados a la toma de decisiones jurídicas como una estrategia de movilización y construcción de las categorías sociales en discusión que son discutidas y establecidas en las sentencias. Finalmente, en la sexta sección presento la posibilidad que brinda un análisis narrativo para dar cuenta de los marcos culturales que se encuentran en tensión en el debate sobre la adopción gay.

1.1 Movilización social a través del ámbito jurídico: la “adopción gay” como un problema convertido en un asunto de interés público

Desde una posición que defiende la independencia de los ámbitos político y jurídico algunos académicos del derecho y de las ciencias sociales han caracterizado la participación de las Cortes en decisiones sobre políticas y controversias públicas como un fenómeno de “judicialización de la política” (Ferejohn, 2002; Couso, 2004). Desde esa perspectiva, las fronteras de lo jurídico y lo político son concebidas como infranqueables; es decir que las acciones de las Cortes, en debates de interés público, representarían una forma de intromisión de la esfera jurídica en los asuntos propios de la política. Esta concepción parece, de este modo, partir de unos lugares y funciones propios de “lo jurídico” y “lo político”.

Sin embargo, desde el campo de los ESC los juicios acerca del “verdadero qué hacer” de unos escenarios y otros hacen parte de la labor analítica más que de las conclusiones a las que se puede llegar en la investigación. La defensa de una discusión como un asunto político, científico o jurídico en ocasiones juega un papel relevante en una controversia pública debido a que las partes pueden tratar de asegurar la intervención de las instituciones a fines con sus intereses y desprestigiar la participación de aquellas que los amenazan (Bocking, 2005). Así, la definición de un asunto como problema jurídico o político se encuentra enmarcada en la controversia misma y en la manera en la que las partes tratan de privilegiar su propio punto de vista.

En el caso de la “adopción gay”, esto quiere decir que el análisis no puede tratar sobre la competencia de la Corte para regular la conformación de familias homoparentales en Colombia; sino que ha de centrarse en describir las estrategias mediante las cuales los grupos a favor de la homoparentalidad han logrado instaurar el debate en el terreno jurídico. Además, el análisis puede evidenciar de qué manera los grupos en contra de la homoparentalidad se han esforzado por discutir el papel de la Corte como instancia reguladora con el propósito de quebrantar los intereses a favor de la homoparentalidad que han logrado establecer la controversia sobre la “adopción gay” como un asunto de derechos.

La Teoría del actor-red ha proporcionado herramientas para dar cuenta del orden social como un producto de diversas articulaciones entre actores sociales, se trataría de una red en la que aparecen entrelazados ámbitos como el político, el social, el económico, el

religioso, y el científico (Callon, 1986; Latour, 1992; 2010). Desde esta aproximación, la sociedad estaría constituida por redes de actores que en virtud de sus relaciones estabilizan formas particulares de realidad. En ese sentido, desde la teoría del actor-red resultaría innecesario concebir los campos jurídico y político como algo esencialmente diferente, sin cruces o ensamblajes. Más bien, sería pertinente registrar la manera estratégica en la que los ciudadanos han convertido los escenarios jurídicos en centros de toma de decisiones políticas y de este modo, han logrado instaurar la “adopción gay” como un objeto de discusión pública tanto político como jurídico en el que intervienen y se relacionan diferentes actores como los activistas, los expertos y la Corte.

En el campo del análisis de las sentencias constitucionales en nuestro país, Rodríguez & Rodríguez (2010) describen que, una vez los problemas públicos llegan a la instancia de las altas Cortes sufren una serie de transformaciones que los convierten en asuntos de orden jurídico; a este proceso lo identifican como “efectos creadores de la Corte”. Los autores argumentan que estos efectos creadores convierten los problemas en un asunto de derechos que, en ocasiones, es resuelto con un marco socio-jurídico que involucra la definición de ciertas personas como sujetos de derecho. En el estudio de caso sobre la regulación de la Corte en torno a los desplazados en Colombia, Rodríguez & Rodríguez, argumentan que la expedición de la Ley 975 de 2005 genera un cambio en la concepción y en las relaciones sociales asociadas a este grupo ya que internamente pasaron de ser considerados “efectos secundarios de la guerra” a “víctimas de la guerra” y por tanto merecedores de medidas de protección y reparación por parte del Estado.

Así mismo, Powell, Yurk & Pizmony-Levy (2015) llaman la atención acerca del poder constitutivo del derecho para referirse a la idea de que la ley forma las normas y valores sociales puesto que las personas alinean sus ideas de qué es bueno de acuerdo con su conocimiento de la ley, si es legal entonces es más fácilmente aceptado como legítimo si no lo es entonces difícilmente es legible y aceptado. De este modo, los intentos regulatorios de la Corte constituyen medidas para la construcción de un campo socio-jurídico que conlleva a la comprensión de un asunto social como “problema” que requiere de la acción jurídica y la resolución otorgada por la Corte dota de legitimidad el particular asunto que es objeto de debate.

En ESC, esa particular construcción del campo socio-jurídico de la “adopción gay” en Colombia puede retratarse como una forma de producción y estabilización de una red sociotécnica entre los actores que terminan estableciendo el orden jurídico colombiano sobre formas de familia y parentalidad legibles social y legalmente. Así, la descripción del marco que ha construido la Corte para resolver el debate sobre “adopción gay”, me permite identificar las diferentes definiciones sobre las parejas del mismo sexo y los menores como sujetos de derecho y rastrear los esfuerzos de los actores por consolidar ciertas identidades como válidas para establecer una familia reconocida por el Estado colombiano.

Particularmente, la controversia sobre la homoparentalidad en Colombia involucra una tensión con el proyecto político de la mayoría con el propósito de proteger a las parejas del mismo sexo como identidades válidas para establecer relaciones parentales. De acuerdo con Gómez (2009) este nuevo modelo de familia genera resistencia pues significa la desarticulación del régimen heterosexual como proyecto de nación centrado en la familia nuclear para el cuidado de los menores encabezado por las mujeres y el control de la reproducción humana. De este modo, la reivindicación jurídica de la adopción gay

representa una cuestión pública pues se articula a ciertos proyectos de nación que las partes interesadas tratan de establecer; por un lado un modelo basado en la diferencia sexual y la especificidad de los roles parentales de acuerdo al género en el que la homoparentalidad no tendría cabida y por otra parte se encuentra el modelo que trata de movilizar la parte a favor de la homoparentalidad para que la adopción por parte de parejas del mismo sexo sea avalada.

Justamente, este trabajo se plantea registrar la fabricación de ese modelo que los actores intervinientes en las sentencias tratan de establecer para que el estado colombiano legitime la conformación de familias homoparentales. Para dar cuenta de ello, en parte es necesario, realizar el seguimiento de la construcción de la red que cada parte trata de instaurar en la corte para la restricción o ampliación de fronteras entre identidades que pueden establecer vínculos familiares a través de un contrato civil (la adopción) y aquellos que no según su orientación sexual. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones no se limita a la fabricación mecánica de un orden social particular dictado mediante sentencias constitucionales. De acuerdo con Leigh-Star (1991) la perspectiva del actor-red hace un excesivo énfasis en el producto final de la red (un tipo particular de orden social) desestimando las relaciones entre los actores que quedan fuera de esa red. Para la autora, las externalidades de la red son aquellas relaciones que son propiciadas por el orden social pero que no se encuentran incluidas en el mismo. En el caso de la adopción gay, esto quiere decir que las redes de conocimiento y actores que instauran modelos de familia, que rechazan o aceptan la homoparentalidad, son diversas; de esta manera, una vez se establece un orden sobre la adopción gay nuevas acciones, a favor o en contra, pueden ser llevadas a cabo.

Esta crítica llevada al análisis de la toma de decisiones significa que; primero, fuera de las decisiones de la Corte pueden establecerse nuevas relaciones y estrategias entre los actores excluidos del orden social para sostener sus intereses; y segundo, el proceso de toma de decisiones involucra la restricción de órdenes alternativos representados en esos grupos y personas que son dejados por fuera de la regulación jurídica. Respecto al proceso de decisión sobre la “adopción gay” la crítica de Leigh-Star permite visibilizar que, en primer lugar los intereses de los grupos excluidos de las decisiones jurídicas pueden configurar nuevas estrategias de renovación del debate. De hecho, el desarrollo de la controversia sobre “adopción gay” en el país muestra ese carácter cambiante y estratégico ya que las acciones a favor de la homoparentalidad se han movilizado de diferentes maneras a través de tutelas (2008 y 2010) y de las demandas constitucionales (2007, 2009 y 2012) tratando de establecer redes de legalidad para la “adopción gay”.

En segundo lugar, la negociación sobre la adopción involucra la restricción de órdenes alternativos. En este sentido es que, los intereses en contra de la homoparentalidad han intentado caracterizar como ilegítima la reivindicación de la adopción como un derecho de las parejas del mismo sexo mientras que los intereses a favor de la homoparentalidad tratan de establecer como ilegítima la negación del derecho a la adopción de acuerdo con la orientación sexual o definir como ilegal la negación del derecho del menor a una familia independientemente de la orientación sexual de sus padres.

De acuerdo con lo anterior, las relaciones y acciones de los actores pueden dar cuenta de las estrategias para el establecimiento de un orden social particular sobre “adopción gay”. Sin embargo, la estabilización de una red de relaciones entre actores no niega el hecho de

que los grupos socialmente excluidos del orden social puedan movilizarse estratégicamente para transformar, reemplazar o desvirtuar la red. Con esto, el análisis de la regulación jurídica sobre la adopción en parejas del mismo sexo no puede limitarse a contar una historia desde la decisión final de la Corte, sino que incluye, junto a la descripción del proceso de decisión, la identificación de las diversas maneras en las que las decisiones posibilitan movilizaciones posteriores, bien sea para defender o negar el reconocimiento legal de la homoparentalidad.

1.2 Más allá de la división entre legos y expertos: los ensamblajes para la producción de conocimiento legal

El conocimiento científico circula y se articula a diferentes ámbitos. No solo transita en la televisión (Casallas, 2011), en la prensa (Mulkay, 1993) o en la Corte sino que, en cada uno de estos escenarios, el conocimiento científico es producido y utilizado de manera particular. Caudill (2002) señala que, particularmente, los tribunales se han convertido en consumidores de discursos técnicos. Al respecto, Jasanoff (1997) indica que, las cortes son productoras del ambiente en el que la ciencia y la tecnología llegan a tener utilidad, significado y fuerza, y esto se debe, en gran medida a la utilización y desarrollo de la tecnociencia como mediadora en los procesos de toma de decisiones. Lo que quiere decir que, en ese proceso de uso de la ciencia, no se puede perder de vista que los diferentes escenarios- prensa, publicidad y cortes- no solo consumen sino que también propician la fabricación de conocimiento.

El campo de los ESC ha intentado caracterizar el papel que juega el conocimiento en el escenario jurídico; las indagaciones van desde la identificación de las técnicas por las cuales las cortes legitiman o excluyen posibles interpretaciones técnicas (Jasanoff, 1997; Zeedyk y Raitt, 1998) hasta la descripción de las estrategias de las partes para debilitarse mutuamente, por ejemplo realizando cuestionamientos a la evidencia científica (Endmond, 2002). El trabajo de Collins & Evans (2002) ha sido considerado paradigmático puesto que brinda una lectura sobre la manera en la que los ESC han dado cuenta sobre el papel del conocimiento especializado en la toma de decisiones.

La propuesta analítica de Collins & Evans se encuentra orientada a caracterizar el conocimiento experto en el contexto de la toma de decisiones debido a que en ese espacio de discusión hay puntos en los que la ciencia y la tecnología se intersectan con la política. Los autores señalan que los estudios sociológicos sobre ciencia han indagado acerca de la experticia, específicamente, describiendo las bases sociales del conocimiento que es producido, movilizado y utilizado en la toma de decisiones. Sobre este punto, los autores realizan una clasificación de las “tres olas” en los estudios del conocimiento científico en el dominio público, cada una de las cuales representa diversas posturas epistemológicas y concepciones políticas sobre el papel de los científicos en el escenario público.

La primera ola, socava la idea de la ciencia como único saber legítimo puesto que enfatiza en que no es claro el especial acceso de la ciencia a la verdad frente al saber, igualmente construido, de otros tipos de conocimiento. La segunda ola, revela el papel de los

científicos como agentes no solo de conocimiento sino también de la política que responden a factores extra-científicos puesto que es común que las controversias no se definan por criterios científicos sino con base en factores políticos, sociales, morales, etc. Finalmente, la tercera ola llama la atención acerca de que la comunidad científica maneja diferentes grados de incertidumbre, por lo general, invisibles para el público. De manera que, esta ola se centra en la pregunta sobre cuáles son las acciones que realizan los expertos cuando, en condición de incertidumbre, deben contribuir con argumentos a la toma de decisiones.

La revisión de Collins y Evans esquematiza las indagaciones de los ESC en tres grandes campos, el de la legitimidad, la autoridad y las fronteras de la experticia. Esta organización está orientada a realizar una propuesta normativa de la experticia según la cual los estudios de ciencia deben utilizar el conocimiento sobre el conocimiento para contribuir en los debates públicos. La idea en la cual los autores fundamentan esta posición es que los expertos son definidos antes de la batalla, antes de que la historia ha sido hecha y en ese sentido los actores están haciendo la historia no reflexionando sobre ella, de ahí que los sociólogos encargados de indagar por el uso del conocimiento debieran participar en el establecimiento del papel del conocimiento lego y del conocimiento experto. Sin embargo, esta manera de enmarcar los trabajos sobre experticia promulga y mantiene la división entre los expertos y el público que, investigaciones sobre controversias específicas, han problematizado argumentando que es justamente en la controversia que las experticias y sus públicos se definen.

En la esfera local, y en lo que se refiere a la experticia psicológica, las indagaciones sobre la articulación del conocimiento experto y al ámbito público se han concentrado en perspectivas de carácter histórico que dan cuenta de “lo psicológico” como parte de un ensamblaje social y político particular. En esta línea, Mora-Gámez (2012), caracteriza la demarcación y la estabilización del conocimiento disciplinar de la psicología en Colombia en relación con la implementación de tecnologías de modificación del comportamiento en la Cárcel el Buen Pastor durante los años 70s. Sobre este hecho, el autor se concentra en comprender la psicología como un tipo de experticia que reclama un dominio cognitivo a través de un dispositivo técnico, la modificación del comportamiento, que le permite construir su objeto en el país fortaleciendo una perspectiva particular del campo de lo psicológico, el conductismo.

Adicionalmente, Jaraba (2014), revisa el mito fundador de la psicología en Colombia, reconstruyendo la discusión sobre la implementación de dispositivos psicométricos en la Universidad Nacional durante entre 1939 y 1950. Alejándose de la figura de Mercedes Rodrigo como mito fundador de la psicología en Colombia, Jaraba especifica la manera en que la experticia de la psicología no tenía un lugar obvio en la universidad, y por el contrario, este lugar fue en parte construido mediante la adscripción de la experticia psicológica en la discusión pública sobre la implementación de modelos aristocráticos y democráticos de educación.

Desde un punto de vista volcado hacia la descripción de los actores que participan y actúan en una controversia, la experticia no sería una categoría que responde al grado de conocimiento especializado de unos grupos sino un modo de relación entre el conocimiento producido por algunas personas que han sido acreditadas como expertos frente a otros que solo cuentan con su experiencia y por ello son definidos como legos (Jasanoff, 2012).

De ahí se deriva, la autoridad de “la palabra” de unos actores respaldados por titulaciones e instituciones frente a otros que cuentan con un conocimiento que no es socialmente legitimado por procesos de educación formal, o por la representación de entidades públicas y privadas.

Los trabajos realizados por Mora-Gámez (2012) y Jaraba (2014), se enmarcan dentro de los esfuerzos por estudiar la producción de experticia en contextos regionales, políticos e institucionales específicos y complejizar las relaciones entre experticia y público. Los ESC se han concentrado cada vez más en comprender la experticia como un logro dentro del desarrollo de la controversia; mientras que la perspectiva de Collins y Evans promueve y asume una distinción entre el conocimiento experto y la experiencia de los “legos” como si, esta demarcación, se pudiera establecer de manera previa al desarrollo de la controversia.

De esta manera, definiciones de la experticia por fuera de las dinámicas, lógicas y contingencias de la controversia misma pueden asumir una correspondencia entre el conocimiento científico y la experticia. Por contraste, los análisis de casos específicos han evidenciado que las fronteras del conocimiento son un asunto negociado entre los actores involucrados en la controversia y que el público cuenta con diversas formas de experticia en ocasiones apropiadas por los expertos científicos (Jasanoff, 2008; Wynne, 2004). El reconocimiento del carácter contingente y negociado de la experticia involucra, entonces, su descripción como un proceso dentro de la controversia, más que como un recurso que se encuentra definido previo al surgimiento y resolución de la controversia misma.

Esto significa que, los temas de las olas descritas por Collins y Evans se pueden nutrir con el giro interpretativo que proponen trabajos posteriores que resaltan el carácter pragmático de la experticia, es decir su definición en contextos sociales y culturales particulares (Nowotny, 2003). En el caso de la adopción gay en vez de asumir que los actores, que participan con conceptos científicos o jurídicos en las sentencias, cuentan con un tipo particular de experticia; una perspectiva pragmática contribuye a comprender cómo es que estos actores llegan a ser considerados expertos por parte de la Corte y qué es lo que los actores hacen de la experticia. Así mismo, una perspectiva volcada hacia el contexto específico que provee el ámbito jurídico, permite dar cuenta de la legitimidad, la movilización de intereses sociales y la incertidumbre como producto de las interacciones específicas entre los actores involucrados en las decisiones de la Corte y no como simples derivados de la separación entre expertos y públicos que corresponderían a categorías definidas y redefinidas dentro del texto de las sentencias.

En ese sentido, la descripción del conocimiento experto para el caso de la controversia sobre homoparentalidad requiere identificar cómo y con qué propósitos los actores sociales han hecho de la psicología un conocimiento necesario para contribuir a la regulación de la adopción gay. Igualmente, el análisis de la configuración de la experticia en el caso de la adopción para parejas del mismo sexo, podría revelar aspectos relacionados con el papel de los expertos respecto a la movilización de intereses sociales en la Corte y permitiría señalar cuáles son las condiciones de incertidumbre bajo las cuales actúan en el escenario público.

Adicionalmente, lejos de asumir la aceptación de las fronteras de conocimiento de unos actores expertos y otros asumidos como usuarios de ese saber especializado, el campo

de los ESC se ha concentrado en registrar y documentar relaciones enriquecedoras entre legos y expertos visibilizando que estas categorías de actores llegan a constituirse por marcadores sociales tales como los títulos universitarios y la representación institucional de los expertos pero que no son exclusivos de estos puesto que actores considerados “legos” pueden llegar a una organización tal que las fronteras de la experticia pueden hacerse borrosas (Wynne, 2004). Esto quiere decir que, el establecimiento de un conjunto de conocimientos como relevante para la controversia involucra una cuestión de autoridad pero que esa legitimidad del conocimiento no se limita a los actores que son reconocidos como expertos sino que se trata de una compleja articulación entre los actores involucrados en una controversia.

De hecho en ocasiones las clasificaciones y definiciones de los expertos pueden ser discutidas o reconfiguradas por el público cuando se moviliza de forma activa. Epstein (1996) encuentra que en relación con la tendencia a construir la diferencia sexual como patológica pacientes y activistas han encontrado la forma de discutir esta idea argumentando que se trata de una población con necesidades específicas en salud. Particularmente, los grupos en defensa de la población gay se movilizan para establecer una agenda de investigación estratégica; por ejemplo, tratan de que los expertos reconozcan a la comunidad gay como un subgrupo que requiere atención específica y se movilizan para que realicen estudios especializados sobre la eficacia de los condones para prevenir el VIH. Es decir que, frente a las normas de clasificación de la biomedicina los activistas pueden articular sus propios intereses y tratar de orientar el diseño de agendas de investigación por parte de los expertos.

Para el caso de la adopción gay la perspectiva de Epstein, acerca de la manera en la que diversos actores políticos construyen interpretaciones sobre las clasificaciones y diferencias entre grupos para articular sus propósitos, permite cuestionarse acerca de cómo los actores involucrados emplean marcos que enlazan argumentos de justicia con la diferencia biológica entre hombres y mujeres para defender o rechazar la homoparentalidad. Así pues, la controversia sobre la homoparentalidad representa la competencia por paradigmas biopolíticos sobre la diferencia, lo que en términos de Epstein (2007) significa tensiones por formas de definir, conocer y gobernar a las poblaciones, y en el caso aquí analizado involucra al género y a la orientación sexual para la definición de las categorías de familia y de roles parentales, y de acuerdo con ello la inclusión o exclusión de las personas homosexuales de esas formas de relación.

En torno a la relación entre expertos y público, Callon & Rabeharisoa (2003) han argumentado que es un malentendido postular la ignorancia de los legos así como reivindicar solo el conocimiento experto como verdadero; estos autores comprenden el conocimiento lego y el conocimiento experto como mutuamente enriquecedor, como conocimientos que no se contradicen ni se sustituyen, que no son intrínsecamente diferentes puesto que el conocimiento lego no es siempre tácito e informal y el experto no siempre es tan estructurado como se asume. Los autores evidencian esto en el caso de la Asociación Francesa contra las miopatías donde los pacientes en virtud de sus interacciones pueden ser considerados como investigadores genuinos que trabajan en cooperación con los médicos. De ahí, Callon & Rabeharisoa identifican que los pacientes y los investigadores son necesarios en lo que llaman el campo silvestre o salvaje (*in the wild*), donde acontecen los fenómenos que son necesarios para generar conocimiento.

El trabajo de Callon & Rabeharisoa indica que, no solo el laboratorio es el escenario de los expertos y el consultorio el espacio de los pacientes; sino que ambos actores se articulan para generar conocimiento de forma productiva. Por lo tanto, las relaciones entre lo que se ha identificado como legos y expertos puede también describirse en términos de grupos mixtos que generan conocimiento mediante nuevas formas de colaboración y traducción que tienen lugar tanto en el campo como en el laboratorio. Así, pues los actores que participan en las sentencias sobre adopción gay como los ciudadanos, los magistrados, los expertos administrativo-jurídicos, los expertos en psicología y los activistas pueden instaurar formas de cooperación en las que se hibridan y construyen conocimientos y experiencias más allá del lugar establecido de unos como conocedores y otros como simple usuarios del saber.

Complejizar las relaciones entre los actores sociales en términos de los productos de conocimiento, generados por sus interacciones, nos aleja del error de asumir la versión de una de las partes, a favor o en contra de la homoparentalidad, respecto a que unos poseen el saber correcto y otros están equivocados. Es decir que, rastrear la interacción entre todos los actores de las sentencias propicia un análisis simétrico que no privilegia una de las versiones. Además, la corte puede considerarse como un campo “silvestre” en el que emergen diversas producciones de los científicos, los expertos jurídicos, los activistas y los ciudadanos.

Como he indicado anteriormente, en parte, la resolución de los problemas depende de la manera en la que son enmarcados. Al respecto, Jasanoff (2003) señala que en el ámbito jurídico funciona una tecnología de la predicción en la que los actores realizan traducciones de los problemas sociales a los términos del derecho para que sean discutidos y solucionados. Sin embargo, la autora argumenta que, de este modo, el sistema jurídico invisibiliza riesgos, incertidumbres y desconocimientos en el proceso de toma de decisiones pues no se trata de un proceso automático y desligado de intereses, por el contrario se trata de una formulación estratégica de problemas sociales a los términos jurídicos. Por ello, Jasanoff argumenta que, una “tecnología de la humildad” permitiría establecer un consenso mucho más consiente de la pluralidad de puntos de vista y el aprendizaje colectivo.

Esta distinción entre las formas de construir consenso en el ámbito jurídico es relevante para indagar en el proceso de toma de decisiones sobre la adopción gay, específicamente, respecto a la manera en la que es enmarcado el problema y su solución. Concretamente, la pregunta aquí sería si las decisiones en las sentencias C-802 de 2009 y C710 de 2012 conforman un consenso establecido sobre “fijeza” que invisibilizan incertidumbres sobre el derecho, la familia y la parentalidad o si de algún modo se trata de un consenso que reconoce el desconocimiento haciéndolo visible para el público como para los expertos, los tomadores de decisiones y los activistas revelando que es a partir, justamente de ese desconocimiento, que se debe construir la decisión negociando intereses sociales y produciendo acuerdos.

Adicionalmente, la forma en la que se establece un consenso no corresponde simplemente a una cuestión de estilo pues, lo que cuenta como verdadero depende del contexto interpretativo en el que se inserta, de las convenciones de representación y de las reglas dadas por supuesto (Collins, 1995/[1975]). En este sentido, el punto relevante aquí es la forma en la cual se enmarca el problema en el ámbito jurídico puesto que de esta forma son posibilitadas ciertas construcciones de conocimiento así como la producción de ciertas

decisiones que conllevan a que se establezca un orden social que favorece o no la homoparentalidad. Específicamente, en el debate de la adopción gay en Colombia lo que se define en la Corte no son simplemente discursos desarraigados de las relaciones humanas sino el marco legal que posibilita el reconocimiento tanto jurídico como cognitivo y social de las familias homoparentales. De ahí que Ríos, Ordoñez & Ruiz (2011) señalen que un cambio en el significado de “la familia” conlleva a una transformación social y cultural profunda, ya que el mismo componente discursivo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional conduce a una interpretación profunda de nuestros patrones culturales, de nuestra forma de actuar y pensar. La controversia sobre adopción gay entonces constituye un espacio de reconfiguración social que atraviesa dimensiones de conocimiento orientadas a definir la parentalidad así como dimensiones jurídicas y políticas que posibilitan la aparición de la adopción gay en la escena pública.

1.3 Producción y usos del conocimiento, la experticia y la evidencia en las cortes

Los trabajos de investigación del campo de los ESC que han apropiado una perspectiva pragmática, contingente y localizada sobre la experticia, se concentran en identificar las diversas tareas que los actores sociales despliegan para definir y autorizar a unos actores como expertos de un particular tema en discusión. Respecto a la articulación de conocimientos expertos en el escenario jurídico los ESC han rastreado los criterios de admisión de la evidencia experta en las Cortes, el papel del escenario jurídico en la producción de conocimiento, la incertidumbre de los expertos en la toma de decisiones y la movilización de intereses por parte de los expertos. Estas perspectivas, pueden nutrir el análisis de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, puesto que dan cuenta de dinámicas específicas, relacionadas con el surgimiento y el establecimiento de la experticia en el ámbito jurídico. A continuación, describo el énfasis en la experticia que trazan cada una de estas líneas de indagación, mencionadas o desarrolladas por los investigadores en ESC y señalo parte del potencial del presente trabajo para dialogar con esos estudios.

A. Criterios de admisión de la evidencia experta en las Cortes

Las investigaciones sobre la admisibilidad del conocimiento científico en la Corte, se han encargado de registrar las estrategias mediante las cuales el ámbito jurídico establece una demarcación entre la ciencia y la no ciencia (Endmond, 2002). Por ejemplo, en las Cortes de EEUU, esta demarcación se ha llevado a cabo mediante las Reglas Daubert. De acuerdo con ese criterio, la evidencia tendría que estar basada en una teoría o técnica que haya sido evaluada, debe haber sido objeto de revisión por pares y tendría que estar publicada, debe revelar su tasa de error, y tiene que haber recibido aceptación general en la comunidad científica (Golan, 2004; Zeedyk & Raitt, 1998).

Adicionalmente, Jasanoff (1997) revela la presencia de prácticas informales en la aceptación de la evidencia en las cortes. Particularmente, la autora llama la atención sobre lo que ha llamado, “la experticia preferida” que caracteriza como un patrón en el uso de la evidencia en el cual los expertos que en ocasiones anteriores han participado en la Corte,

y han “ganado”, suelen repetir como testigos en casos posteriores convocados como expertos por las partes o directamente por la Corte. Tanto en el caso de los criterios formales como en el de los criterios informales, la admisibilidad del conocimiento en las Cortes, parece restringirse a unos relativamente pocos expertos. Las reglas Daubert limitan la participación del conocimiento científico a la ciencia de núcleo o ciencia establecida, desfavoreciendo el uso de la ciencia de frontera relacionada con los problemas de investigación recientes, que no cuentan con aprobación y apropiación amplia por parte de la comunidad científica, dado que los hechos en esos campos relativamente novedosos se encuentran en proceso de establecimiento (Zeedyk & Raitt, 1998). En el caso de la “experticia preferida” los conocimientos expertos suelen no renovarse sino que serían reensamblados en diferentes procesos de toma de decisiones.

De este modo, para dar cuenta sobre el uso de evidencia en torno a la adopción gay, sería necesario rastrear los criterios tanto formales como informales que establecen las Cortes colombianas para tomar en cuenta los dictámenes expertos. Esto significa especificar los mecanismos de entrada de la evidencia en la Corte y los campos de la experticia que se mantienen en el debate sobre homoparentalidad y cómo son utilizados. Para ello, será pertinente identificar cuáles serían los criterios de inclusión de evidencia en la Corte Constitucional Colombiana y si existen campos de conocimiento que se mantienen estratégicamente en el debate para persuadir dentro del proceso de decisión a favor o en contra de la adopción gay.

B. El papel del escenario jurídico en la producción de conocimiento

Como segundo foco de indagación de la experticia en las cortes, el campo ESC ha enfatizado en las dinámicas de producción científica en y para la Corte. Algunos trabajos han indicado que, las condiciones de producción y uso de conocimiento en los espacios de toma de decisiones, son diferentes a las que se encuentran en el ámbito científico ya que es común que la ciencia responda a demandas específicas de conocimiento que surgen en los espacios de decisión (Jasanoff, 1997; Latour, 2010; Caudill, 2002). Algunos investigadores se han encargado de señalar las diferencias entre el funcionamiento de una decisión en el derecho y un hecho en la ciencia; pero lo interesante está, más que en las diferencias, en los puntos de encuentro obligados entre la ciencia y el derecho cuando se encuentran en la Corte y deben, ambos campos, contribuir al establecimiento de una decisión. Por ejemplo, a menudo los casos únicos del derecho se convierten en puntos de partida para la investigación, frente a lo poco que se ha estudiado en ciencia, debido a que las comunidades científicas suelen mantenerse bajo el mismo paradigma de ciencia normal (Jasanoff, 2008).

Además, en los escenarios jurídicos las normas de la ciencia son frágiles porque se encuentran con incertidumbre, polarización política, valores individuales y separaciones borrosas entre la ciencia y la política. De ahí que Jasanoff (1987) haya propuesto el concepto de “ciencia regulatoria” para hacer explícita la dimensión política del conocimiento en los espacios de decisión. La ciencia es articulada a los procesos de decisión pública como un conocimiento válido, se supone que, de acuerdo con los criterios científicos; sin embargo, se trata de un saber construido sobre la marcha de las decisiones y que es articulado con intereses que justifican órdenes sociales particulares.

En este sentido, el análisis de la experticia en el caso de la adopción gay requeriría dar cuenta de la manera en la que los conocimientos psicológicos y del derecho son articulados al interés de definir un orden jurídico particular a favor o en contra de la homoparentalidad. Para ello, sería relevante evidenciar el tipo de conocimiento psicológico y jurídico que es fabricado, movilizado y utilizado en el texto de las sentencias sobre la regulación de la adopción para parejas del mismo sexo. Así pues, el debate de la adopción gay permite visibilizar, si dentro de las estrategias utilizadas por los actores intervinientes en la sentencia se encuentra el uso de conocimientos en un sentido normativo para incidir en la decisión a favor o en contra de la homoparentalidad; es decir, si el conocimiento fue enlazado a una perspectiva sobre cómo debe ser el orden jurídico colombiano sobre la familia.

Así pues, esta perspectiva tiene el potencial de revelar cuáles son los criterios y las pretensiones de conocimiento válido y útil en el ámbito jurídico a propósito de la adopción gay; lo cual se enlaza a la preocupación de establecer un saber sólido sobre el cual son expresadas las decisiones. Sin embargo, como voy a discutir a continuación, el conocimiento experto se enfrenta a la incertidumbre en la Corte pues se trata de un escenario de decisiones que deben ser expresadas en tiempos diferentes a los que comúnmente son expresadas las teorías y los conceptos en ciencia; lo cual conlleva a un efecto que parece paradójico y es que a pesar de que en la Corte se buscan hechos a través de conocimientos especializados, estos no pueden necesariamente proveer certezas sobre las cuales fundamentar la toma de decisiones. Por tratarse, la incertidumbre, de un tema que es evitado e invisibilizado tanto en la producción de ciencia como en la toma de decisiones, lo trataré abajo de forma relativamente extensa.

C. Incertidumbre de los expertos en la toma de decisiones

Un tercer foco de indagación sobre la experticia desde los ESC ha sido los estudios en torno a la incertidumbre del conocimiento en contextos públicos. Es decir, cómo en condiciones donde el conocimiento científico no puede proporcionar certeza los tomadores de decisiones logran dirimir las controversias públicas. Al respecto, Jasanoff, (1987) señala que es común en los escenarios de toma de decisiones públicas, que las demandas de conocimiento excedan la producción científica, de manera que los científicos son llevados a la incertidumbre. Sobre ello, se ha encontrado que las lógicas de la ciencia y las lógicas de justicia son deferentes pues las afirmaciones científicas pueden confirmarse en la posteridad a través de replicaciones y artículos científicos que las convierten en hechos (Latour, 2010), pero en el derecho y en la política la toma de decisiones debe realizarse en un tiempo corto de cara a resolver eficazmente la disputa entre las partes (Jasanoff, 2004). Por ejemplo, en el ámbito de la toma de decisiones se debe decidir, rápidamente, si ciertas sustancias resultan cancerígenas (Jasanoff, 2008) o establecer la responsabilidad de una planta nuclear en un desastre ambiental (Wynne, 2005) puesto que la restricción del contacto con sustancias peligrosas y la responsabilidad social está en juego.

Desde la perspectiva de Nowotny (2003) la incertidumbre de los expertos en los procesos de decisión refleja la "transgresividad de la experticia" a la que son llevados por las lógicas mismas de la deliberación pública. Esto lo argumenta, indicando que, cuando los científicos actúan como expertos no responden a problemas que han elegido, como sucede en sus

investigaciones, sino que son forzados a *transgredir los límites de su competencia* debido a que los problemas que confrontan no pueden reducirse a lo científico o a lo técnico sino que están *entrelazados a diversas prácticas, instituciones y redes de actores*. De este modo, dar cuenta de la incertidumbre en los procesos de decisión sobre adopción gay del 2009 y 2012, pasa por la identificación de la manera en la cual esos particulares conocimientos tratan de ensamblarse a los procesos de toma de decisiones con argumentos desde su campo pero sobre todo llevando su experticia al terreno de las decisiones discutiendo definiciones sobre pareja, sexualidad y parentalidad para la aceptación o rechazo de la adopción gay.

En esta línea de indagación sobre la presencia de incertidumbre científica en el escenario público, Irwin, Rothstein, Yearley & McCarthy (1997) han indicado que, es relevante evidenciar qué tipo de estrategias de innovación tienen sentido de cara a la incertidumbre potencial de la ciencia regulatoria. La experticia científica e incluso la no científica posiblemente estarán en una posición de desconocimiento frente a las demandas de saber por parte de los tomadores de decisiones, en raras ocasiones los procesos de decisión tienen cubiertos todos los aspectos problemáticos, pues los actores interesados justamente se encargan de construir, y si es preciso renovar, la controversia para que las entidades públicas deban pronunciarse al respecto.

Ante esta situación, Nowotny (2003) propone que puede resultar útil ampliar los criterios de validez científica; en el sentido de que, en los escenarios públicos el *conocimiento socialmente robusto* puede constituir una respuesta a la incertidumbre en ciencia. Se trataría del conocimiento cuya robustez no sería evaluada solamente en el laboratorio sino en el mundo social, político, económico y cultural al que se encuentra dirigido. Esta robustez social sería el resultado de la construcción de vínculos con los usuarios reales y de repetidas evaluaciones, expansiones y modificaciones al conocimiento. De este modo, la experticia no funcionaría simplemente como la que contribuye con información al proceso de decisión sino como participante activa de la discusión y de la producción de esa decisión. Así, el papel de la experticia en el debate sobre adopción gay no se limitaría a la producción de conocimiento sino que incluiría acciones activas sobre qué significa ese saber y cómo debe orientarse en los procesos de decisión.

Frente a la propuesta de robustez social del conocimiento, Lidskog, (2008), previene acerca de que una auténtica base social del conocimiento debe evitar disolver la responsabilidad sobre el uso del conocimiento desde los expertos hacia las personas que lo utilizan y debe alejarse de restringir la interacción de los expertos con los usuarios, simplemente convenciéndolos de los hechos mediante un procedimiento de persuasión. Para Lidskog, ambas posiciones llevan a reproducir la división *lego-experto* en la que una parte es la que produce el conocimiento y la otra se limita a comprenderlo y a orientar sus acciones de acuerdo con el mismo. Adicionalmente, Jasanoff (2003) señala que es complejo institucionalizar procesos interactivos, policéntricos y multipartitos en un escenario legal donde por décadas se ha intentado mantener el conocimiento experto alejado de voluntades políticas y populares. De tal manera, para democratizar la toma de decisiones habría que generar mecanismos que promuevan la interacción significativa entre tomadores de decisiones, políticos y público.

De acuerdo con lo anterior, sería pertinente evidenciar la manera en la que es gestionada la incertidumbre en las sentencias C-802 de 2009 y C- 710 de 2012 y cuáles son las

características de las acciones discursivas en las que los expertos, tanto científicos como jurídicos, tratan de incidir en la manera en la que la evidencia es articulada a la toma de decisiones. Adicionalmente, sería pertinente comentar si las acciones discursivas de los expertos y la Corte, tratan de producir un conocimiento y un proceso de decisión socialmente robusto con el propósito de movilizar y negociar intereses a favor o en contra de la adopción gay o si, por el contrario tanto el conocimiento como el proceso de decisión mantienen una diferenciación entre productores y usuarios del conocimiento para difundir una imagen de neutralidad y objetividad.

Las críticas sobre la robustez social del conocimiento realizadas por Lidskog permiten advertir que para trascender la división lego-experto, en el caso de la adopción gay, sería necesario establecer cuáles son las relaciones sociales entre los actores de las sentencias de la Corte en las que son definidas las responsabilidades sobre la producción y uso de la experticia, en las que tanto magistrados como expertos construyen marcos interpretativos para comprender y decidir sobre el reconocimiento jurídico de las familias homoparentales en Colombia. Así mismo, sería relevante rastrear si hay formas en las cuales la sentencia propicia relaciones entre los actores expertos y no expertos para establecer un orden a favor o en contra de la homoparentalidad reconociendo la incertidumbre.

Todas estas conceptualizaciones y perspectivas sobre la experticia y la toma de decisiones apuntan a que la producción de justicia involucra la gestión de la incertidumbre así como la generación de diversas estrategias para construir “conocimiento válido” para los procesos de decisión. Jasanoff, (1997) ha argumentado que el sistema legal ha sido instrumental en crear un entendimiento público de la ciencia y la tecnología en el proceso de “usar la ciencia” para resolver controversias. Esa representación instrumental de la experticia científica puede llevar, no solo a reproducir la división lego-experto en la toma de decisiones, sino que puede conllevar a asumir que el conocimiento simplemente se usa en términos técnicos y cognitivos, como informativo para la resolución de una controversia.

Sin embargo, Maldonado (2011) señala que, en el escenario jurídico el conocimiento experto es ensamblado a una retórica de la justicia cuya autoridad es fabricada mediante la suma de actores y las cadenas de citaciones para comunicar/construir una decisión jurídica. Esto quiere decir, desde una perspectiva retórica, que definir el uso del conocimiento como un asunto meramente instrumental, constituye de hecho una estrategia para producir justicia en la corte. Representar el conocimiento experto como externo y anterior al proceso mismo de decisión genera un sentido de justicia. De este modo, el “uso de conocimiento” puede constituir un proceso atravesado por la visibilización y producción estratégica de certeza, evidencia y autoridad que puede llegar a negar los ensamblajes alrededor de los cuales el conocimiento es producido y articulado a la toma de decisiones. Esto quiere decir que, el uso de la experticia en el ámbito jurídico, lejos de constituir un asunto mecánico, involucra la gestión de la incertidumbre científica en cada decisión para fabricar un sentido social de justicia en las decisiones de la Corte.

La evidencia proporcionada por los expertos, funciona como una herramienta estratégica por parte de los actores jurídicos, para construir y administrar justicia, y no solo un simple insumo para la toma de decisiones. De este modo, es común que en el proceso de decisión queden borradas las huellas de la incertidumbre científica, puesto que los escenarios públicos están orientados a la construcción de consenso para establecer decisiones mientras que la ciencia se concentra en la producción de hechos (Latour, 2010). En otras

palabras, las experticias científicas suelen ensamblarse a la toma de decisiones jurídicas, en lo que Jasanoff (1997) ha llamado híbridos jurídico-científicos que dan lugar a las decisiones públicas en un proceso simultáneo en el cual el conocimiento es articulado a lógicas legales y así mismo los escenarios jurídicos enmarcan y posibilitan la producción de hechos.

En esa construcción de consenso en el escenario público, es común que el significado de justicia al que es articulado el conocimiento experto termine reproduciendo –más que discutiendo- definiciones estatales, por ejemplo de familia (Fasin, 2005). En relación con ello, perspectivas construccionistas han tratado de evidenciar la carga valorativa del conocimiento. Gergen (1998) ha argumentado que la ciencia no es producto independiente de los requerimientos sociales y que, particularmente en psicología, los conceptos no están exentos de valores; prueba de ello es que solemos reaccionar ante etiquetamientos como “egocéntrico”, “manipulable” o “rígido cognitivo”. De este modo, se hace visible que los conceptos expertos en las sentencias movilizan ciertos significados sobre categorías sociales aunque este proceso productivo quede borrado por la retórica de la justicia que se encuentra dirigida a convencer sobre el proceso de decisión como algo neutral, objetivo y consolidado a partir de certezas.

D. Movilización de intereses por parte de los expertos

Como cuarta línea de trabajo del campo de los ESC sobre la experticia las investigaciones se han centrado en la articulación de intereses sociales, vía conocimientos expertos, a las lógicas de producción de justicia. Por ejemplo, Kleine & Robinson, 2008 han encontrado que es común que en las cortes se desligue al conocimiento de los intereses sociales pues se presume que el conocimiento experto -que circula como evidencia- es anterior al proceso jurídico. Sin embargo, reconocer el carácter construido del conocimiento permite revelar que las afirmaciones científicas, y en especial aquellas implicadas en las controversias legales, transportan presupuestos ocultos sobre el mundo social (Jasanoff, 1997).

De esta manera, cobra sentido la perspectiva según la cual las ideas de verdad y las ideas de justicia son construidas simultáneamente y que un “idioma de co-producción” es útil para dar cuenta de las relaciones entre la producción de hechos científicos y la construcción de hechos jurídicos en las Cortes (Jasanoff, 2004). Desde esa postura, la producción de conocimiento puede ensamblarse a diversos órdenes sociales redefiniendo identidades colectivas, creando nuevas instituciones, produciendo discursos o representaciones.

En ese sentido, la experticia no significa la simple utilización de ciertos conocimientos especializados en la Corte sino, sobre todo, su articulación a la fabricación o definición de identidades como padre o madre; de instituciones como la familia y de discursos sobre lo que significa la homoparentalidad. Estas perspectivas en ESC sobre el carácter pragmático de la experticia me permiten entonces señalar que, estudiar el saber de los expertos involucra la visibilización de capas de significado sobre el conocimiento que no solo se encuentra circunscrito a cuestiones tecnocientíficas, sino que, se ensambla a la elección moral, por ejemplo en el caso de la “adopción gay” sobre formas legítimas de sexualidad, pareja y familia.

Maldonado (2011) identifica esta articulación experticia-intereses en Colombia en el caso la interrupción voluntaria del embarazo señalando que en la regulación jurídica la participación de los expertos no se limita a los convocados por la Corte, sino que, por lo regular grupos interesados despliegan la defensa de sus intereses bajo la figura de lo que él llama “experto-activista”. Es decir que, los activistas apropian y movilizan buena parte del conocimiento especializado para defender sus intereses ya que han creado organizaciones, documentos y han producido conocimientos especializados para incidir en los procesos de toma de decisiones. La figura del experto activista muestra una forma de ensamblaje entre la experticia y los intereses; sin embargo, es probable que haya otros y variados mecanismos para que el conocimiento movilice visiones particulares de orden social dentro de los procesos de la Corte. Por tanto, el presente trabajo trata de evidenciar y discutir las preocupaciones de los ESC respecto a los conocimientos expertos en las cortes tratando de encontrar los diversos y complejos ensamblajes que surgen en el ámbito local para la discusión de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo.

1.4 Conocimiento sobre sexualidad y orden social sobre parentalidad: una comprensión desde la co-producción

Frente al desafío que plantea la homoparentalidad para el modelo tradicional de familia diversos abordajes han tratado de registrar y conceptualizar esta nueva realidad en la conformación de los lazos parentales. Desde las ciencias sociales se ha planteado un cuestionamiento a las biociencias a propósito de la reproducción asistida para las parejas del mismo sexo. Zarate, Corzo & Valero (2015) indican que biociencias del comportamiento como la psicología y la psiquiatría juegan un papel clave en la reivindicación social de las personas homosexuales para que obtengan el aval de acceder a la manipulación con embriones y cuestionan estas tecnologías como parte del progreso social pues evalúan la homoparentalidad como una forma de desplazar los vínculos consanguíneos. Aunque esta perspectiva parece orientarse al problema normativo sobre el control de técnicas de reproducción humana asistida, es decir sobre cómo debe ser utilizada está tecnología imponiendo un punto de vista sobre la controversia, también plantea el problema de la transformación del ordenamiento de la familia nuclear a partir de las biotecnologías de reproducción lo cual constituye un debate que puede desarrollarse en los próximos años.

Por lo pronto, la movilización social en defensa de la homoparentalidad en Colombia se ha articulado al ámbito jurídico sobre todo en relación al acceso a la adopción más que a la utilización de tecnologías de reproducción asistida. Pero, tanto en el caso de las tecnologías como en el de la adopción los investigadores en ciencias sociales han discutido el papel de “la naturaleza” en la conformación de las familias. Por ejemplo, Arraigada (2007) argumenta que la amplia diversidad de modelos de familia involucra un cambio en la visión de hombre como proveedor y en las labores del cuidado como algo propio de las mujeres por naturaleza pues las mujeres han ingresado al mercado laboral, lo cual involucra que la familia puede convertirse en algo más que en una fuente de reproducción

de la desigualdad que condiciona los recursos sociales, económicos y culturales de sus integrantes como lo es la división sexual del trabajo inequitativa. El problema que señala la autora es que las políticas públicas no reconocen la variedad en la conformación de familias reales lo cual impide un diseño sobre las familias en el que se considere el tiempo de cuidado, el tiempo laboral así como una organización de la producción y de la reproducción de una manera más equitativa.

Desde los ESC es posible abordar estas discusiones sin necesidad de adoptar una perspectiva normativa sobre cómo debe ser la familia y sobre cómo sería un estado de bienestar más equitativo. Aunque estas no son discusiones menores, seguir las acciones que los mismos actores sociales movilizan en la controversia permite visibilizar las múltiples definiciones de familia y de naturaleza que se encuentran en competencia, los valores e intereses que son mediados y negociados en la Corte y la manera en la que una perspectiva a favor o en contra de la homoparentalidad se establece en el medio jurídico desplazando o postergando definiciones alternativas no solo de parentalidad sino de justicia. Es decir que, en vez de ocuparse de las cuestiones normativas de cómo debe organizarse “lo social” una perspectiva en ESC evidencia las definiciones normativas de los actores involucrados en la controversia sobre adopción gay, las trata como resultados establecidos por una de las partes y realiza el seguimiento de las estrategias y mecanismos mediante los cuáles ciertas interpretaciones sobre la homoparentalidad se imponen sobre otras.

En la línea de indagación sobre la familia como proyecto normativo, Imaz (2015) se interesa por parentalidades alternativas congruentes con las mujeres contemporáneas frente a la incapacidad cultural de asumir la reproducción humana como tarea colectiva y las limitaciones que ello conlleva para el desarrollo personal de las mujeres. De ahí que la autora registre que, frente a las mujeres que han sido convertidas en madres “por naturaleza” a través de los conocimientos expertos de la pedagogía y la medicina, las maternidades lesbianas constituyen un modelo emergente pues incorporan nuevos significados y valores sobre la distribución de tareas, vínculos y redes de ayuda. Estas nuevas posibilidades parentales se encuentran relacionadas con el ámbito legal y jurídico en el sentido de que un reconocimiento jurídico de las familias de mujeres lesbianas puede conllevar a un fortalecimiento de su red de apoyo y contribuir a desmitificar los prejuicios que atraviesan este tipo de relaciones frente a los binarismos heterosexuales (Lira, Morais & Boris, 2016).

De esta manera, el análisis de la toma de decisiones en la Corte permite registrar la apuesta de grupos interesados en la visibilidad y legitimación de parentalidades alternativas a la heterosexualidad y la manera en la que se organizan contra la violencia hacia las parejas del mismo sexo. Así pues, lo que aquí describo puede leerse como un esfuerzo por rescatar la diversidad en las estructuras familiares pese a las presiones sociales por imponer la modelo tradicional como única forma de establecer relaciones parentales. De algún modo, este es un problema del cual se ocupó Virginia Gutiérrez (1975/ [1968]) quien trató de reconocer, desde otras condiciones de diferencia (factores regionales, culturales y económicos) la configuración de las familias en Colombia. De esta manera, en el análisis, me centraré en evidenciar los esfuerzos que los grupos a favor de la homoparentalidad han tenido que desplegar para establecer un cambio en el orden jurídico del país que haga visibles a las familias conformadas por parejas del mismo sexo y qué tipo de conocimiento han movilizado para cumplir con ese propósito.

Desde una perspectiva epistemológica sobre el uso de la ciencia en espacios públicos, Fasin (2005) señala que los análisis no deben ocupar el papel de la elección política revistiéndose de autoridad y neutralidad así como tampoco deben fabricar conceptos universales sobre categorías sociales -como la familia, la sexualidad y la parentalidad- sino estudiar la manera en las que diferentes grupos hacen uso de estas. En términos generales, esta perspectiva resume buena parte del trabajo analítico que presento a continuación; ya que mi tarea consistirá en rastrear las diferentes definiciones, de categorías sociales que los actores involucrados en el debate tratan de establecer. De este modo, se trata de un análisis sobre el conocimiento, respecto a la forma que es fabricado, sobre cómo es utilizado y ensamblado al proceso de toma de decisiones para justificar cierto tipo de orden social en el que es aceptada o rechazada la adopción gay.

En el proceso de construcción de evidencia científica en la controversia jurídica sobre adopción gay se puede evidenciar la manera en la que conocimientos especializados se integran a lo que grupos interesados tienen el propósito de establecer como “la sociedad”; pues la experticia representa en ese contexto una producción estratégica en la que grupos a favor y en contra de la homoparentalidad intentan zanjar la discusión a su favor, produciendo la evidencia adecuada para ello (Moreno, 2015). En torno a la homosexualidad la ciencia ha proporcionado la perpetuación de estigmas de una supuesta personalidad perversa pero en las últimas décadas ha cambiado el discurso alejándose de las motivaciones biológicas y se ha encargado de visibilizar diversas formas de paternidades socio-afectivas; particularmente el concepto de apego desde la psicología ha sido relevante para dar cuenta de las relaciones que pueden surgir entre un menor y los adultos que lo adoptan (Silva & Martins, 2006)

Con énfasis en caracterizar los híbridos conformados entre el conocimiento y la organización social, el campo de los ESC ha identificado que particulares construcciones de conocimiento experto conllevan a particulares formas de sociedad pues el conocimiento promueve ciertas formas de interacción, define identidades y estabiliza redes de actores (Callon, 2003; Latour, 2010). En el proceso legal este carácter constructivo del conocimiento también ha sido identificado. De acuerdo con Jasanoff (1997) las ideas de verdad y las ideas de justicia son co-construidas en el contexto de los procedimientos legales, pues en el derecho se encuentran en discusión afirmaciones conflictivas de conocimiento que transportan presupuestos sobre el mundo social.

En el caso de la adopción gay, es notorio que se encuentra en conflicto definiciones sobre lo que es y debe ser una familia, así mismo son discutidos los roles parentales en parejas del mismo sexo y el desarrollo integral de los menores, y cada uno de estos puntos del debate organiza el mundo social de manera diferencial. Si una familia es aquella que se encarga de la protección y cuidado independientemente de los miembros que la componen entonces podría considerarse que los niños y niñas bajo un modelo homoparental pueden crecer y desarrollarse apropiadamente. Por el contrario, si una familia es aquella conformada por un hombre y una mujer que se encargan de tareas parentales específicas, entonces la unión entre parejas del mismo sexo no podría considerarse familia y por lo tanto la adopción gay debería limitarse. Estos son justamente los puntos de vista que las partes a favor y en contra de la homoparentalidad intentan establecer haciendo uso del conocimiento psicológico, jurídico y apelando a la defensa del derecho a la familia, para incidir en la toma de decisiones por parte de la Corte.

Sin embargo, el uso del conocimiento científico no resuelve en sí mismo el debate. Es común que los grupos enfrentados en una controversia utilicen argumentos científicos para defender su propio punto de vista. En ese sentido, Jasanoff (2003) argumenta que en la toma de decisiones la ciencia no puede promoverse simplemente como el conocimiento poseedor del poder de la verdad sino que, en virtud de las responsabilidades que están en juego, es necesario que establezca nuevas formas de justificación pública. Las partes en una controversia cuentan con, relativamente, iguales recursos científicos y utilizarlos en contra o a favor de una decisión en el ámbito público conlleva a que sea necesario, no solo concentrarse en la validez del conocimiento, sino en los riesgos a los que conlleva la evidencia.

De ahí que Jasanoff proponga que la producción de conocimiento simultáneamente produce nuestro mundo social. De forma similar, Shapin y Schaffer (1985/2005) argumentan que las soluciones al problema del conocimiento son soluciones al problema del orden social y que soluciones al problema del orden social resultan produciendo soluciones al problema del conocimiento. Esto indica que los ESC han reconocido el entrelazamiento entre el conocimiento y el orden social, lo que en el caso de la adopción gay, permite indagar por las formas en las cuales se entrelazan la ciencia, la política y los hechos. Particularmente, el ensamblaje de hechos en forma de evidencia en el texto de las sentencias visibiliza cómo es que las consideraciones desde los expertos justifican determinadas decisiones que involucran posicionamientos a favor o en contra de la homoparentalidad y de ahí producen simultáneamente definiciones de categorías sociales como familia, pareja, parentalidad, y sobre cómo es que cada una de las partes intenta establecer el funcionamiento de las familias.

1.5 Visibilización de intereses en la toma de decisiones: las posibilidades de un análisis retórico de la justicia.

Desde los ESC se ha identificado que una de las formas mediante las cuales los actores sociales logran instaurar sus intereses en el escenario público es el uso estratégico del lenguaje, particularmente, cobra relevancia la manera en la que definen un problema social y su solución, puesto que ese comienzo en la definición del problema social marca las acciones subsecuentes en una controversia (Callon, 1986). En relación con la relevancia del lenguaje dentro del ámbito jurídico, Chemerinsky (2002) indica que, un análisis retórico de la Corte permite visibilizar que allí circulan diversas opiniones que se presentan como libres de valores aunque realmente se trata de un escenario en el que se defienden posturas particulares que movilizan intereses y valores. En el caso de la adopción gay, esto significa que es importante describir la manera en la que las partes intentan definir y problematizar la homoparentalidad como un asunto de derechos y si lo hacen de acuerdo a su posicionamiento a favor o en contra de la homoparentalidad.

De acuerdo con Potter (1998) el lenguaje marca el desarrollo de una controversia, en el sentido de que, permite a los actores sociales organizar sus puntos de vista y reclutar aliados para defender sus intereses; por lo común, las versiones son establecidas

mediante retóricas que movilizan una realidad social particular y funcionan de manera defensiva y ofensiva; es decir protegiendo su propia versión de realidad y atacando definiciones alternativas. Así, a nivel discursivo, el posicionamiento de las partes en la discusión de la “adopción gay” permite un tratamiento en términos de producción narrativa, persuasiva y retórica que hace visible los esfuerzos de las partes por defender su propio punto de vista.

En los ESC el estudio del lenguaje y la fabricación de hechos en el foro público ha sido abordado en términos de los repertorios argumentativos que esgrimen cada una de las partes para defender su punto de vista en una controversia y consolidar sus intereses (Pinch, 1993). Por ejemplo, Michael Mulkay (1993; 1997) logró organizar los argumentos del debate sobre embriones en Gran Bretaña en términos de las retóricas del miedo y de la esperanza que, respectivamente, trataron de movilizar la idea de riesgo y de beneficio que comportaba la investigación con embriones, lo que a su vez significaba el apoyo o el rechazo público del uso de embriones para la investigación científica.

Estas aproximaciones narrativas proveen herramientas para comprender la red sociotécnica o sociojurídica que se establece en las sentencias constitucionales. En primer lugar, mediante el seguimiento de la articulación narrativa en las sentencias es posible evidenciar la transformación de los problemas sociales a un asunto de interés público como una producción retórica que enmarca la “adopción gay” en las fronteras del derecho. En segundo lugar, no hay que perder de vista que las decisiones jurídicas en la Corte Constitucional son producidas textualmente mediante las sentencias, lo que indica que guardan un carácter retórico. De hecho, diferentes aproximaciones han aplicado la retórica al escenario de las altas cortes reconociendo que la toma de decisiones constituye un proceso retórico de producción de justicia, puesto que el público debe reconocer el aparato jurídico como legítimo y la autoridad es producto de un arreglo retórico (Chemerinsky, 2002; Kleine & Robinson, 2008; Jasanoff, 2004).

Adicionalmente, los argumentos que son utilizados en la toma de decisiones públicas suelen involucrar una comprensión compleja del objeto de debate. De acuerdo con Zapata (2009) aunque la legislación aporta en la superación de las discriminaciones, son los cambios en las ideas dominantes, las creencias y los prejuicios el auténtico soporte del cambio cultural y la consolidación de relaciones democráticas; la forma de establecer este tipo de realidades es a través de las narrativas, las cuales generan creencias y prácticas acerca de identidades individuales y colectivas. El análisis narrativo de las sentencias de la adopción gay permite entonces registrar la manera en la que se establecen interpretaciones sobre la homosexualidad no solo en el ámbito jurídico sino también en el cultural pues, aunque la sentencia tiene significado fundamentalmente legal, las decisiones de la Corte y sus argumentos pueden ser apropiados y reinterpretados por parte del público dando lugar a variaciones culturales en torno a la manera de entender y reconocer a las familias en Colombia.

Por ejemplo, Anderssen & Hellesund (2009) han analizado reivindicaciones de la homoparentalidad en Noruega y encontraron que la adopción gay fue convertida, por medio de la narrativa publicada en los periódicos, en un proyecto modernizador, en un símbolo del progreso como una prueba de ser tolerante en una sociedad secular, basada en los derechos humanos y en la razón. Así pues, un análisis textual de las sentencias sobre adopción gay en Colombia permite identificar las narrativas que circulan acerca de

la sexualidad y de la familia y la manera en la que se articulan; así mismo el presente trabajo puede orientar sobre las tensiones que las partes en disputa generan sobre la integración de la sexualidad al proyecto local de Estado.

En el ámbito local, la articulación de una perspectiva retórica al estudio sociológico de la toma de decisiones ha sido llevada a cabo por Maldonado (2011) quien evidencia las retóricas jurídicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el país. En su análisis, Maldonado, comprende la sentencia como una tecnología literaria que construye una red entre actores como los activistas, los expertos y los magistrados, quienes haciendo uso de procesos y mecanismos de diálogo, establecen el “hecho jurídico” sobre los tres casos en los que finalmente es permitido interrumpir el embarazo en el país³. De acuerdo con esta perspectiva, las relaciones entre ciencia y derecho se pueden entender como una red legal compuesta por los actores que son fundamentales para ensamblar el hecho jurídico en los procesos de decisión; la sentencia constituiría una tecnología jurídica que permite mantener ensamblados los hechos mediante procesos y mecanismos estandarizados en los litigios.

Al respecto, Maldonado identifica que uno de los procesos relevantes en la construcción de la decisión jurídica es el ensamblaje del conocimiento experto a través de la figura de *Amicus Curiae* o “Amigos de la Corte”. El autor identifica que mediante el uso del conocimiento especializado las partes reclutan aliados y fortalecen sus intereses; concretamente, en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo las partes hacen uso de repertorios discursivos tomados de la medicina mediante los cuales producen y movilizan su posición. A partir de allí, el análisis propuesto por Maldonado describe que la retórica pro-vida sitúa la fuente y el origen de la vida en el vientre materno mientras que las retóricas pro-elección desmitifican un origen o punto de inicio de la vida del feto. Finalmente, estas retóricas movilizan dos versiones diferentes de la controversia pues, la retórica pro-vida infantiliza al feto y la retórica pro-elección fetaliza al infante.

Desde los ESC, también Mol (2002) ha argumentado que el conocimiento se encuentra asociado a la interpretación del mundo social, pues indica que la práctica tecnocientífica constituye nuestro mundo mediante la producción y defensa de unos valores asociados a la producción de hechos; en ese sentido, el conocimiento termina por fabricar políticas ontológicas que establecen una versión de la realidad tanto material como normativa. Dentro de las sentencias de la corte esa dimensión de producción valores puede rastrearse mediante la caracterización de las retóricas que las partes utilizan en el debate (Maldonado, 2011). De acuerdo con las posibilidades que abre el análisis narrativo, es posible comprender la regulación jurídica sobre adopción gay como un conjunto de acciones que involucran diversas tareas ontológicas de los actores sociales con el fin de convertir una realidad, a favor o en contra de la homoparentalidad en algo viable; así, el establecimiento de lo que sería una familia incluiría tanto producciones de conocimiento como movilización de unos valores específicos.

³ Los tres casos en los que es aceptada la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son: peligro de muerte de la madre, violación y malformación del feto.

El abordaje narrativo constituye entonces una herramienta para esclarecer las versiones de familia, parentalidad y sexualidad en competencia en la controversia sobre la “adopción gay” en Colombia. La identificación de los repertorios argumentativos de los que hacen uso las partes revelará en qué momentos los actores amplían o restringen significados, por ejemplo, de la familia o cómo incorporan conocimientos especializados, por ejemplo de la psicología, para tratar de establecer una decisión a favor o en contra de la homoparentalidad. Además, la comprensión de las sentencias constitucionales como una producción textual que guarda formas narrativas permite rastrear a los actores involucrados en el proceso jurídico y sus relaciones así como la manera en la que estabilizan hechos jurídicos.

En síntesis, con las herramientas del campo de los ESC, la Corte puede leerse como un escenario de transformación de los problemas de un sector de la sociedad (las parejas del mismo sexo) a un asunto de interés público y comprender la sentencia como un texto permite revelar la red legal que da lugar a la compleja trama de actores involucrados en la “adopción gay” todo esto puede, además ser comprendido como un proceso, como una negociación progresiva de una nueva realidad que tiene lugar en el espacio jurídico donde está en juego el acceso a la categoría familia para las parejas del mismo sexo.

Así pues, la “adopción gay” conforma un escenario en el que es posible rastrear los patrones de toma de decisiones en el derecho; puesto que un análisis de seguimiento sobre actores, discursos y mecanismos de negociación permite describir la manera en la que el derecho establece fronteras entre identidades que pueden o no establecer una familia legalmente reconocida en Colombia, mediante qué tipo de mecanismos incorpora esos límites respecto a lo que podemos considerar “la familia” y, finalmente, qué tipo de conocimientos articula para construir definiciones legales y excluir realidades alternativas.

1.6 Narrativas sobre justicia en la Corte: versiones divergentes sobre la homoparentalidad

Una herramienta para dar cuenta de los ensamblajes de intereses a los conocimientos y a las leyes en la toma de decisiones es la descripción narrativa de los textos que conforman la controversia. Este tipo de análisis permite rastrear los intereses que aparecen en el escenario público y que tienden a encubrirse en los términos especializados del derecho o de la ciencia. En el análisis narrativo de la evidencia forense, Kruse (2012) señala que, la evidencia no es evaluable por sí misma sino que su validez y usabilidad está enmarcada en una narración legal, la cual, involucra toda una trama social sobre lo que son o deben ser las acciones de las personas y las relaciones sociales. En el caso de la “adopción gay” el relato jurídico pasaría por evidenciar-narrar lo que sucede en una familia homoparental mediante unos guiones basados en conocimientos expertos, (en el caso de las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 se trata de unas narraciones basadas en la psicología, en los activistas y en marcos jurídicos) que hagan creíble la versión de orden social defendida por cada una de las partes.

Para Kruse (2012), es relevante visibilizar los sesgos estructurales de la evidencia pues siempre se encuentra referida a unos marcos culturales dentro de los cuales es

interpretada. Por ejemplo, en la regulación de familias homoparentales la evidencia puede encontrarse en un marco en el cual la familia es una institución estrictamente heterosexual u otro en el cual las parejas del mismo sexo tienen el derecho a acceder a los mismos privilegios que las heterosexuales. Adicionalmente, el análisis de los marcos culturales desde los cuales las partes tratan de instaurar su versión de la controversia pueden evidenciar que pese a que la homoparentalidad puede ser asumida como una manera de desafiar el modelo heterosexual, en realidad puede significar una manera de promover valores similares. En su análisis Anderssen & Hellesund (2009) encuentran que en torno al debate sobre adopción gay en los periódicos en Noruega hay un consenso sobre la heteronormatividad, concretamente señalan que tanto el posicionamiento a favor como el contra entiende a la familia nuclear como un marco para las relaciones saludables y lo femenino y masculino como diferente y necesario para el desarrollo del niño.

En ese sentido, especificar los marcos culturales del posicionamiento a favor y en contra de la homoparentalidad mediante el estudio de las narrativas que aparecen en las sentencias permite visibilizar los intereses y valores (en vez de asumirlos) que efectivamente representan quienes defienden o rechazan la adopción gay. Para Kruse, (2012) rastrear de manera sistemática este tipo de marcos desde los cuales es fabricada la evidencia y son movilizadas posiciones requiere registrar: primero, la manera en la que las agencias encargadas de la investigación están organizadas y cuáles lealtades e incentivos se alientan; segundo, identificar la informalidad del relato jurídico ya que variados procesos suelen no ser públicos; y tercero, evidenciar los marcos y guiones culturales que son centrales en el relato jurídico que transforman resultados técnicos en evidencia significativa.

En la regulación de la adopción para parejas del mismo sexo estas preocupaciones, sobre los marcos dentro de los cuales se estructura la evidencia, requeriría específicamente la exploración de las experticias consultadas por la corte, la identificación de los procesos informales mediante los cuales la evidencia es producida y articulada al proceso de decisión y, finalmente, la visibilización de los marcos culturales bajo los cuales funciona la producción de evidencia psicológica y la construcción de argumentos jurídicos. Además, establecer los elementos narrativos, mediante los cuales las partes movilizan un marco cultural para entender la homoparentalidad, significa contextualizar el funcionamiento de las retóricas que cada una de las partes utiliza para reclutar aliados y brindar una visión a favor o en contra de la adopción gay.

A modo de cierre:

Los elementos que he expuesto en este capítulo tienen que ver con las diferentes herramientas que los ESC proveen para analizar la circulación de conocimiento especializado en la toma de decisiones; el propósito de este trabajo es registrar el uso de ese conocimiento así como las dinámicas subyacentes al proceso de construcción de una decisión de interés público. Básicamente, mediante la recopilación de estudios sobre experticia, co-producción, narrativas y retóricas he mostrado que los ESC permiten evidenciar la producción de conocimientos y la negociación de intereses sociales vía esos conocimientos, todo esto en el marco de la construcción de una decisión pública.

Brindar esta mirada sobre la construcción de hechos y la producción de evidencia en el ámbito jurídico hace que las decisiones puedan apreciarse como un proceso constituido por una compleja red de actores que representan intereses a favor y en contra de la homoparentalidad. En relación con este conjunto de abordajes realizados por los ESC, el énfasis del presente trabajo se encuentra en la manera en la que el proceso de decisión sobre adopción gay involucra una particular relación entre conocimientos especializados de la psicología, las leyes, el derecho y las deliberaciones de la Corte. Concretamente, el debate sobre adopción gay en Colombia permite indagar por la manera en la que el conocimiento de los diversos actores involucrados en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 es incorporado a la decisión de avalar o denegar las familias homoparentales como relaciones legítimas en la sociedad colombiana.

Dar cuenta del proceso de decisión en las sentencias significa preguntarse por cómo este ensamblaje de conocimientos que compone los textos emitidos por la Corte involucra mecanismos narrativos de las partes interesadas en producir y establecer un orden social a favor o en contra de la homoparentalidad. En relación con esto, el análisis de las decisiones como proceso, permite concentrarse en dar cuenta de la manera en la que la Corte utiliza y promueve unos mecanismos retóricos específicos mediante los cuales pretende establecer la legitimidad sobre la aceptación o exclusión legal de las familias homoparentales en Colombia. Esto último implica una narrativa sobre la familia y las relaciones parentales que no solo significa una decisión sobre el reconocimiento de una particular forma de familia, conformada por parejas del mismo sexo, sino que involucra un cambio social y cultural frente al modelo tradicional heterosexual.

De este modo, el análisis que viene a continuación presentará las tensiones y encuentros que los actores dentro de la sentencia expresaron en sus narrativas en torno a la homoparentalidad; los beneficios o los riesgos con los que interpretan la posibilidad de que un menor sea criado por dos hombres o dos mujeres. El potencial de los ESC para dar cuenta de estos asuntos en los que valores sobre lo que debería ser la familia están en discusión es interesante puesto que, como he indicado antes, es común que los expertos movilicen mediante el conocimiento creencias sobre el funcionamiento del mundo social; lo cual tiende a ser invisibilizado por los procedimientos formales de la Corte, pero oculto no significa que los conocimientos y las decisiones se encuentren efectivamente desligados de intereses sociales y posturas políticas sobre la sexualidad y la familia.

La perspectiva en ESC permite entonces evidenciar que, aunque el debate sobre adopción gay es planteado en términos de leyes, derechos y conocimientos de psicología, de fondo la discusión trata de dos modelos de familia enfrentados, uno tradicional respecto a los roles como padres y como madres que se supone deben cumplir hombres y mujeres, y otro que trata de flexibilizar esos roles parentales para incluir a las figuras homoparentales. A partir de lo recopilado anteriormente, comprenderé, la adopción gay como un objeto de discusión que involucra una construcción híbrida, desde lo psicológico, lo jurídico y desde los activistas para incluir o excluir a la homoparentalidad no solo en un marco jurídico sino sobre todo en un marco sociocultural que reúne a diversos actores que intervienen en las sentencias y que le imprimen su particular punto de vista a ese objeto de discusión.

El esfuerzo analítico que presentaré en el siguiente capítulo intentará guardar parte de la complejidad de la discusión. Pese a que por propósitos prácticos los puntos de vista sobre la adopción gay pueden organizarse en términos de las posiciones a favor o en contra de

su reconocimiento legal, las miradas sobre la homoparentalidad son diversas; de ahí que el seguimiento narrativo de las versiones que brindan las partes tenga el potencial de visibilizar las diferentes nociones culturales de familia, sexualidad y parentalidad que se encuentran en tensión al momento de discutir el reconocimiento de un modelo alternativo a la heterosexualidad. Adicionalmente, en relación con esas visiones tan diversas en competencia, en el debate parece relevante la legitimidad y la autoridad como medios para estabilizar un particular orden social de reconocimiento o descrédito de la homoparentalidad así como, en el ámbito científico, estos constituyen medios para establecer hechos.

En la toma de decisiones jurídicas, la participación de cada uno de los actores que interviene en las sentencias define y proyecta un posicionamiento sobre la adopción gay que trata de establecerse como un punto de vista legítimo defendido de forma no arbitraria sino desde un campo de conocimiento especializado como la psicología, las leyes y los derechos. Por tanto, realizar un abordaje desde los ESC acerca de la homoparentalidad permite poner en acción los intentos por seguir y registrar el conocimiento especializado en el espacio público no solo evidenciando su circulación sino visibilizando la manera en la cual el uso de ese conocimiento funciona de forma simultánea al establecimiento de autoridad y legitimidad en el proceso de toma de decisiones. Es decir que una mirada desde los ESC hace posible la descripción las decisiones de la Corte como un proceso, lo cual evita asumir la autoridad o la legitimidad de un conocimiento sino, por el contrario, permite articular estos elementos al análisis para evidenciar la manera compleja en la que conocimiento, validez, intereses y posicionamientos son producidos en la discusión.

De tal manera, el presente trabajo abordará la movilización social en el escenario jurídico como un complejo conjunto de acciones que ensamblan y fabrican hechos y decisiones. Así pues, en este trabajo reconozco que hay diversos tipos de lenguajes que se encuentran; pues están presentes las voces de los ciudadanos y activistas que demandan derechos, los magistrados que tratan de administrar justicia y los expertos que intentan proveer hechos. Todos estos actores establecen diálogos y lenguajes híbridos que se fortalecen entre sí para soportar un posicionamiento a favor o en contra de la homoparentalidad, una perspectiva narrativa como la desarrollada en los ESC permite hacer el seguimiento de esta situación en su riqueza sociocultural. Además, como lo he señalado, los repertorios argumentativos conforman una estrategia para organizar las creencias y evidenciar los marcos culturales de las partes; en lo que sigue me concentraré en dar cuenta de esa riqueza narrativa de los textos de las sentencias.

Finalmente, esta propuesta de trabajo no solo brinda una visión centrada en los resultados de la toma de decisiones donde los actores relevantes son los magistrados, quienes finalmente expresan en términos jurídicos la decisión, sino que se trata de una visión sobre la decisión como una cuestión cuidadosamente tejida que permite visibilizar los diversos actores involucrados en la negociación de un objeto como la adopción gay. De este modo, no solo es importante revelar la participación de diversos actores sino su papel en la tarea de tejer justicia sobre la homoparentalidad. En lo que indican los ESC las ideas de verdad y las ideas de justicia se encuentran construidas y soportadas por una narrativa particular que es movilizada por los actores involucrados en la toma de decisiones. Así pues, parece que la posición a favor o en contra de la adopción gay conlleva implícita una idea, o mejor dicho una prescripción, sobre categorías como la familia y los roles parentales de acuerdo con la cual sería coherente o no el modelo homoparental. La movilización de los actores

intervinientes dentro de la sentencia es entonces algo sutil que requiere un cuidadoso trabajo de registro y análisis; es esto justamente lo que presentaré en el siguiente capítulo.

2. Producción de órdenes sociales a favor y en contra de la homoparentalidad en la Corte Constitucional de Colombia

El presente capítulo tiene como propósito hacer evidente que, en el escenario de toma de decisiones públicas, circulan intereses sociales y valores que son invisibilizados por mecanismos estratégicos que representan la discusión y los fallos de la Corte Constitucional como si se tratará de una cuestión meramente técnica relacionada con las leyes y alejada de posturas y valores sociales en competencia. Dentro de este argumento, será importante evidenciar que los actores intervinientes dentro de las sentencias aquí analizadas (C-802 de 2009 y C-710 de 2012) representan posicionamientos a favor y en contra de la adopción gay, y que para defenderlos fabrican repertorios argumentativos en los que narran en un particular sentido categorías sociales y culturales como la familia y los roles parentales.

En ese sentido, lo que aquí interpreto es un debate jurídico que tienen amplias repercusiones sociales y culturales para legitimar o deslegitimar la homoparentalidad como forma de establecer una familia basada en figuras parentales homosexuales. Así es, justamente, como magistrados, expertos, activistas y ciudadanos han representado y participado en el debate. Concretamente, la posición a favor de la homoparentalidad es defendida a través de la flexibilización del concepto de familia y roles parentales para incluir a las uniones del mismo sexo lo cual entra en tensión con la postura contra la homoparentalidad defiende una visión heterosexual de la familia basada en la necesidad de la diferencia sexual.

Para poder dar cuenta de lo anterior, he organizado los argumentos de los actores intervinientes en las sentencias C-809 de 2009 y C-710 de 2012 sobre adopción gay revelando los posicionamientos y la particular narrativa con la que tejen la homoparentalidad dentro del marco jurídico colombiano como algo que merece aceptación o rechazo por parte de la Corte Constitucional. Me he concentrado en las demandas de constitucionalidad puesto que registran la manera en la cual la Corte apropia los reclamos de los ciudadanos y los ensambla al proceso de toma de decisiones jurídicas donde convoca a actores expertos para escenificar la discusión pública que permite producir y comunicar una decisión revestida de un sentido de justicia y legitimidad para el público.

La mirada desde la cual describo y analizo la discusión sobre la homoparentalidad escenificada en la Corte, está construida a partir de herramientas conceptuales que provee

el campo de los ESC. Como he indicado en el capítulo anterior, el estudio sociológico del conocimiento científico se ha extendido hacia el estudio de la ciencia en ámbitos y en su hibridación con otro tipo de conocimientos. De tal manera, los recursos mediante los cuales los ESC describen la ciencia como un conocimiento construido, inmerso en valores e intereses sociales y referido a un marco cultural e histórico permiten visibilizar características como estas en el proceso de toma de decisiones, el cual puede entenderse como un escenario de producción de hechos jurídicos en el que los actores intervinientes en las sentencias tratan de establecer un mundo social en el que las figuras homoparentales sean aceptadas.

A continuación señalo la utilidad de algunos conceptos clave del campo de los ESC, que fueron presentados en el capítulo primero, y que aquí re-enmarco en relación al desarrollo del análisis de las sentencias sobre homoparentalidad. Para describir el papel de los conocimientos especializados en la Corte, el idioma de *co-producción* expuesto por Jassanoff (2004) constituye una manera de visibilizar las dinámicas de construcción de la familia como un resultado complejo proveniente de la articulación del lenguaje especializado tanto de la psicología como del derecho y de los activistas lo cual repercute en la definición y redefinición de identidades válidas para cumplir roles parentales. Así mismo, el idioma de co-producción permite pensar las tensiones que involucra el uso de conocimiento especializado, de forma estratégica, para cuestionar o mantener la heterosexualidad como forma institucionalizada de vivencia de la sexualidad y como modelo ideal de la conformación familiar.

En relación con la co-producción, la idea de *red legal* otorga la posibilidad de comprender el mecanismo de articulación entre los diversos conocimientos que son convocados y utilizados en las sentencias sobre adopción gay. Maldonado (2011) comprende la sentencia constitucional como una tecnología literaria que construye una red legal, en la que los actores involucrados establecen el hecho jurídico. Así pues, la co-producción entre ciencia y derecho se puede registrar como una red compuesta por los actores quienes ensamblan la homoparentalidad como un hecho jurídico viable o inviable de acuerdo con su posicionamiento. De tal manera, la tarea analítica consiste en dar cuenta de la compleja trama de actores que entrelazan sus argumentos unos para avalar y otros para denegar la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten.

Esa reconstrucción de la red legal puede llevarse a cabo a partir del texto de las sentencias revelando la manera en la cual esos documentos movilizan unas particulares narrativas sobre la homoparentalidad y la forma en la cual los lenguajes de científicos, juristas y activistas se ensamblan. Pero no puede perderse de vista que esa narrativa no es meramente jurídica sino también sociocultural, pues conlleva al aval o rechazo de otras formas de experiencia de la sexualidad y de conformación de una familia diferentes a la heterosexual. Justamente, para revelar ese carácter socio-cultural de la discusión jurídica en la Corte acudo a la idea de *narración legal* de Kruse (2012) quien argumenta que la validez y el uso de la evidencia se enmarca en una trama social que narra a personas y relaciones sociales en el escenario legal, lo cual involucra unos guiones culturales que hacen creíble esa particular narrativa de los actores que tratan de fabricar el hecho jurídico.

Así, lo que intento hacer en el análisis es una reconstrucción de las versiones de las partes y visibilizar de qué tratan las narraciones basadas en la psicología, en el activismo y en el derecho dentro de las sentencias, y cómo tratan de hacer creíble una versión de orden

social a favor o en contra de la homoparentalidad. Con ello, puedo dar cuenta de las definiciones y las tensiones de las partes acerca de categorías como la familia y los roles parentales y de cómo resuelven o mantienen la heterosexualidad como paradigma de la vivencia de la sexualidad en nuestra sociedad.

Adicionalmente, el reconocimiento de marcos socio-culturales involucrados en la narración legal revela la discusión sobre el papel de los expertos en la toma de decisiones, pues es común asumir que los conocimientos especializados constituyen un tratamiento objetivo y alejado de valores e intereses sociales, en otras palabras es común asumir la experticia como alejada de referentes socio-culturales. Sin embargo, diferentes nociones sobre la *experticia* en el campo de los ESC (Nowotny, 2003; Wynne, 2004, Jasanoff, 2008; 2012) han tratado la experticia como algo que, en vez de corresponder a una categoría de conocimiento predefinida y terminada, se trata de una relación entre el conocimiento producido por algunas personas que han sido acreditadas como expertos por medio de credenciales institucionales y títulos académicos frente a otros que son representados como dotados de simple experiencia. Así pues, la cuestión del conocimiento especializado se puede tratar como un acto en el que unos actores sociales son definidos como “expertos” y en ese sentido cobra un carácter de relación social articulada a marcadores culturales de legitimidad y de autoridad.

En ese sentido, los expertos corresponden a actores que son introducidos dentro de las sentencias por cuenta de negociaciones sociales sobre qué tipo de conocimientos pueden establecer lo que constituye una familia, cómo debe funcionar y cuál debe ser el papel de las uniones homoparentales en relación con ello. El llamado a la experticia entonces involucra una serie de definiciones sociales sobre la familia que conlleva a que ciertas identidades sean validadas para cumplir con el cuidado y la crianza de menores. De tal manera, la experticia responde al debate sobre la adopción gay discutiendo y tomando partido acerca de categorías que cuentan con un arraigo ampliamente social y una carga de valor como lo son la sexualidad y la parentalidad.

Dentro de las sentencias, aparece establecida una relación entre actores que estabilizan el hecho jurídico más que entre actores interesados y dotados de puntos de vista que marcan su participación en el proceso de toma de decisiones. Por ello, en la labor analítica trataré de visibilizar el papel de los expertos en el establecimiento de la legitimidad y la autoridad de las decisiones de la Corte. Así mismo, en relación con la incertidumbre ante la cual se exponen los expertos por enfrentarse con objetos de discusión impuestos por la agenda pública más que por sus propios campos de conocimiento (Jasanoff, 1987; Zeedyk & Raitt, 1998; Nowotny, 2003) registraré la forma en la cual los expertos en psicología, derecho y los activistas gestionan la incertidumbre sobre categorías como la familia y la parentalidad que más que finalizadas se encuentran en definición y re-definición en el proceso de toma de decisiones.

Adicionalmente, lo que Epstein (2007) llama *paradigmas biopolíticos sobre la diferencia* enmarca parte del qué hacer discursivo de las partes en la controversia sobre adopción gay. El autor se refiere a la manera estratégica en la que unos actores establecen una agenda activista a través de la diferenciación de subgrupos humanos en el ámbito biomédico. En el contexto de la toma de decisiones jurídicas será relevante apreciar cómo las partes tratan de gestionar la diferencia entre figuras homoparentales y heteroparentales. Concretamente, será importante describir cómo es que los actores intervinientes en las sentencias discuten y presentan la homoparentalidad como algo

conciliable o no con la visión tradicional de la diferencia biológica entre hombres y mujeres que, se supone, repercute en las labores de cuidado hacia los menores.

Para cerrar esta introducción, me permito describir el tratamiento que realice de la información de las sentencias e introduzco a los actores que participaron en las sentencias que son objeto del análisis. He acudido al uso del software atlas ti para identificar los argumentos centrales tanto en la sentencia C-802 de 2009 como en la sentencia C-710 de 2012 y para distinguir cuáles fueron los posicionamientos dentro de ambos procesos de decisión. Luego de ello, me dediqué al análisis de los fragmentos previamente identificados como relevantes y los organicé en términos de repertorios argumentativos que me facilitaron la tarea de hallar las definiciones de categorías relevantes para los actores involucrados en la regulación jurídica. Como mostraré en lo que sigue, la familia y los roles parentales fueron el foco nodal de la discusión y a estas categorías se articuló el debate sobre la igualdad, el desarrollo adecuado del menor, y los derechos.

Finalmente, reconozco aquí que, como indica Maldonado (2011), la justicia toma formas estandarizadas pues la sentencia toma una estructura particular en el que son estabilizadas las relaciones entre los actores que participan en la toma de decisiones. La forma típica de esa estructura contiene siete partes, (1) los *antecedentes* que incluyen fallos y demandas que preceden el caso al que se refiere la sentencia (2) las citas de las *normas demandadas*, (3) los argumentos de la *demandas* (4) las *intervenciones* de los grupos de interés por su experticia y representatividad frente al problema, y declaraciones libres de ciudadanos e instituciones, (5) un *concepto del procurador general de la nación*, (6) *consideraciones y fundamentos de la Corte*, en los que se enmarca el problema y su decisión, (7) *aclaraciones de voto*, donde los magistrados realizan mayores explicaciones sobre el voto a favor de la decisión y salvamentos de voto en el caso de los votos en contra de la decisión. En el análisis, me he concentrado en fragmentos que componen las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 que evidencian una narrativa a favor o en contra de la homoparentalidad. Los repertorios argumentativos que describo a continuación componen las sentencias sobre homoparentalidad y fueron desplegados especialmente por las intervenciones de los grupos de interés. Concretamente, la Tabla 2 señala cuáles fueron estas participaciones.

Tabla 2.

Listado de intervenciones de grupos de interés presentadas en calidad de *Amicus Curiae* en las sentencias de 2009 y 2012.

Orden experto en el debate jurídico sobre adopción gay en Colombia		
Sentencia	Tipo de experticia	Instituciones
2009		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Oficina Jurídica Universidad del Rosario-Facultad de Jurisprudencia Comisión Colombiana de Juristas
	Jurídico-administrativa	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Academia Colombiana de Jurisprudencia Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República Ministerio de Justicia y del Derecho Universidad Externado de Colombia

2012		Universidad del Rosario
2009	Psicológica	Fundación Para el Avance de la Psicología Instituto de Investigación del Comportamiento Humano Universidad Simón Bolívar Universidad Pontificia Bolivariana Universidad del Norte Universidad de la Sábana Universidad Autónoma de Bucaramanga Universidad Javeriana Universidad del Valle Universidad de los Andes Universidad Nacional
2009	Activistas en derechos LGBT	Centro Comunitario de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT) Colombia Diversa Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas
2012		Colombia Diversa

Fuente: elaboración propia.

2.1 Producción de conocimiento y configuración de orden social en torno a la homoparentalidad: repertorios argumentativos

Los argumentos movilizados en las demandas y en los textos de las instituciones intervinientes se encuentran articulados en las sentencias constitucionales, conforma un ensamblaje establecido por la Corte en la que resume, recorta y presenta argumentos y recursos textuales utilizados por estos actores contando una historia sobre la controversia en la que re-construye las versiones de los participantes respecto a la homoparentalidad en Colombia. Mediante las sentencias, la Corte representa a las partes, sus recursos y la interpretación que realizan de las leyes. En ese sentido, el análisis de los discursos sobre

familia y parentalidad dentro de las sentencias permite comprender la forma en la que la Corte representa las posturas de las partes, a favor y en contra, de la adopción gay y cómo las negocia para construir un consenso.

Desde el campo de los ESC, Mulkay (1993) organiza el material narrativo de la controversia sobre tecnologías de fertilización in vitro en Gran Bretaña en términos de repertorios argumentativos para visibilizar las versiones de sociedad que defienden cada una de las partes. Fundamentalmente, los repertorios argumentativos conforman una herramienta para registrar las concepciones de las partes sobre un problema social. En el caso de la adopción gay, la organización de los argumentos de los actores en términos de repertorios argumentativos permite evidenciar la definición sobre categorías sociales como familia y relaciones parentales que, cada una de las partes, trata de movilizar en el proceso de toma de decisiones.

En ese sentido, he organizado los argumentos de la sentencia C-802 de 2009 y de la sentencia C-710 de 2012 en torno a tres repertorios argumentativos que recogen las perspectivas de los participantes y resume su posicionamiento de aceptación o rechazo de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El “repertorio del interés superior del menor” se refiere a los argumentos que han sido utilizados para promocionar y convocar intereses en contra de la homoparentalidad, está construido alrededor del supuesto central de que los derechos de las parejas del mismo sexo se encuentran en contradicción con los derechos del niño que deben primar sobre los de los adultos. El “repertorio de la igualdad” moviliza intereses a favor de la homoparentalidad planteando que los derechos de los niños y de los adultos LGBTI a una familia no son contradictorios sino que se complementan. Finalmente, el “repertorio de la falta de información adecuada” está orientado a descalificar intereses particulares en la defensa o rechazo de la adopción gay; mediante este repertorio las partes se desacreditan mutuamente tratando de hacer visibles los intereses de la contraparte y ocultando los propios intereses.

Mediante los repertorios argumentativos las partes movilizan su propia versión como verdadera, correcta, adecuada y la de la contraparte como falsa, incorrecta e inadecuada. De tal manera que, hacer el seguimiento de los intereses a través de las acciones discursivas que los actores involucrados, consignan en el texto de las sentencias, permite revelar los mecanismos mediante los cuales es construida la decisión jurídica en la Corte Constitucional y la manera en la que son involucrados conocimientos para la defensa o el rechazo de cierto tipo de sexualidad y formas de parentalidad. A continuación describiré los principales argumentos que componen cada uno de los repertorios.

2.1.1 Derechos de los adultos vs derechos de los menores: la familia como una cuestión heterosexual

El “repertorio del interés superior del menor” produce una disyuntiva entre los derechos de los niños y las niñas a tener una familia y los derechos de las personas homosexuales. Desde esta perspectiva, no se debe privilegiar los deseos de los adultos por encima del derecho de los menores a tener un padre y una madre. En este sentido, el ICBF argumenta tanto en el 2009 como en el 2012 que no existe un derecho a adoptar sino el derecho de

los niños y adolescentes a tener una familia; en términos rotundos esta institución afirma que la adopción debe entenderse como una medida de protección que debe guiarse por “el principio de interés superior del niño”.

en aquellos eventos en que se presentaren conflictos entre los derechos a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales y los derechos de los niños a formar parte de una familia protegida por la Carta Política, los mismos tienen clara resolución a la luz del artículo 44 Superior, el cual señala la prevalencia de los derechos de los niños sobre los demás (ICBF, Sentencia C-802 de 2009)

De esta manera, no solo los derechos de los niños y las personas homosexuales son puestos en contraposición sino que es definido y producido un “interés del menor” de acuerdo con el cual los niños y niñas deberían crecer y desarrollarse en una familia tradicional; lo cual hace que una postura en la que coinciden los derechos de los menores y los adultos con orientación homosexual sea invisibilizada y negada con base en la protección de los intereses de los niños y niñas que se supone estarían afectados cuando una pareja del mismo sexo asume roles parentales. La experticia psicológica contribuyó a sustentar este punto de vista.

La adopción no es un derecho de las parejas a tener un hijo, sino es el derecho del niño a tener un padre y una madre y, desde esta perspectiva, debe procederse a defender los derechos de los niños, así como sus intereses en beneficio de su desarrollo integral (Universidad Pontificia Bolivariana, Sentencia C-802 de 2009)

el estilo de educación predominante en la familia juega un papel importante en la capacidad que los niños desarrollan para lograr acoplamiento o ajuste social, por tal razón, considera que toda situación de adopción busca que el menor en situación de desamparo se integre a la familia adoptiva, constituyéndose un tipo de filiación con efectos idénticos a la filiación biológica (Universidad Simón Bolívar, Sentencia C-802 de 2009)

Con estos argumentos la experticia psicológica emerge como un recurso desde el cual aparece como prioritario el que los menores crezcan en una familia con un padre y una madre puesto que esa sería la forma de restituir el derecho de los niños a tener una familia que les brinde las condiciones necesarias para su desarrollo y ajuste social. Además, en estos fragmentos es evidente la defensa de una noción biologizada de familia en la que son rechazadas otras posibilidades de parentalidad diferentes a la heterosexualidad. De forma complementaria con esta interpretación, los expertos en derecho otorgan prevalencia a lo que consideran la “definición constitucional de familia” mientras que los expertos en psicología arguyen que el bienestar en el desarrollo de los niños estaría garantizado por la presencia de un padre y una madre. Ambos campos, pues se articulan a la defensa de la familia heterosexual.

Es decir que la co-producción, en el sentido de Jasanoff (2004) de que el conocimiento genera o redefine instituciones, es evidente en esta postura contra la homoparentalidad. Desde el repertorio del interés superior del menor es defendida una idea de la institución de la familia como una cuestión heterosexual. El modelo tradicional de familia es caracterizado, esencialmente, como aquel que provee el mayor beneficio al menor sin que

sea necesario mencionar evidencia al respecto. Mientras que las familias homoparentales requieren probar aquello que en el modelo tradicional no se cuestiona, es decir unas ventajas asumidas como inherentes a la existencia de un padre y una madre. La experticia psicológica se expresó con argumentos en ese sentido:

Desde la perspectiva del principio de beneficencia, se considera que ante la falta de evidencia sobre un mejor resultado en el entorno de una pareja homosexual, debería preferirse el modelo heterosexual, esto es, ante la ausencia de ventajas demostrables de la parentalidad homosexual, es conveniente preferir la parentalidad heterosexual tradicional (Universidad de la Sabana, Sentencia C-802 de 2009)

La expresión “principio de beneficencia” es utilizada comúnmente en el campo de las ciencias de la salud como parte de los principios de bioética para llevar a cabo decisiones sobre nuevas técnicas o acciones profesionales sobre una población. En el contexto de la discusión de la homoparentalidad, el principio de beneficencia es utilizado para articular un marco cultural sobre la evidencia, pues tal y como Kruse (2012) señala es necesario que en el ámbito legal el conocimiento tenga un sentido cultural. En este caso, la narración legal sobre la homoparentalidad se concentra en presentarla como algo que trata de reemplazar a las familias conformadas por figuras heteroparentales. De ahí, que varios intervinientes en contra de la adopción gay hayan señalado que es necesario tener pruebas de los efectos positivos que tendrían las familias homoparentales antes de otorgarles reconocimiento jurídico. Esto genera el presupuesto de que las familias heterosexuales son las que conllevan indefectiblemente a consecuencias positivas para los menores y que la homoparentalidad es un tipo de relación inexplorada.

En la sentencia C-710 de 2012, la Procuraduría indica que los niños no podrían ser adoptados por cualquier modelo de familia; aunque se está refiriendo concretamente a las figuras homoparentales como inadecuadas para conformar lo que verdaderamente significaría una familia. De ahí argumenta que, debido a que no hay ninguna ley que respalde este tipo de conformación familiar la Corte no podría otorgar su aval legal a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A su vez, este argumento invisibiliza el hecho de que tampoco existe normatividad que prohíba la homoparentalidad. Así pues, la apuesta del repertorio del interés superior del menor es establecer la existencia de una diferencia jurídica entre las parejas homosexuales y las heterosexuales, construyendo una idea de que las uniones del mismo sexo pueden conformar una pareja pero no una familia que supla con las necesidades de los menores, lo cual corresponde a una manera estratégica de establecer un paradigma de la diferencia entre grupos humanos.

No existe ninguna norma del bloque de constitucionalidad invocadas por los accionantes, que ordene al estado colombiano a consagrar el derecho a adoptar o el derecho a adoptar de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, así como tampoco el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser adoptados por cualquier persona o “modelo de familia”, incluidas las “familias” conformadas por parejas conformadas por personas del mismo sexo” (Procuraduría General de la Nación, Sentencia C-710 de 2012)

El ICBF también presenta argumentos en torno al hecho de que la inexistencia de leyes que regulen la homoparentalidad configura un obstáculo del cual no puede desentenderse

la Corte y debería dejarle la labor al congreso de legislar. Igualmente en la sentencia C-710 de 2012, la *Academia Colombiana de Jurisprudencia* argumentó que la Constitución consagra la “idoneidad moral” como medio para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, que el matrimonio sigue siendo exclusivo para las parejas heterosexuales, que la Corte no ha declarado que las parejas del mismo sexo sean familia y, en caso de ser reconocidas como tal, la adopción no es un derecho fundamental. De esta manera, la posibilidad de adopción para las parejas del mismo sexo no es excluida directamente de la “idoneidad moral” pero sí de la definición de familia o de la protección a la misma que brindaría el Estado mediante la Corte Constitucional; esta fue justamente la estrategia para excluir el reconocimiento de la homoparentalidad del ordenamiento jurídico colombiano. De esta manera, la diferenciación de las personas homoparentales como ciudadanos que no pueden conformar una familia es una herramienta bajo la cual trata de gestionarse los derechos en el sentido señalado por Epstein (2007) cuando indica que la diferencia significa tensiones por formas de definir, conocer y gobernar a las poblaciones.

Adicionalmente, los intereses en contra de la adopción gay indican que la homosexualidad puede constituir un peligro para el interés superior del menor. Así pues, es movilizada una idea de justicia de acuerdo con la cual lo amenazante debe ser alejado de los menores. Concretamente, los actores intervinientes intentan establecer que permitir la adopción de menores por parte de figuras de cuidado que, en vez de garantizar su adecuado desarrollo, perturben el reconocimiento de su identidad sexual y los roles de género en la sociedad colombiana es privar a los menores de sus derechos y de la protección que debe garantizar el Estado. En relación con esto, los expertos en psicología que nutren esta retórica describen a las parejas del mismo sexo como inadecuadas para el desarrollo del menor, señalan que constituirían una fuente de inestabilidad y confusión de los niños y niñas que no podrían reconocer su propia identidad sexual y de género por contar con figuras únicamente femeninas o masculinas en su familia. De tal manera, los expertos utilizan un marco cultural de la homosexualidad como peligrosa que no es ajena a las creencias comunes que transitan sobre el tema.

algunas afirmaciones derivadas del conocimiento psicológico, pedagógico y de salud mental que permiten una perspectiva psicoanalítica, por ejemplo, de la importancia dada heterosexual, la cual considera fundamental para superar el complejo de Edipo que da lugar al proceso de identificación, definido como el momento en el cual el niño adopta las características, valores y comportamientos de su progenitor del mismo sexo (Universidad Simón Bolívar, Sentencia C-802 de 2009)

En este fragmento el uso estratégico de los términos “psicológico”, “pedagógico” y “salud mental” no puede pasar por alto debido a que son relevantes para construir una versión de la homosexualidad como peligrosa. El texto resalta la presencia de un padre y una madre en la vida del niño para que pueda identificar su propio género, si la configuración familiar no cumple con ese modelo, lo que se supondría se cumple en una “diada heterosexual” estaría en riesgo para los menores. Es decir, las figuras homoparentales constituirían una amenaza para la salud mental, el desarrollo psicológico y el proceso pedagógico de niños y niñas cuando se encuentran aprendiendo sus roles sociales.

Además, es relevante que desde una perspectiva psicodinámica sea evaluada la posibilidad de que las parejas del mismo sexo cumplan roles parentales puesto que de hecho teóricamente esta forma de familia sería inválida pues la explicación psicodinámica

ha sido basada en las relaciones heterosexuales. De acuerdo a lo que plantea la teoría, el complejo de Edipo se supera con la presencia de figuras parentales de diferente sexo pues consiste en un proceso en el que, por ejemplo, un niño se enfrenta con el deseo y la norma a través de la competencia por su madre con el padre, lo cual se resuelve cuando el niño comprende que no puede poseer directamente a la madre y de ahí adopta características del padre; por eso este proceso es considerado como la base del desarrollo psicosexual en humanos. El proceso en las niñas sería equivalente y ha sido identificado como complejo de Electra. Con base, en esta teoría clásica referida a los procesos de desarrollo en una familia heterosexual no tendría cabida el entendimiento de roles homoparentales pues de facto está posibilidad estaría restringida.

El “repertorio del interés superior del menor” justifica entonces un posicionamiento en contra de la homoparentalidad. El tipo de argumentos del que se nutre este repertorio para movilizar lo que sería “evidencia psicológica” se encuentra referido fundamentalmente a la teoría. Por ejemplo, las concepciones teóricas, toman protagonismo en el *Amicus Curiae* de la Universidad Autónoma de Bucaramanga:

el perfil psicológico de personalidad homosexual, se observa una mayor incidencia de rasgos psicopatológicos (egocentrismo, autocompasión, inmadurez afectiva, celotipias, infidelidades, depresión, ansiedad, adicción a las drogas, etc), lo que contribuye al desarrollo disarmónico de la personalidad del niño adoptado y a las dificultades en la interacción en esos modelos de conducta (Sentencia C-802 de 2009)

En esta intervención la experticia psicológica es utilizada para respaldar la negativa a la adopción gay mediante la fabricación de una entidad psicológica como lo sería la “personalidad homosexual”. Aunque las teorías de personalidad en el campo de la psicología agrupan rasgos para clasificar personalidades con independencia del género y de la orientación sexual el anterior fragmento afirma unos rasgos que serían propios de las personas homosexuales y que afectarían directamente el desarrollo de los niños y niñas adoptados por figuras homoparentales. Es notorio que acudir a la teoría no es lo mismo que producir conocimiento a partir de la misma; la referencia continua a interpretaciones teóricas clásicas sobre la homosexualidad denota que hay una situación de “transgresividad de la experticia”. De acuerdo con Nowotny (2003) los expertos en el ámbito público se enfrentan a problemas sobre los cuales no se ha desarrollado investigación; así pues, el hecho de que los expertos en psicología se centren en teorías y nociones abstractas evidencia que fue tocada una frontera de conocimiento por el proceso de toma de decisiones y que falta producir evidencia al respecto.

Por otra parte, un sentido patológico de la homosexualidad es articulado al proceso de decisión. La pretensión de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar es así mismo interpretada en un sentido pernicioso. En la sentencia del 2012, los demandantes trataron de denunciar que la “idoneidad moral” funciona como un requisito utilizado para excluir a las parejas del mismo sexo; de acuerdo con la retórica del interés superior del menor la denuncia es re-interpretada como una pretensión de que las personas homosexuales sean excluidas de la exigencia de moralidad.

lo que los demandantes pretenden es que se legisle, por vía jurisprudencial, para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar y

además sin que cumplan con el requisito de idoneidad moral”, lo cual es competencia del Congreso y no de la Corte Constitucional (Academia Colombiana de Jurisprudencia, Sentencia C-710 de 2012)

Adicionalmente, como parte de la tradición biomédica, la homosexualidad a lo largo del siglo XIX y parte del XX había sido entendida como una enfermedad. Esa concepción es reproducida por los conceptos de psicología que movilizan intereses en contra de la homoparentalidad, los cuales tratan de establecer que la homosexualidad no solo constituiría un peligro sino que puede asimilarse a una patología debido a que sería un tipo de sexualidad antinatural.

la adopción por parejas homosexuales responde a un deseo que, incluso, pervierte el orden natural y en el que se anteponen los intereses de los adultos sobre los de los niños (Universidad del Norte, Sentencia C-802 de 2009)

Este descrédito de la homosexualidad con base en una perspectiva biológica sobre lo que debe ser el “orden natural” involucra la diferenciación de las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual como un subgrupo que no podría asimilarse al resto de la población. De ahí que la homoparentalidad no pueda reconocerse como un tipo de relación humana reconocible por parte del Estado mediante las leyes, así pues la exclusión de figuras parentales del mismo sexo, de la definición de lo que sería una familia sería justificable de acuerdo con lo que trata de establecer la retórica del interés superior del menor.

desde la perspectiva biológica, existe un orden natural que implica la procreación... y señala lugares y actos funcionales que deben ser asumidos por la especie; es un orden que rige el desarrollo y evolución y que permite el sostenimiento de la misma... Las familias homoparentales implican, en forma clara, unos nuevos patrones de relaciones entre los sujetos que constituyen una sociedad, genera alteraciones en el sistema, así como, unas consecuencias para todos aquellos que lo conforman (Universidad del Norte, Sentencia C-802 de 2009)

La familia tradicional compuesta por un padre y una madre es sustentada en principios biológicos desde los cuales debe funcionar la especie dado que un cambio en los componentes de la familia conllevaría a atentar contra la biología y el sistema social. Entonces, desde la retórica del interés superior del menor, ninguno de estos dos ámbitos -biológico y social- indica que es pertinente aceptar la unión de dos hombres o dos mujeres como familia. Al contrario, es producida una definición de familia que involucra la consanguineidad entre los padres y sus hijos, y que presupone la heterosexualidad. La comprensión e inclusión legal de otros modelos de familia es construida, desde esta perspectiva, como una manera de transgredir el orden heterosexual natural y social que debería prevalecer en las relaciones humanas.

Como otro de los peligros para el interés superior del menor, los intereses en contra de la homoparentalidad fabricaron dentro de su retórica una perspectiva desde la cual la familia heterosexual sería vulnerada en el proceso de aceptar la homoparentalidad. La Universidad del Norte y la procuraduría coinciden en afirmar que la familia tradicional se ha hecho un lugar en la sociedad que es amenazado por las parejas del mismo sexo. De

ahí que, una auténtica igualdad para los niños consistiría en garantizar su crecimiento y desarrollo dentro de familias heterosexuales.

la adopción de menores por parte de parejas homosexuales implica una reflexión desde el principio de la igualdad, puesto que al menor se le impone una marca que lo acompañará en los diferentes momentos de su desarrollo evolutivo (Universidad del Norte, Sentencia C-802 de 2009)

la familia que protege la Carta Política es la familia monogámica y heterosexual, lo cual no ha sido razón excluyente para que la propia Corte reconozca, en su ya reiterada jurisprudencia, derechos a las parejas convivientes del mismo sexo (Procuraduría General de la Nación, Sentencia C-802 de 2009)

El crecimiento del menor dentro de familias homoparentales es concebido como una condición que ineludiblemente conllevaría a “una marca” a lo largo de la vida del niño. De acuerdo con Erving Goffman (1998) cuando en la sociedad tratamos a otros de manera diferencial en virtud de la existencia de “una marca” podemos hablar de estigma social, cuya característica principal es la exclusión basada en el miedo, el peligro o la aversión. En ese sentido, la homosexualidad de los padres es concebida desde la retórica del interés superior del menor como una marca que puede dar lugar a la estigmatización del niño a lo largo de su vida. La manera de evitar esta exclusión social sería la restricción del reconocimiento legal de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

Por su parte, la procuraduría indica que la familia es exclusivamente heterosexual y otorga un estatus diferente a las figuras homoparentales puesto que las restringe a “pareja de convivientes del mismo sexo” que ya han ganado derechos como individuos pero no podrían considerarse como familia. De este modo, el reconocimiento de un modelo homoparental involucraría la erosión de la definición heterosexual y tradicional de la familia por tal razón la Corte debería mantener el orden heterosexual y no convulsionar el contexto en el que se desarrollarían los niños y las niñas. De hecho, en esta retórica esa “nueva” situación de reconocimiento de las familias homoparentales sería equiparable a un peligroso experimento:

las personas homosexuales merecen todo el respeto y tiene los mismos derechos y deberes que los demás, su unión no es asimilable al matrimonio y permitir la adopción de menores por parejas homosexuales puede implicar que los niños se conviertan en conejillos de indias de un experimento social, privándolos de la posibilidad de acceder a aspectos esenciales de la familia (Universidad Pontificia Bolivariana, Sentencia C-802 de 2009)

La diferencia del modelo de familia homoparental con respecto al modelo tradicional es considerada como impedimento para el desarrollo y la integración de los niños y niñas a la sociedad. Desde esta postura, la adopción gay impide que los niños lleguen a hacer parte algún día de una verdadera familia que estaría compuesta por integrantes heterosexuales. Las familias heterosexuales son fabricadas en esta retórica como las que garantizan el bienestar del menor y la familia homoparental es concebida como una amenaza para ese bienestar del menor que debe primar sobre los derechos del sector LGBTI que ha logrado extender sus derechos pero “la familia” estaría restringida para personas homosexuales.

Ese trato diferencial entre uniones heterosexuales y homosexuales podría considerarse como discriminatorio pero la misma retórica del interés superior del menor desvía esta posible interpretación. Desde la perspectiva en contra de la homoparentalidad, la protección distinta de la familia no significaría ningún tipo de discriminación sino el uso adecuado del término de familia; lo cual hace que una re-interpretación o ampliación de la concepción de lo que incluye una familia sea considerada como equivocada. Al respecto el procurador expresa:

el Estado Social de Derecho protege a la familia de una manera distinta, lo cual no genera ningún tipo de discriminación si se tiene en cuenta el principio de la identidad de las relaciones, así pues, las relaciones familiares y aquellas que no lo son, no pueden ser interpretadas como relaciones análogas (Procuraduría General de la Nación, Sentencia C-802 de 2009)

En síntesis, la retórica del interés superior del menor trata de establecer una red legal que movilice una noción biologizada de la familia en la que el modelo tradicional es asumido como el que provee mayor beneficio a los menores, de ahí que sean rechazadas otras posibilidades de parentalidad que no reivindiquen como eje fundamental la presencia de un padre y una madre. Así pues, esta interpretación conlleva a que el ordenamiento jurídico colombiano asuma los roles parentales heterosexuales como aquellos que garantizan el interés superior del niño pues sería el único en garantizar un proceso de desarrollo y entendimiento adecuado, esto es en un sentido correcto, la identidad sexual y de género. Es decir que para este posicionamiento, la única forma de asumir roles sexuales y de género es el modelo heterosexual; por ello indica que una protección de la familia constituida por un padre y una madre no es discriminación para las parejas del mismo sexo sino que justifican la diferenciación como un uso adecuado (el único correcto) del término de familia.

2.1.2 Protección, cuidado y afecto entre figuras homoparentales y menores: los signos del reconocimiento jurídico igualitario

Frente al repertorio del interés superior del menor los intereses pro- homoparentalidad articulan su punto de vista a la idea central de la igualdad. Desde esta perspectiva es posible otorgar un trato equitativo a las personas heterosexuales y a las homosexuales respecto a las relaciones parentales y su reconocimiento legal. Adicionalmente, la defensa de las familias homoparentales no significaría la desatención de los derechos de los niños y niñas a una familia sino justamente su cumplimiento. Desde este punto de vista el rechazo de las figuras parentales del mismo sexo es entendido como una exclusión hacia las personas homosexuales.

no puede seguir estigmatizándose a las parejas del mismo sexo que aspiran a compartir las tareas de cuidado de menores de edad, quienes en un futuro pueden ser personas abiertas a la vivencia de una sexualidad sana y

gratificante con responsabilidad (Universidad Nacional, Sentencia C-802 de 2009)

Desde la retórica de la igualdad, las personas homosexuales deberían tener el mismo derecho que las heterosexuales de acceder a la adopción. Los niños y niñas estarían suficientemente atendidos y cuidados por parejas del mismo sexo, quienes brindarían un ambiente familiar sano para la vivencia de la sexualidad aunque socialmente todavía exista una imagen negativa y patológica de la homosexualidad. De esta manera, los derechos de los menores y las personas homosexuales no serían contradictorios sino que coincidirían en torno al establecimiento de vínculos familiares para aquellos niños que tienen el derecho de crecer en el seno de una familia y aquellas parejas homosexuales que quieren conformar familia.

Aunque un nuevo modelo de familia así como los nuevos tipos de sexualidad hagan que el sistema social cambie, esto no quiere decir que la movilidad social deba ser restringida ni otras formas de innovación que resulten en nuevas formas de relación humana. Desde este punto de vista, la familia homoparental genera tensiones en la forma de entender “la familia” hasta el momento, como una dinámica establecida por un padre y una madre, pero lo hace en virtud de que aquel es un modelo ideal y dominante de familia pero no el único.

un elemento importante a considerar en el presente caso es el impacto social que puede llegar a ocasionar, pues se trata de una situación nueva que contrasta con la forma tradicional y hegemónica de crianza (Universidad Javeriana, Sentencia C-802 de 2009)

Sin embargo, el reconocimiento de ese contraste entre familia heterosexual y familia homoparental no conlleva a la restricción ni el desconocimiento de las conformaciones familiares fundadas por parejas del mismo sexo. Tampoco el nuevo modelo de familia constituiría un reemplazo o negación de la tradicional forma padre, madre e hijos. Más bien, los intereses pro-homoparentalidad se centran en señalar que el interés superior del menor no es la familia heterosexual, así como tampoco la homosexual, sino que ese interés debe determinarse en cada caso. De tal manera, se puede decir de acuerdo con Kruse (2012), que el marco cultural articulado a la narración legal, en este caso, defiende la homoparentalidad como algo compatible con las leyes colombianas que caracterizan a la familia como unidad básica en el que un menor puede desarrollarse de forma integral.

no existe razón suficiente que niegue la posibilidad de que un menor sea entregado a una pareja homosexual, teniendo en cuenta para ello que el funcionario administrativo encargado de la totalidad de los trámites para llevar a cabo una adopción, realiza, en cada caso, una ponderación sobre la idoneidad y estabilidad de la pareja, en orden a procurar la materialización del principio del interés superior del menor (Comisión Colombiana de Juristas, Sentencia C-802 de 2009)

De este modo, el repertorio argumentativo sobre la igualdad cuestiona la idea de que la familia heterosexual es garantía de bienestar para el menor en la manera en la que se afirma cuando se contrasta discursivamente “el modelo tradicional” con la posibilidad de que las parejas del mismo sexo funden una familia. Ese contraste conlleva una carga valorativa entre una familia buena (la tradicional) y una familia mala (la homosexual); esta

diferenciación es cuestionada desde la mirada de “la igualdad” desde la cual debe evaluarse a los posibles adoptantes sean estos heterosexuales u homosexuales para establecer si realmente constituyen figuras parentales adecuadas o no. Frente a este punto la experticia psicológica fue utilizada estratégicamente para evidenciar que las figuras parentales de diferente sexo y del mismo sexo no se diferencian en sus roles parentales debido a su orientación sexual:

manifiesta que no existen estudios e indicadores fehacientes que determinen los efectos en el desarrollo integral del menor criado en parejas homoparentales, pero que debe tenerse en cuenta que tampoco las parejas heterosexuales son garantía de un desarrollo armónico y que lo relevante es el compromiso que se adquiere al adoptar un menor, que, según ha mostrado la experiencia de otros países, no tiene un destino particularmente distinto en atención al tipo de pareja (Universidad del Valle, Sentencia C-802 de 2009)

De acuerdo con lo anterior, una familia compuesta por padre y madre o una compuesta por dos padres o por dos madres no serían en sí mismas garantía o peligro de un desarrollo adecuado para los menores. Desde este punto de vista el cuidado no se encontraría condicionado a la orientación sexual de las figuras parentales. Adicionalmente, en pro de reclamar un trato equitativo entre padres heterosexuales y homosexuales la retórica de la igualdad puede minimizar las diferencias ente un modelo familiar y otro.

en términos generales, podría incluso afirmarse, con apoyo en diversas fuentes científicas, que los hombres o mujeres con orientación homosexual bien pueden llevar a cabo su rol como padres, con resultados iguales que aquellos que arroja el análisis de las parejas heterosexuales (Fundación para el Avance de la psicología, Sentencia C-802 de 2009)

Sin mayor especificación sobre cuáles son los elementos en los que sería similar la crianza en familias heterosexuales y homosexuales el anterior argumento hace uso de la autoridad científica para afirmar la igualdad entre ambos tipos de familia. Otros recursos textuales de los que hace uso la retórica de la igualdad suelen especificar aquello que tendrían de similar las familias heterosexuales y homosexuales enfatizando en la sexualidad de los niños que conviven con figuras homoparentales:

Los estudios sobre roles de género y bienestar psicológico muestran que la convivencia de menores de edad con parejas de mismo sexo produce efectos positivos en el aprendizaje de la identidad sexual aceptando la homosexualidad de sus padres o madres y desarrollando un ajuste psicosocial adecuado en todos los escenarios de socialización de la vida cotidiana: familia, escolarización y uso del tiempo libre (Universidad Nacional, Sentencia C-802 de 2009)

La identidad sexual de los menores configura una de las preocupaciones construidas por los intereses en contra de la homoparentalidad. Como señalaba la retórica del interés superior del menor, no estaría claro para los niños que crecen con dos padres o dos madres el desarrollo de una noción de masculinidad y feminidad puesto que los niños contarían solo con figuras parentales de un único sexo. Frente a este reclamo, la retórica de la igualdad, vía conocimiento especializado produce una versión de orden social

alternativa y lo hace construyendo una idea de las identidades sexuales de los menores como algo complejo que se enriquece de diversos contextos. Este repertorio indica que los escenarios de socialización del menor no varían por la orientación sexual de sus padres por lo cual los niños y niñas contarían con otros referentes, fuera del núcleo familiar, con los cuales pueden construir su identidad sexual del mismo modo que lo harían niños con figuras heteroparentales. Esta estrategia consistió en una redefinición de una identidad, concretamente la del menor como dinámica y diversa, para articular conocimiento y sociedad en el sentido de co-producción señalado por Jasanoff (2004).

Como estrategia adicional a la proclamación de la igualdad en derechos y en el cumplimiento de roles parentales, la retórica de la igualdad modaliza las coincidencias entre el modelo familiar heterosexual y homosexual señalando que si en algo se encuentra diferencias en la oportunidad que tendrían los niños de crecer en un ambiente familiar tolerante con las diferencias sociales, empezando por la diversidad en las orientaciones sexuales que pueden expresar los seres humanos.

Los estudios sobre psicología y homoparentalidad concluyen que la dinámica familiar de las parejas homosexuales ofrece un modelo más igualitario en el aprendizaje de los roles de género que la dinámica familiar de parejas heterosexuales con menores a cargo. Las hijas o hijos de padres gay o madres lesbianas están más preparados para asumir la flexibilidad en los roles de género que exige la sociedad actual (Universidad Nacional, Sentencia C-802 de 2009).

Como indiqué antes, la reivindicación de un modelo homoparental desde la retórica de la igualdad no es construida como una forma de socavar el modelo tradicional de familia. En este caso, la descripción de oportunidades positivas para los menores dentro de una dinámica familiar con figuras parentales del mismo género, no reemplaza ni destruye las virtudes de la heteroparentalidad, sino que esas oportunidades son resaltadas con el fin de reivindicar la existencia de diversos modos de conformación familiar con dinámicas propias y productivas para el crecimiento y el desarrollo del menor.

En relación con esta idea de co-existencia de formas de familia lo que es cuestionado de la heterosexualidad es su hegemonía y autoproclamación de modelo funcional y efectivo para el cuidado de los menores. Frente a esta afirmación el repertorio argumentativo de la igualdad indica que la familia heterosexual no ha sido ni es el único modelo cuando se habla de *una* definición constitucional de “la familia”. Los ciudadanos intervinientes Catalina Lleras Cruz y Mauricio Noguera Rojas argumenta que la ley puede interpretarse en un sentido que reconozca las diversas posibilidades de conformación familiar en Colombia:

En relación con el artículo 42 de la Constitución Política, los intervinientes señalan que en la forma cómo se ha interpretado esta norma en algunas decisiones de la Corte, marcada por una aproximación literal e histórica, que conduce a la prevalencia de la familia monogámica y heterosexual, desconoce que existen múltiples formas de conformación de familias distintas a la anteriormente mencionada, y que pueden considerarse expresamente reconocidas por el artículo 42 bajo el entendido de “vínculos naturales o jurídicos”, o “por la voluntad responsable de conformarla” (Sentencia C-802 de 2009)

Los ciudadanos intervinientes en este fragmento no solo se posicionan a favor de la adopción gay sino que encarnan y construyen parte de la retórica de la igualdad. Los diversos modelos de familia serían igualmente válidos y tendrían un marco legal para ser comprendidos y protegidos por la ley de ahí que la Corte debiera pronunciarse positivamente sobre las pretensiones de los demandantes. Por su parte, los expertos en psicología también contribuyeron en resaltar las diferentes posibilidades de construir familia.

En relación con la familia se expresa que la definición de la misma se ha ampliado, de manera que ésta ya no se reduce a la familia nuclear (padre, madre, hijos) sino que incluye una variedad de tipos de familia, tales como la familia monoparental, las familias reconstituidas, las familias multiculturales, las familias extensas, y, actualmente, las familias de padres del mismo sexo (Universidad Javeriana, Sentencia C-802 de 2009)

Así como existe reconocimiento para las familias que no cumplen con el modelo tradicional porque se componen de integrantes diferentes a la trinidad padre, madre e hijos las familias homoparentales deberían recibir ese respaldo jurídico y social. La retórica de la igualdad resalta que, no es tan relevante quiénes son los miembros de una familia sino las funciones de cuidado y afecto que emergen dentro de cada unidad familiar. En ese sentido, “el interés superior del menor” no podría considerarse de forma abstracta ni se puede asimilar ese interés con la pertenencia de todo niño y niña a una familia heterosexual.

La retórica de la igualdad opta por la reivindicación de la existencia de las familias homoparentales en general y de su funcionalidad en casos particulares. Es decir, que de manera amplia indica que hay figuras parentales del mismo sexo que cuidan a menores; frente a ello las leyes deben responder reconociendo y protegiendo a familias que, si bien no se enmarcan dentro del modelo ideal de familia (padre, madre e hijos) pueden cumplir funcionalmente con proporcionar un ambiente de bienestar para los niños y niñas bajo su cuidado. Desde esta perspectiva, no se puede negar el cumplimiento de los roles parentales por parte de parejas homosexuales solo porque este modelo familiar constituya una alternativa al de diferenciación sexual en la tradicional familia heterosexual en el que el hombre cumple las labores de proveedor y la mujer se encarga del cuidado y la crianza de los hijos. El juicio negativo de la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo es entendido desde aquí como un proceso de que revela prejuicio social:

el concepto de familia se encuentra en constante evolución... este tribunal debe fundar su resolución en hechos ciertos y probados en la causa y no en meras suposiciones o temores (Grupo de apoyo a mamás lesbianas, Sentencia C-802 de 2009)

Desde esta perspectiva de “igualdad” en el trato para las parejas de diferente y del mismo sexo, la defensa abstracta del interés superior del menor puede conllevar a afectar negativamente el bienestar de los niños y niñas puesto que los puede privar de la protección del entorno familiar conformado por parejas homosexuales. Desde esta postura, la política y el marco jurídico deberían adaptarse para reivindicar y respaldar las posibilidades de afecto que brindan las familias homoparentales aunque no se haya probado que este es el “mejor” modelo para la crianza de niños y niñas.

tampoco hay evidencia que, desde la perspectiva del interés superior del menor, muestre que las políticas actuales en materia de adopción sean las más adecuadas (Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, Sentencia C-802 de 2009)

el efecto de la exclusión de las parejas del mismo sexo del ámbito de la adopción lo que termina por hacer es sacrificar la posibilidad de que muchos niños y niñas encuentren una familia adecuada (Colombia Diversa, Sentencia C-710 de 2012)

De nuevo, los anteriores fragmentos de actores intervinientes muestran que la retórica de la igualdad no defiende como “buena” o “mala”, “mejor” o “peor” cierto tipo de parentalidad sino que se centra en reclamar un trato equitativo entre las posibilidades de formar familia independientemente de la orientación sexual de los padres. Con la defensa de condiciones equitativas para parejas heterosexuales y homosexuales, la perspectiva de “la igualdad” sostiene que, los derechos de los niños y los de los adultos que desean adoptar coinciden en tanto que tienen su punto de confluencia en la formación de una unidad familiar.

De este modo, la retórica de la igualdad fabrica una versión en la que “todos ganan” con la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten. Lejos de la naturalización de las relaciones de parentalidad y de las vivencias de la sexualidad esta retórica indica que una definición de las relaciones sociales que no estén justificadas en la “naturaleza” sino en las posibilidades de relación que pueden conformar los humanos para suplir las necesidades de dar y recibir afecto puede conllevar a un sistema social más armonioso y respetuoso. Además socava la concepción de que una parte de la pareja deba encargarse exclusivamente de proveer y la otra de cuidar, desde la homoparentalidad se estarían promoviendo roles sociales equitativos entre la pareja encargada de los menores.

Desde este punto de vista, si los jueces no están dispuestos a reconocer jurídicamente a las familias homoparentales es debido a las resistencias culturales para aceptar la homosexualidad y no porque las personas LGBTI no puedan encargarse del cuidado de los niños. Estas oposiciones también tendrían que ver con el desafío que involucra una pareja del mismo sexo en el cumplimiento de los roles parentales pues conllevaría incluso al desafío de repensar los roles heterosexuales en un sentido más equitativo. De este modo, la negativa de los jueces frente a la adopción gay es entendida como una reafirmación de las concepciones arraigadas en la cultura que no están basadas en hechos que indiquen que una pareja del mismo sexo no puede cumplir sus roles parentales; esas concepciones sobre la heterosexualidad desviarían un proceso adecuado de toma de decisiones, teniendo en cuenta que estas familias homoparentales existen y que requerirían protección para garantizar justamente el interés superior del menor por encima de los prejuicios sociales.

A pesar de que este grupo apoya la existencia del requisito de la idoneidad para adoptar, considera que el mismo, como tal, es un concepto subjetivo, lo que se ha prestado para que, en la práctica, los funcionarios responsables de realizar la evaluación obren con base en prejuicios hacia las personas homosexuales y sin tener en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de casos de maltrato infantil se han dado en hogares constituidos

por padres heterosexuales (Grupo de Apoyo a mamás lesbianas, Sentencia C-802 de 2009)

La retórica de la igualdad, denuncia que los juicios basados en suposiciones o el privilegio de la perspectiva subjetiva no debería convertirse en motivo para vulnerar el derecho de los niños a crecer en una familia aunque esta sea homoparental. A través de la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo se podrían igualmente garantizar el derecho de los niños a una familia. Privar a los menores de un ambiente para su crecimiento en virtud de la orientación sexual de los padres sería arriesgar el desarrollo de los niños y niñas por un prejuicio.

lo importante para el correcto desarrollo de un menor, es el cariño y el ambiente sano en que éstos crezcan y no, la orientación sexual de sus padres (Centro Comunitario LGBT, Sentencia C-802 de 2009)

De igual manera, el beneficio que la familia homoparental brinda a los menores podría constituir un efecto positivo para la reivindicación de personas que han pertenecido a un grupo social tradicionalmente excluido.

se reconoció que al igual que las personas heterosexuales, las mujeres lesbianas y los hombres gays obtienen importantes beneficios psicosociales cuando reciben reconocimiento y soporte de sus familias y redes sociales. Muchos estudios muestran como lesbianas y gays manifiestan mejor salud mental cuando mantienen sentimientos positivos respecto de su propia orientación sexual, han tenido la oportunidad de desarrollar un sentido positivo respecto de su identidad personal y han logrado una efectiva integración de sus vidas afirmando su orientación sexual (Universidad de los Andes, Sentencia C-802 de 2009)

El sector LGBTI ha sido caracterizado socialmente como patológico y peligroso en el sentido defendido por la retórica del interés superior del menor. Sin embargo, una oportunidad para vivenciar relaciones humanas comunes y corrientes como las que establecen las personas heterosexuales puede hacer visible que, si en algo son diferentes las parejas del mismo sexo, es en la exclusión social que sufren la cual puede llevar a una salud mental disminuida. La posibilidad de adopción gay haría que la vivencia de la homosexualidad no signifique un estigma social que les excluye de la posibilidad de cuidar, criar y proteger a menores a su cargo. En ese sentido, la retórica de la igualdad brinda una versión desde la cual la inclusión de las personas homosexuales constituye una manera de expresar respeto hacia la diferencia:

hoy en día se debe ser consciente de las relaciones que son diferentes a las tradicionales y, es un reto para la sociedad, reconocer y aceptar los derechos de éstas, como lo es, precisamente, la posibilidad de adoptar” (Centro Comunitario LGBTI, Sentencia C-802 de 2009)

El cambio social entonces sería parte de lo que define a la sociedad por ello las relaciones reguladas jurídicamente deberían acoplar normas, derechos y obligaciones a los cambios sociales en vez de truncar la posibilidad de adoptar por el hecho de que significa una variación de la familia tradicional. En la versión de sociedad que provee la retórica de la igualdad, los niños y niñas deben tener la oportunidad de crecer en un ambiente de

tolerancia y respeto, lo que incluye la aceptación de formas diversas de sexualidad. Por ello la experticia jurídica señala lo que significa la restricción de la adopción gay cuando se invoca el interés o el bienestar del menor:

el argumento de la posible discriminación del menor es insostenible y paradójico, porque al paso que reconoce la existencia de una valoración social negativa hacia el homosexualismo, propone una medida -prohibir la adopción por parejas homosexuales- que dejará intacta la práctica discriminatoria (Comisión Colombiana de Juristas, Sentencia C-802 de 2009)

Así, proporcionar una sociedad justa y equitativa para el desarrollo de los menores pasaría por la igualdad en el acceso a la adopción como sustituto de las fuerzas procreativas naturales tanto para las personas heterosexuales que lo requieren como para las homosexuales. La restricción de derechos es, desde esta perspectiva, un acto discriminatorio y una forma de estigmatización social que no puede encubrirse bajo la defensa de los derechos de los menores, las supuestas repercusiones negativas en su desarrollo o el señalamiento social pues todo esto constituiría una forma de perpetuar un sistema social inequitativo y hostil. De esta manera, el posicionamiento a favor de la homoparentalidad intenta articular la red legal dentro de las sentencias alrededor de un sentido de democracia en el que sería ilegítimo excluir figuras homoparentales del reconocimiento jurídico.

2.1.3 De la defensiva a la ofensiva el desprestigio de la visión sobre homoparentalidad de la contraparte

Las retóricas del interés superior del menor y de la igualdad construyen versiones diferentes sobre el significado de la sexualidad, la parentalidad y el cambio social que convocan y movilizan intereses en contra y a favor de la homoparentalidad. A su vez, las partes intentan quebrantar versiones alternativas sobre el orden social; para ello ambas posiciones hacen uso de un tercer tipo de retórica. El “repertorio de la falta de información adecuada” es utilizado por las partes para desprestigiarse mutuamente reduciendo sus posiciones a un reflejo de los intereses particulares que puede tener el hecho de oponerse o apoyar la adopción gay.

De esta manera, para los grupos que defienden la adopción gay, la oposición a las familias homoparentales significaría una defensa de intereses personales más que una manera legítima de posicionarse sobre el asunto en términos jurídicos. Así mismo, desde el punto de vista de los grupos en contra de la homoparentalidad el apoyo a la adopción por parte de parejas del mismo sexo significaría una disposición personal hacia la homosexualidad que no debería introducirse en el proceso de toma de decisiones jurídicas.

De acuerdo con los grupos en contra de la regulación de la adopción gay, la reivindicación de la adopción gay produce una discusión jurídica a partir de leyes que no tendrían relación con la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. En ese sentido, los interesados en que se rechazara o postergara la regulación de la adopción gay trataron de

que la corte se alejara de tomar una decisión definitiva sobre el asunto puesto consideraban que en la discusión jurídica prevalecía el debate sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten más que la constitucionalidad de la norma demandada.

Concretamente, la estrategia de desprestigió en la sentencia de 2012 estuvo orientada a devaluar las pretensiones de la demanda. Allí el Ministerio de Justicia y del Derecho expresó que el Código de Infancia y Adolescencia no priva a una persona de poder adoptar por su condición sexual, pero tampoco la exime de la “idoneidad moral” que debe acreditar para realizar la adopción. Por su parte, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República manifestó que el Código de Infancia y Adolescencia no incluye la homosexualidad como una condición contraria a la “idoneidad moral” del adoptante. De esta manera, estas instituciones plantean que la posibilidad de adopción por parte de personas homosexuales estaría separado de la idoneidad moral que puede ostentar o no cada candidato. Con ello, argumentan que no habría razón para manifestarse sobre la expresión legal que los demandantes suponen de manera subjetiva como discriminatoria.

En el proceso de 2012 también fue recurrente el descrédito del proceso mismo de toma de decisiones en la Corte. Los actores intervinientes que defendieron intereses en contra de la homoparentalidad argumentaron que en la decisión sobre las posibilidades que tendría una pareja del mismo sexo para adoptar no sería propia de la Corte sino de los representantes de la sociedad en la política, es decir en el Congreso de la República. Los ciudadanos intervinientes Alejandro Badillo Rodríguez, Gilberto Lievano Jiménez y Laura Benavides Ángel encarnan este punto de vista de la siguiente manera:

buscar la inexequibilidad de la expresión moral es atribuirle una función impropia a la Corte Constitucional, pues el único que puede fijar los parámetros de autogobierno así como los modos de vida buena es la sociedad mediante el Congreso

La creación y defensa de fronteras entre lo político y lo jurídico constituye un argumento estratégico en contra de la adopción gay. Por una parte, cumple el papel de representar como ilegítima una decisión jurídica ya que es presentada como competencia del Congreso y no de la Corte. Por otra parte, dado que ha sido la Corte la que principalmente ha solucionado los reclamos por los derechos del sector LGBTI alejarla de un pronunciamiento de fondo sobre la adopción gay conlleva a que los demandantes sean remitidos a corporaciones, como el Congreso, donde no han recibido respuestas.

Otra de las estrategias que durante el 2012 fueron utilizadas para desacreditar las pretensiones de regulación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo fue el re-interpretación de la demanda. El concepto de la Universidad del Rosario cuestionó lo que pasaría si se elimina la “idoneidad moral” del adoptante, si todas las personas podrían adoptar independientemente de que hayan sido objeto de un hecho ilegal o inmoral debidamente comprobado. Así, el concepto ironiza y debilita el propósito de la demanda, de que la Corte revise la “idoneidad moral” como criterio que es utilizado para excluir a las personas homosexuales. Esta interpretación de la demanda indica que mediante la reivindicación de la adopción por parte de personas homosexuales los demandantes desearían eliminar las condiciones morales mínimas de los adoptantes.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia también reenmarca los argumentos de la demanda por medio de la ironización. Esta institución opta por debilitar la demanda planteando que carece de claridad al momento de expresar sus pretensiones, puesto que no sería claro si lo que buscan los demandantes es que se reconozca el derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el derecho de los menores a ser adoptados por parejas homosexuales, que no se exija el requisito de idoneidad moral a los adoptantes, o que se declare inconstitucional la expresión moral. Adicionalmente, indica que las acciones de inconstitucionalidad no son para "ventilar situaciones jurídicas particulares" y que si todos los cambios sociales o políticos en una sociedad fueran causa de nuevos juicios, la "cosa juzgada constitucional" dejaría de existir.

Así mismo, la Academia Colombiana de Jurisprudencia afirma que los demandantes pretenden que se legisle por vía jurisprudencial para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, sin que cumplan con el requisito de idoneidad moral. En ese sentido, la institución estabiliza de manera estratégica las pretensiones de la demanda, básicamente, las redefine proporcionando una lectura desde la cual la demanda sobre adopción gay buscaría confundir y revertir los ámbitos legislativo y jurídico, así como las condiciones morales para ser padres o madres. La posible decisión de la Corte es predefinida como una extensión de sus funciones como lo trata de expresar un ciudadano interviniente:

la Corte Constitucional, en este caso, carece de competencia para conocer “de una demanda contra interpretaciones extensivas del actor sobre normas positivas de protección de los derechos de los niños mediante la adopción conjunta y evitar un fallo inocuo y violación de la jurisprudencia sobre los efectos frente a terceros (Aurelio Ignacio Cadavid López, Ciudadano)

El cuestionamiento de la Corte para regular la adopción gay es utilizado como una forma de debilitar la reivindicación jurídica de derechos para las parejas del mismo sexo. En un mismo sentido, la procuraduría expresó que la Corte no tiene competencia para decidir sobre adopción gay puesto que ese asunto constituye una “omisión legislativa” que debe ser resuelta en otra instancia.

Por su parte, el proceso de 2009 estuvo marcado por otras estrategias para imputar intereses personales respecto al apoyo a la adopción gay. En la sentencia C-802 no fueron discutidas las pretensiones de los demandantes sino las de los expertos. Fundamentalmente, los actores intervinientes en el proceso calificaron de conveniente la interpretación de la evidencia que apoyaba a las familias homoparentales como contexto adecuado para el crecimiento de los menores. Las instituciones que se posicionaron contra la adopción gay realizaron una crítica a la validez de la evidencia, para persuadir de que con una base poco sólida la Corte no podría aceptar la homoparentalidad.

La interpretación de la evidencia en términos favorables para las figuras homoparentales fue considerada como un sesgo propio de una postura personal frente a la homosexualidad más que el resultado de un examen concienzudo de la evidencia disponible. Desde esta perspectiva, dado que no hay evidencia o esta no es concluyente una decisión hacia la aprobación de la adopción para privilegiar los intereses de las parejas homosexuales conllevaría a la afectación del bienestar de los menores y el privilegio de intereses particulares. Dentro de las críticas específicas a la evidencia los actores intervinientes

indican que sería necesario realizar estudios del contexto colombiano en vez de extraer conclusiones de investigaciones realizadas en el exterior. El ciudadano interviniente Miguel Antonio Rueda Sáenz discute esta crítica señalando:

la inexistencia en Colombia de estudios relevantes acerca de padres y madres con sexualidades diversas (gay, lesbianas, bisexuales, transgeneristas, o queer), razón por la cual la mayoría de los análisis sobre la materia se plantean con base en estudios realizados en Estados Unidos (Sentencia C-802 de 2009)

Además, la crítica a la evidencia sostiene que muchas veces las mismas investigaciones declaran sus carencias metodológicas y que sería imperativo producir conocimiento en el país para que, de esta manera, se pueda evidenciar cómo es el desarrollo del menor con familias homoparentales y su desenvolvimiento en la cultura local. Incluso, los opositores a la adopción gay señalaron que los resultados de las investigaciones científicas sobre el efecto de figuras homoparentales en los niños pueden ser contradictorios. De ahí que, la retórica sobre la falta de información apropiada empieza a jugar un papel.

“en estas materias, la argumentación suele ser fuertemente marcada por posiciones ideológicas que potencialmente influirían sobre la presentación de los hallazgos científicos. En consecuencia, y atendiendo a la responsabilidad ética inherente a la práctica psicológica clínica, en el concepto se señala que la posición más conveniente ante el conflicto potencialmente lesivo de la beneficencia de menores, sería esperar a que el desarrollo técnico e investigativo, permita alcanzar conocimientos más claros” (Universidad de la Sabana, 2009)

En este fragmento, además de la denuncia de los intereses específicos sobre homosexualidad en la interpretación de resultados científicos, el concepto apunta que sería necesario postergar la decisión a los tiempos de la investigación científica. De esta manera, hasta que no haya resultados suficientemente favorables a la homoparentalidad la Corte debería abstenerse de decidir sobre el acceso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, la retórica de la falta de información adecuada no indica qué tipo de evidencia sería suficiente ni cuándo la comunidad científica podría proporcionar evidencia para un efectivo proceso de decisiones.

De hecho, esta constituye una estrategia para evitar que la Corte decida puesto que la evidencia que proveen los expertos por lo general es fabricada durante los procesos de decisión. Las líneas de indagación científica pueden ir en un sentido; las preocupaciones y necesidades de conocimiento en la toma de decisiones pueden orientarse en otro sentido. Así como la experticia es definida en el proceso de decisiones, la evidencia es producida en la resolución de cada demanda. Desde el proceso de toma de decisiones jurídicas sería, justamente, la labor de los expertos proveer la información relevante para que los magistrados puedan sustentar sus pronunciamientos. En vez de que esta versión lineal del funcionamiento de la justicia se lleve a cabo, los actores que encarnan puntos de vista opuestos se cuestionan mutuamente.

es preciso adelantar investigaciones científicas rigurosas y contextualizadas a las características propias de nuestra época, que

establezcan de manera clara y precisa los posibles efectos que, en el desarrollo integral del menor, puede tener el hecho de ser adoptado y convivir con parejas de un mismo sexo (Universidad del Norte, Sentencia C-802 de 2009)

De este modo, la toma de decisiones no representa un proceso lineal en el que una demanda es atendida por la Corte con base en evidencia proporcionada por los expertos y luego solucionada. Más bien, se trata de un complejo proceso de negociación, incluso de la evidencia y es justamente esa discusión sobre lo que sería o no válido lo que hace del proceso de decisión sobre adopción gay un álgido debate en el que la Corte no solo convoca, examina y decide sobre los argumentos presentados por demandantes, intervinientes y procuraduría sino que intenta construir un acuerdo a partir de los puntos de vista que encarna cada posicionamiento.

Por su parte, el apoyo hacia la adopción gay se articula alrededor de la defensa del papel de la Corte para decidir sobre la demanda interpuesta en el 2012. Colombia Diversa argumenta que la interpretación de la “idoneidad moral” que es acusada por los demandantes es la que realizan los operadores jurídicos como fundamento para negar la adopción a parejas del mismo sexo. La demanda entonces trata sobre una interpretación posible de la ley. Desde esta perspectiva se intenta establecer que la denuncia tiene un fundamento empírico y que no se basa en los sesgos personales de los demandantes. Por el contrario, negar la demanda involucraría el privilegio de intereses en contra del reconocimiento de la diversidad en la composición de familias de acuerdo a la orientación sexual de los padres. En ese sentido, se estaría respaldando una interpretación de lo moral que excluye el modelo de vida homosexual

En el proceso del 2009, los grupos a favor de la homoparentalidad se concentraron en establecer la falta de información adecuada por parte de los actores en contra de la adopción gay señalando que, el hecho de que existan prejuicios hacia las parejas del mismo sexo y que la familia tradicional es la heterosexual no indica que el interés superior del menor sea su crecimiento y desarrollo en un modelo heteroparental. Por el contrario, el Grupo de apoyo a mamás lesbianas señala que la mayoría de casos de maltrato infantil se han dado en hogares constituidos por padres heterosexuales. Aunque el grupo, no refiere cifras ni establece el contexto al que se refiere este argumento intenta denunciar el sesgo heterosexual en la conformación de familias, señalando que se trata más de un supuesto que de una realidad registrada.

Otra de las estrategias de denuncia de la falta de información adecuada durante el 2009 estuvo construida alrededor de la validez de la evidencia. Los grupos a favor de la homoparentalidad trataron de establecer que a pesar que los estudios sobre homoparentalidad son pocos no hay evidencia científica que permita concluir que el desarrollo social, emocional, afectivo y sexual de los niños, niñas y jóvenes, se vea afectado por el hecho de que sus padres sean homosexuales. Por ejemplo el Instituto de Investigación del Comportamiento Humano expresa que:

no obstante que existen pocos estudios con carácter científico que se hayan dedicado a analizar el comportamiento de los niños y niñas frente a los efectos de la crianza por parte de padres homosexuales, lesbianas,

transexuales sí es posible concluir que los estudios existentes, ponen en evidencia que el crecimiento y desarrollo integral de los niños se sujeta, en gran parte, a la calidad de las relaciones familiares y no a la orientación sexual de los padres (Sentencia C-802 de 2009)

De acuerdo con la versión de los grupos a favor de la homoparentalidad, si de algún modo la orientación sexual de los padres afecta el crecimiento de sus hijos es por el contexto de discriminación que es permitido y propiciado en diversos espacios sociales pero no tendría que ver con el afecto y el cuidado que les brindan sus cuidadores del mismo sexo. En ese mismo sentido, los interesados en defender la adopción gay señalan que tampoco hay evidencia que, desde la perspectiva del interés superior del menor, muestre que las políticas actuales en materia de adopción sean las más adecuadas por lo cual existiría un privilegio hacia la heterosexualidad que impide la adopción gay más que una restricción basada en la evidencia disponible.

Desde esta perspectiva, ese sesgo hacia la heterosexualidad y prejuicio hacia la homosexualidad estaría inmerso en los miedos que comúnmente son expresados hacia la influencia que podrían ejercer figuras homoparentales en la identidad sexual del menor. Sin embargo, el Grupo de apoyo a mamás lesbianas intenta desvirtuar esa versión indicando lo siguiente:

el hecho de que la mayoría de personas homosexuales provengan de hogares heterosexuales, comprueba que la orientación sexual es una característica de la identidad, es individual y no se aprende. Por último, en caso de que sus hijos decidieran ser homosexuales, en nada podría considerarse ello como una conducta sancionable (Sentencia C-802 de 2009)

En este fragmento, por contraste con la perspectiva de la homosexualidad como enfermedad se encuentra la reivindicación de esta orientación como una forma legítima de vivir la sexualidad humana que tiene que ver con aspectos de formación de una identidad a nivel individual. De ahí que no debiera constituir una conducta socialmente evitada pues sería la expresión de la diversidad humana y no una desviación.

Muchos de los que son considerados sesgos, prejuicios o actos discriminatorios hacia la homosexualidad, desde la perspectiva de los grupos que apoyan la adopción gay, son temores infundados que tratan de definir la homoparentalidad como una amenaza para los niños y las niñas en situación de adopción. El investigador de la Universidad Nacional Franklin Gil Hernández compiló en su *Amicus Curiae* los principales miedos que son movilizadas desde los intereses en contra de la homoparentalidad:

1) El supuesto riesgo de abuso sexual; 2) La preocupación sobre la orientación sexual de los hijos y, 3) Eventuales trabas psíquicas derivadas de la dificultad de reconocer las diferencias entre los sexos” (Sentencia C-802 de 2009)

La combinación de estos miedos con la defensa de lo que sería “el interés superior del menor” constituiría el principal obstáculo construido por los sectores sociales que defienden el modelo de familia tradicional y que están representados en los actores que participaron defendiendo una postura en contra de la homoparentalidad en las sentencias.

Básicamente, la concepción tradicional de la familia intentaría negar el cambio social que significa la homoparentalidad. Sin embargo, la ciudadana Diana Roa sustenta su posición de que las parejas del mismo sexo pueden conformar una familia argumentando, mediante un estudio del investigador chileno Juan Marco Vaggione, que:

el movimiento por la diversidad sexual se ha convertido en los últimos años en un actor político fundamental en la búsqueda de la desinstitucionalización legal y cultural del concepto tradicional de familia, como quiera que, a través de grandes luchas, ha obtenido el reconocimiento de derechos civiles y económicos. (Sentencia C-802 de 2009)

De este modo el movimiento LGBTI es considerado como un actor social de la transformación del concepto de familia que ha conseguido logros a pesar de los esfuerzos por obstaculizar el cambio social para defender a la familia heterosexual. Adicionalmente, la homoparentalidad desde esta perspectiva no significaría una negación de la heteroparentalidad como lo describen los interesados en restringir la adopción gay. Sobre este punto, los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes y Nelson Camilo Sánchez, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) afirman que “no se entiende por qué admitir la adopción de parejas homosexuales sería un atentado contra las familias heterosexuales”.

Desde el punto de vista de los actores a favor de la homoparentalidad aceptar el modelo familiar conformado por parejas del mismo sexo no negaría ni reemplazaría el modelo heterosexual. Sin embargo, la definición de familia que promueven los intereses contra la homoparentalidad no deja cabida a otra forma de familia que no sea padre, madre e hijos lo cual incluso conlleva a desprestigiar familias monoparentales, o conformadas por tíos, abuelos, o cualquier otro tipo de cuidador que no reivindique la diada conformada por un hombre y una mujer.

2.1.4 Conclusiones

Con el propósito de comentar algunos de los hallazgos de la dinámica de la toma de decisiones respecto a la adopción gay en Colombia he organizado el presente apartado en secciones que si bien se encuentran entrelazadas se encargan de caracterizar el ensamblaje de conocimientos, valores e intereses sociales sobre homoparentalidad bajo el punto de vista de algunos elementos conceptuales de los ESC.

Sobre co-producción: homosexualidad y familia en el marco socio-jurídico colombiano

De acuerdo a lo evidenciado en el anterior análisis, el conocimiento movilizado por los actores intervinientes en las sentencias no significa simplemente un conjunto de conocimientos desligados de la definición del orden sobre la familia. La estabilización de

la idea de la familia se encuentra relacionada con la producción y difusión de unas formas de comprensión sobre lo que significa cumplir roles parentales. Shapin & Schaffer (1985/2005) señalan que existen relaciones mutuas entre el conocimiento y el orden social; al respecto, en el establecimiento de las versiones sobre la homoparentalidad en las sentencias, fue notorio que la Corte moviliza un sentido de justicia basado en el conocimiento que movilizan los actores intervinientes los cuales, a su vez representan los posicionamientos sobre la adopción gay.

Desde el punto de vista de Jasanoff (2004) las relaciones entre conocimiento y orden social pueden entenderse de acuerdo con el idioma de co-producción el cual visibiliza que el conocimiento tiene un impacto social redefiniendo identidades colectivas, creando nuevas instituciones o produciendo representaciones. El orden social en juego en la toma de decisiones sobre la adopción gay estuvo en relación con la definición de identidades como padre o madre, las tensiones que reveló el debate estuvieron alrededor de esas identidades entendidas como categorías ineludibles para hablar de familia en el caso de los actores intervinientes contra la homoparentalidad mientras que los actores a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo expusieron la idea de identidades flexibles para el cumplimiento de los roles parentales. Es decir que la defensa de la homoparentalidad indicó que tanto hombres como mujeres están en capacidades para cumplir la labor de protección y cuidado que se ha entendido como propia de padres y madres.

Además, la movilización de conocimientos psicológicos y jurídicos en las sentencias trató la institución social de la familia como una categoría disponible de actualización y redefinición de acuerdo con los actores intervinientes a favor de la homoparentalidad, y como una institución que debe permanecer estable a lo largo del tiempo según la interpretación del orden social movilizado por los actores contra la adopción gay. Así pues, lo que se evidencia en las sentencias es ante todo una negociación que debe llevar a cabo la Corte para dirimir la disputa entre dos órdenes sociales que tratan de establecer ciudadanos y expertos en las sentencias.

La toma de decisiones en el escenario jurídico involucra entonces un proceso que negocia concepciones sociales de familia. Esto es visible en la participación de los actores de las sentencias, a pesar aparece de manera implícita debido a que en el escenario legal por décadas se ha intentado mantener el conocimiento experto alejado de intereses políticos y voluntades populares (Jasanoff, 2003). De ahí que, la identificación de las narrativas producidas en las sentencias permita discutir la manera en la que son valoradas categorías sociales como la familia y los roles parentales por las partes y haga visible la movilización de interpretaciones sobre la homoparentalidad.

Concretamente, para la producción de un orden social que incluya a las figuras homoparentales fue necesario un marco socio-jurídico de acuerdo con el cual la adopción es un proceso en el que prevalece la presencia de los menores como sujetos de derecho que necesitan el reconocimiento de sus familias así estén compuestas por una pareja del

mismo sexo. Esta estrategia fue sugerida tanto en la sentencia C-802 de 2009 como en la sentencia C-710 de 2012 pero termina estableciéndose propiamente como criterio de regulación de la adopción conjunta y de la adopción consentida por parte de parejas del mismo sexo en el 2015 con las sentencias C-683 y C-071. A pesar de la decisión, como he indicado antes, la controversia sobre adopción gay aún se encuentra abierta; la Procuraduría General de la Nación, partidos políticos y la iglesia se han manifestado en contra de la decisión de la Corte y han organizado acciones de recusación que buscan desmontar el pronunciamiento que avala las adopciones por parte de parejas homosexuales. Es decir, que aun la producción de conocimientos y de un marco jurídico a favor de la homoparentalidad no se encuentra estabilizado y que el re-diseño de la familia en Colombia para incluir a las parejas del mismo sexo todavía se encuentra en proceso.

Rodriguez & Rodriguez (2010) han llamado “efectos creadores de la Corte” a la definición que realiza la Corte de ciertas personas como sujetos de derecho. En el caso de la adopción gay los esfuerzos por reivindicar los derechos de las personas homosexuales no fue el criterio para regular el acceso de las parejas del mismo sexo a la adopción pues la Corte se inhibió de tomar una decisión de fondo en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 que representaron el esfuerzo por reivindicar a las personas homosexuales como padres y madres idóneos. La figura de los menores como sujetos de derecho merecedores de una familia que se encargue de su cuidado y protección fue en el 2015 la estrategia relativamente exitosa para lograr un cierre, al menos jurídico, de la discusión.

Red legal a favor y en contra de la adopción gay y representación democrática de la justicia

En la narrativa de los actores intervinientes en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 se evidencian los esfuerzos por invisibilizar y por resolver las tensiones entre la heterosexualidad y otras formas de experiencia de la sexualidad y formas alternativas de conformación de una familia. Ambas partes en la discusión involucraron el conocimiento de la psicología y de los expertos jurídico-administrativos; este uso del mismo tipo de fuente, para defender o rechazar la homoparentalidad, es un indicador de la manera estratégica con la que puede ser interpretado y flexibilizado el conocimiento especializado, en el ámbito jurídico, para la defensa de intereses en competencia dentro de una controversia pública.

En los estudios de controversias con perspectiva en ESC se ha encontrado que los actores sociales logran instaurar sus intereses en el escenario público mediante el uso estratégico del lenguaje, particularmente, cobra relevancia la manera en la que definen un problema social y su solución, puesto que ese comienzo marca las acciones subsecuentes en una controversia y las posibilidades de negociación (Callon, 1986; Latour, 2010). En el caso de la adopción gay, la evidencia proveniente de los expertos constituye un recurso textual dentro de la narrativa de la sentencia en la cual se produce la discusión y se construye el sentido social de la controversia. En el desarrollo de la discusión las partes, a favor y en contra, cubrieron el mismo tipo de temas nodales (familia y roles parentales) pero los

interpretaron de forma diferencial; es decir que le otorgaron un sentido social diferente a la controversia para los actores a favor de la homoparentalidad el debate es una cuestión de derechos de los adultos homosexuales y de los menores a tener una familia, mientras que para los actores en contra de la adopción gay la discusión plantea un desafío al modelo de familia heterosexual asumido como adecuado para el crecimiento de los menores.

Además, el esfuerzo por establecer una red legal a favor de la homoparentalidad movilizó mayor variedad de información respecto a la utilizada por los actores en contra de la adopción gay, retoman diversidad de leyes, casos internacionales y variedad de argumentos en parte porque su propósito estaba relacionado con sustentar una postura que desafiaba la tradición en la manera de concebir la familia en Colombia. Fuera de la red que intenta fabricar cada una de las partes para justificar su posición, el texto de las sentencias representa en su integridad una red legal que reúne diversas posiciones y se encuentra dotada de un sentido de democracia.

De acuerdo con Maldonado (2011), la sentencia constitucional corresponde a un género narrativo que construye una red entre actores quienes contribuyen a establecer el hecho jurídico, en el caso de la adopción gay, los actores intervinientes como los activistas y los expertos remiten sus escritos a la Corte donde son presentados dentro del texto de las sentencias como un recurso que soporta el proceso de toma de decisiones como una cuestión democrática y participativa. Sin la participación y la representación de diferentes posicionamientos no es posible que la Corte recree un proceso de deliberación y que por tanto sustente una decisión; aunque en las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 la decisión de la Corte fue inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo, fue relevante la participación de los actores intervinientes pues permite representar la decisión de inhibición como una consecuencia de las faltas técnicas de las demandas⁴ y no como producto de la falta de discusión sobre la adopción gay en la Corte.

Marcos culturales relevantes para el establecimiento de narrativas sobre familia y roles parentales en Colombia

La toma de decisiones jurídicas en torno a la adopción gay en Colombia refleja un complejo proceso de negociación de categorías sociales como la familia y la parentalidad. La discusión se encuentra compuesta por la producción de un diverso entramado de textos remitidos por ciudadanos y expertos que movilizan intereses a favor y en contra de la homoparentalidad. Las sentencias C-810 de 2009 y C-710 de 2012 construyeron la

⁴ Tanto en la sentencia C-802 de 2009 como en la sentencia C-710 de 2012 la Corte decidió declararse inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, quiere decir que la Corte se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo debido a que los demandantes no formularon sus reclamos en términos jurídicamente adecuados y claros.

discusión en torno al esfuerzo por ampliar la categoría social de la familia por parte de los actores intervinientes que remitieron textos en defensa de la adopción gay y la conservación de la familia tradicional por parte de los actores intervinientes que trataron de establecer como ilegítima la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La flexibilización de la categoría conllevaba al reconocimiento de roles parentales cumplidos por personas homosexuales mientras que la defensa de la forma convencional de conformación familiar definía como necesaria la práctica de los roles parentales por parte de personas heterosexuales.

Aunque cada una de las partes posee una interpretación del debate coherente con sus intereses, a favor y en contra de la adopción gay, fue relevante para todos los actores involucrados referirse a la familia como forma de relación básica y elemental en la sociedad. De tal modo, más que cuestionar la familia heterosexual los interesados en defender figuras homoparentales argumentaron que es posible la diversidad en la conformación de relaciones parentales y en el cumplimiento de labores de protección y cuidado de los menores. Esto puede entenderse de acuerdo con la perspectiva de Kruse (2012) quien indica que para hacerse significativa dentro del proceso de decisión, la evidencia, se encuentra referida a unos marcos culturales. Así pues, las versiones de las partes tratan de hacerse centrales en el relato jurídico mostrando la conveniencia o inconveniencia de la homoparentalidad bajo la idea socialmente valorada de “la familia”.

Particularmente, el marco cultural contra la homoparentalidad es construido mediante lo que he llamado el “repertorio del interés superior del menor” en el cual la homosexualidad es relatada como un posible peligro y amenaza contra el desarrollo y los derechos de los niños y niñas a crecer en una familia, entendida esta como la conformada por un padre y una madre. Por su parte, el marco cultural en defensa de la homoparentalidad es instaurado a través de una “repertorio de la igualdad” de acuerdo con el cual el interés superior del menor no es la familia heterosexual sino que la familia adecuada debe determinarse en cada caso. De este modo puede establecerse que para un niño puede ser adecuada la protección y cuidado tanto en un contexto familiar heterosexual como en uno homoparental.

Ambas versiones constituyen marcos culturales en el sentido de que son plausibles y valoradas en nuestro contexto social. Las dos versiones tienen posibilidades de establecerse como adecuadas y por lo tanto como criterio legal para decidir sobre la adopción gay. Lo que reflejan estas retóricas es que, la negociación sobre homoparentalidad involucra mediar entre el modelo heterosexual de familia que encuentra amenazante el modelo homoparental debido a que niega los roles de la diferenciación sexual, es decir el papel social y tradicionalmente asignado al hombre-padre como proveedor y a la mujer-madre como responsable del cuidado. Desde este punto de vista las relaciones de pareja entre un mismo sexo harían ilegibles estas responsabilidades. Desde la perspectiva de la homoparentalidad, el debate se trata de la aceptación de un nuevo modelo de familia que involucra cambio social y desafíos a la forma tradicional de entender los roles parentales que, ya sin estar arraigados en la figura del hombre y la mujer, pueden ser realizados por figuras parentales que deseen establecer vínculos de

cuidado y afecto con los menores a su cargo independientemente del género y la orientación sexual.

Frente a las versiones de realidad que tratan de establecerse mediante retóricas que movilizan una realidad social particular y funcionan de manera defensiva en el sentido de movilizar particulares interpretaciones sobre el mundo, también se encuentra la posibilidad de producir retóricas ofensivas que intentan socavar y debilitar la versión de la contraparte (Potter, 1998). En las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 las partes hicieron uso de una retórica ofensiva mediante la fabricación de un repertorio de la “falta de información adecuada”, mediante esta estrategia argumentativa las partes atacaron la interpretación de los hallazgos de la contraparte en el ámbito científico y jurídico señalando que no era posible hacer afirmaciones concluyentes en torno a los roles parentales de las personas homosexuales. Los actores intervinientes a favor de la homoparentalidad trataron de establecer que no puede juzgarse como inadecuadas las figuras homoparentales puesto que existe información de que el desarrollo de los menores se encuentra fundamentado en las dinámicas de trato y de cuidado dentro de la familia más que en la orientación sexual de los padres. Por su parte, los actores en contra de la adopción gay indicaban que no hay pruebas de que las figuras homoparentales representen una mejor condición de desarrollo de los menores que la familia heterosexual defendida en la Constitución.

Así pues, las narrativas que se encuentran en la sentencia reflejan el cambio cultural que se encuentra involucrado en la definición de la familia y los roles parentales. Ríos, Ordoñez & Ruiz (2011) reconocen que un cambio en el significado de “la familia” conlleva a una transformación social y cultural profunda, ya que el mismo componente discursivo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional conduce a una interpretación profunda de nuestros patrones culturales, de nuestra forma de actuar y pensar; aunque esa discusión no se presente de manera explícita al público en los textos normativos.

Conocimientos expertos para la regulación jurídica de la homoparentalidad

Como he señalado antes, el conocimiento especializado funciona como un recurso mediante el cual es movilizada la neutralidad y la objetividad en la toma de decisiones. Sin embargo, las narrativas en las sentencias revelan que hay un entrelazamiento entre la producción de hechos e intereses en torno a la controversia sobre adopción gay; pues, los actores intervinientes movilizan conocimientos científicos y jurídico-administrativos que son utilizados dentro de las sentencias para representar posicionamientos de manera estratégica para tratar de instaurar un orden social a favor o en contra de la homoparentalidad.

El campo de los ESC revela la hibridación de conocimientos expertos, experiencias e intereses permitiendo reconocer de forma compleja la producción de conocimiento y de decisiones públicas como procesos que van más allá del lugar establecido de unos como conocedores y otros como simple usuarios del saber. En el caso de la adopción gay el reconocimiento de ese carácter social, contingente y estratégico de la experticia, que algunos han considerado como una perspectiva pragmática de la experticia (Nowotny,

2003; Lidskog, 2008), conllevó a identificar que la experticia fue definida y admitida en virtud de la respuesta que permitió proporcionar las demandas de los ciudadanos. Las demandas que dieron lugar a las sentencias C-802 de 2009 y C-710 de 2012 se basaron en argumentos de los campos de la psicología y las leyes así como en la defensa de la igualdad para las personas homosexuales promovida por activistas para justificar las acciones de inconstitucionalidad.

Así pues, más que una experticia basada en criterios formales y genéricos sobre lo que sería evidencia válida en la Corte Constitucional, la definición de conocimiento experto, en el caso de la adopción gay, se dirigió estratégicamente al establecimiento de una regulación jurídica en respuesta a las demandas de los ciudadanos. Además, la participación de los expertos revela que los argumentos que fabricaron se concentraron en hallazgos registrados en contextos internacionales, más que en el desarrollo de una producción local; incluso los expertos jurídico administrativos realizaron referencias repetidas al contexto internacional. Sobre este punto, es relevante tener en cuenta que la Corte solicitó conceptos de expertos otorgando un tiempo de respuesta de dos semanas para que las instituciones hicieran llegar sus contribuciones al proceso jurídico.

De este modo, el reconocimiento de la configuración pragmática de la experticia permite señalar que el papel del escenario jurídico en la definición e introducción de expertos al proceso de decisión se encuentra orientada por la necesidad de regulación sobre la adopción gay dadas las continuas demandas ciudadanas en defensa de la homoparentalidad y los grupos que presionan para que las parejas del mismo sexo no sean reconocidas legalmente como figuras parentales. De ahí que Nowotny (2003) señale la "transgresividad de la experticia" en el escenario público como una situación común debido a que los expertos son llevados a contribuir con argumentos que permitan resolver problemas que no han surgido desde su campo de saber pero se intersectan con los procesos de toma de decisiones lo cual hace que en el caso de la adopción gay, los expertos terminen discutiendo definiciones sobre pareja, sexualidad y parentalidad para la aceptación o rechazo de la adopción por parte de personas homosexuales en los tiempos de la toma de decisiones.

Adicionalmente, el campo de los ESC ha señalado que las controversias públicas involucran un cuidadoso proceso de establecimiento de consenso sobre concepciones y categorías sociales haciendo uso de conocimiento especializado (Wynne, 2004; Hannah, 2011). En este sentido, la articulación de actores expertos a través de textos ensamblados a las sentencias constitucionales representa un mecanismo estratégico para responder a los reclamos ciudadanos movilizando conocimiento especializado que es apropiado por la Corte para fabricar las decisiones constitucionales. De ahí que, la demarcación de la experticia ha sido descrita como un asunto negociado entre los actores involucrados en la controversia más que como una condición previa a la discusión (Jassanof, 2008; Wynne, 2004).

Es particularmente, a través del mecanismo del *Amicus Curiae* mediante el cual la Corte escenificó el proceso de decisión como una cuestión democrática y participativa. El papel de los expertos, más que relacionado con dirimir la controversia a través de la evidencia, fue el de contribuir como un recurso mediante el cual se construyó la legitimidad de la decisión debido a que la experticia, por tratarse de un saber que se presume como anterior al proceso jurídico, se representó como un recurso neutral y objetivo. Sin embargo, la experticia movilizó intereses tanto a favor como en contra de la adopción gay puesto que los *Amicus Curiae* remitidos por todos los tipos de expertos presentaron evidencia que justificaba la postura de una y otra parte.

Jasanoff (2003) argumenta que en una controversia las partes cuentan con, relativamente, iguales recursos científicos y utilizarlos en contra o a favor de una decisión en el ámbito público conlleva a que sea necesario, no solo concentrarse en la validez del conocimiento, sino en los riesgos a los que conlleva la evidencia como instrumento de legitimación de intereses sociales en términos de neutralidad, lo cual imposibilita la construcción de consenso social sobre la base de un reconocimiento entre las partes en vez del establecimiento de una objetividad que arbitra el mundo social indiferente a los valores, los intereses y las perspectivas de sociedad de los actores sociales. Es decir que, el uso de la experticia científica o de otros tipos de conocimiento especializado en el ámbito de la toma de decisiones requeriría revisar y explicitar las consideraciones de los expertos sobre las categorías sociales en negociación, como familia y roles parentales, incluyendo los valores y tipos de sociedad en juego. Instaurar un orden social basado en el supuesto alejamiento y neutralidad de los expertos respecto de los aspectos negociados en la controversia pondría en riesgo el reconocimiento público de la incertidumbre y de los intereses como constitutivos de las decisiones públicas y del orden social.

Así pues, frente a la variedad de perspectivas en la toma de decisiones, Jasanoff (2003) argumenta que una “tecnología de la humildad” que reconozca las decisiones como una cuestión construida permite establecer un consenso mucho más consiente de la pluralidad de puntos de vista y fomenta el aprendizaje colectivo. En ese sentido, hacer explícita la manera estratégica en la que una y otra parte de la controversia interpreta su punto de vista y el de la contraparte permite que en el proceso de decisión sea manifiesto cuáles son los intereses y los valores en negociación.

Construcción estratégica de argumentos y agendas de investigación

Las partes en la controversia intentaron establecer la adecuación o falta de adecuación de las figuras parentales en relación con la sexualidad. El interés a favor de la adopción gay movilizó la interpretación de que la orientación sexual no sería un determinante de la capacidad de cuidado y protección hacia los menores. Así, la parentalidad correspondería a un producto de las dinámicas propias de cada familia, de la manera en la que sus integrantes interactúan, más que una condición sujeta a la sexualidad o al género. Por su parte, los interesados en censurar la adopción por parte de parejas del mismo sexo,

orientan sus argumentos a establecer una definición de roles parentales como una característica propia de los hombres y las mujeres, condición desde la cual ejercen como padres o como madres encargados de la protección y del cuidado respectivamente. Estas interpretaciones son movilizadas a través del lenguaje de lo que la Corte considera conocimientos especializados.

Particularmente, una de las formas de engranaje entre conocimiento e interés queda expuesto de manera expresa en las sentencias con la participación de grupos activistas en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Los grupos activistas en ambas sentencias defienden abiertamente su postura a favor de los derechos de las personas homosexuales y ensamblan conocimientos especializados del derecho, la psicología y la experiencia de familias homoparentales. En ese sentido, las relaciones entre lo que se ha identificado como legos y expertos puede también describirse en términos de grupos mixtos que generan conocimiento mediante nuevas formas de colaboración y traducción (Callon & Rabeharisoa, 2003) de las cuales no serían apartados los intereses sino por el contrario son justamente esos posicionamientos los que hacen que los actores se asocien unos con otros estableciendo un conjunto de cuestionamientos y agendas de trabajo relevantes para la defensa de un grupo social, en este caso el que componen las parejas del mismo sexo que desean adoptar.

Además, los textos de los actores intervinientes construyeron versiones sobre la familia que interpelan estratégicamente valores considerados socialmente relevantes. Por ejemplo, la familia como base social de la cual pueden participar las personas homosexuales en el caso de los intervinientes a favor de la adopción gay o como una institución social propia de las parejas heterosexuales que se han unido en matrimonio de acuerdo con los actores intervinientes en contra de la adopción gay. Desde ambas posturas es defendida la familia en términos socialmente aceptados como una institución fundamental para el desarrollo de la sociedad. Esto se puede entender en términos de que el significado de justicia al que es articulado el conocimiento experto termina comúnmente reproduciendo –más que discutiendo- definiciones estatales (Fasin, 2005).

Así, es relativamente menos complejo desplazar interpretaciones establecidas sobre la familia hacia posicionamientos, bien sea a favor o en contra de la adopción gay, que desmontar las concepciones sociales sobre familia y parentalidad que se encuentran traducidas y resguardadas por las leyes. Por ello, las partes hicieron uso de argumentos con una fuerte resonancia en torno a los derechos de los menores a una familia más que la defensa o negación de los derechos civiles de las personas homosexuales.

Adicionalmente, en el desarrollo del debate sobre adopción gay, la Corte no decidió, en torno a las tensiones en las formas de familia que movilizan las partes, una que incluye roles parentales homosexuales y otra que no. Es cuando la discusión se enmarca dentro del bienestar del menor, más que en términos de los derechos de las personas homosexuales, que la Corte se pronuncia durante el 2015 admitiendo tanto la adopción conjunta como la adopción consentida para las parejas del mismo sexo. Esto significa que, hubo un desplazamiento estratégico en la forma de reivindicar la adopción gay que permitió re-enmarcar el punto de vista de los sectores que habían estado en contra de esta posibilidad bajo la bandera del interés superior del menor.

Finalmente, bajo el concepto de externalidades es posible comprender parte de la movilización social posterior a las sentencias constitucionales orientadas a la reivindicación de la homoparentalidad, pues se trata de acciones que son inspiradas por el establecimiento de esa red legal que termina comprendiendo la homoparentalidad como una posibilidad para brindar una familia a los menores desprovistos de esta forma de relación, protección y cuidado. Por ejemplo, la sentencia SU-696 de 2015 reivindica la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se registren como padres o madres de un menor lo que haría innecesaria la adopción que en todo caso involucra todo un proceso en el que los postulantes pueden encontrarse con resistencias por parte de los funcionarios como señala la demanda de 2008 realizada por el ciudadano Luis Eduardo Montoya Medina y la demanda de 2011 Sergio Estrada Vélez, Karen Patricia Ramírez Arcila, María Camila Soto Moreno, David José Hernández Hoyos y Allan David Rodríguez Aristizabal.

Leigh-Star (1991) señala que, las externalidades son aquellas relaciones que son propiciadas por el orden social pero que no se encuentran incluidas en el mismo. En ese sentido, el seguimiento subsecuente sobre la cuestión de la homoparentalidad puede entenderse desde el problema de la externalidad, pues como he señalado anteriormente el debate sobre figuras homoparentales aún se encuentra abierto y de este modo involucraría el registro sistemático de las acciones recientes realizadas por los grupos a favor y en contra de que las personas homosexuales funden una familia reconocida por el Estado colombiano. De esta manera, futuras investigaciones en línea con el registro de conocimientos, experticias e intereses respecto a la familia en el ámbito pueden llevar a cabo el registro de las acciones subsecuentes a al proceso de toma de decisiones aquí plasmado con el fin de evidenciar el acatamiento y acogimiento a los textos normativos y los esfuerzos por revertirlos.

3. Producción experta de relaciones parentales en la sociedad colombiana

Los conceptos presentados en las sentencias C-802 de 2009 y C710 de 2012 por parte de expertos jurídico-administrativos, activistas y expertos en psicología corresponden en su construcción a diferentes lógicas mediante la cual tratan de establecer hechos en el escenario jurídico. Como se ha mostrado en el campo de los ESC en el derecho y en la ciencia la producción de hechos se presenta en diferentes tiempos y en escenarios diferentes, pues la ciencia se orienta a impactar el cuerpo de conocimientos establecido con la fabricación de nuevos resultados mientras que el derecho se orienta a mantener el régimen legal vigente a través de una cadena de imputaciones y obligaciones en sus decisiones (Latour, 2010; Jasanoff, 2003). Fuera de las sentencias cada uno de los Amicis Curiae cuenta con una estructura en su construcción, algunos son de autoría de un investigador o una sola persona mientras que otros son realizados por un comité o grupo específico dentro de la institución que representan. Una vez son articulados a las sentencias, los conceptos expertos, movilizan argumentos y son ensamblados a una retórica de la justicia producida por la Corte Constitucional mediante el texto de las sentencias.

De ahí que, la síntesis que aparece sobre cada uno de los conceptos expertos, en las sentencias de 2009 y 2012, invisibilice parte de la lógica de su construcción. Cada concepto tiene un estilo sobre el cual puede indagarse si es resultado de las características de la institución (pública, privada, confesional, no confesional), si corresponde a la experticia que representa o al posicionamiento que defiende. El resumen dentro de las sentencias no proporciona una referencia de los argumentos en forma detallada, sino al contrario, apropia elementos específicos de los Amicis Curiae para producir una decisión jurídica. De acuerdo con esto, el estudio de cada una de las experticias contribuye a realizar un análisis institucional de la experticia en los procesos de toma de decisiones, estableciendo cuáles son los elementos que permanecen recurrentes y en cuáles, cada una de las entidades participantes, proporciona su carácter distintivo.

Adicionalmente, los expertos que participaron en el debate jurídico se referían a la falta de evidencia en el caso de las familias colombianas constituidas por parejas del mismo sexo. Por ello, el contraste de expertos permitiría evidenciar cuál es el uso local de las investigaciones realizadas en otros países. El foco de indagación, que de aquí se

desprende, estaría conectado con el análisis de las relaciones políticas entre aquellas entidades, países y cortes que se habrían constituido como centros de decisión y de investigación sobre la adopción gay y los que apropian la ciencia pro o anti homoparentalidad de comunidades científicas extranjeras. Para realizar esta descripción sería relevante establecer qué tipo de diálogos y cuáles dispositivos retóricos son utilizados para hacer el ensamblaje de argumentos provenientes de otras latitudes. Así mismo, en relación con el análisis institucional propuesto más arriba, podría identificarse los estilos de ensamblaje de evidencia que corresponde a cada tipo de institución identificando puntualmente si las formas en las que son incorporados conocimientos asume algún tipo de relación de dominación respecto a campos de conocimiento, países o entidades.

Como he señalado en el anterior capítulo, desde los ESC se ha analizado la experticia como algo que moviliza simultáneamente conocimiento y ordenes sociales particulares (Jasanoff, 2004). Sin embargo, esto es algo que los propios expertos tratan de invisibilizar; de ahí que una comparación sobre la manera en la que cada concepto se auto-representa como “neutral” permite detallar las estrategias mediante las cuales cada uno de los expertos discute elementos morales sobre la adopción gay pero los presentan en términos técnicos.

Finalmente, como último foco de indagación sobre la comparación de expertos, sería pertinente identificar si la Corte propicia la construcción de evidencia. Esto a razón de que, por ejemplo, es común que la experticia científica no disponga de toda la evidencia que demanda la Corte puesto que los procesos de toma de decisión exigen la producción de conocimientos que son relativamente nuevos y que poco han sido explorados por la ciencia (Jasanoff, 1997). La Corte entonces puede representar un espacio en el que los problemas públicos potencializan la producción de determinadas áreas que, según los actores involucrados, serían relevantes para la subsecuente toma de decisiones.

El caso de la experticia jurídica puede ser diferente. La Corte significa un espacio de discusión de las leyes que ya estarían establecidas, específicamente sobre su interpretación, más que un escenario de producción de nuevos conocimientos. Latour (2010) señala que en el dominio legal los hechos son algo se intenta deshacerse tan rápido como sea posible para mover otras cosas nombradas desde el punto de vista que es de interés para la ley; como la constitucionalidad o no de las normas demandadas, la existencia de marcos legales sobre la adopción y las repercusiones de incluir parejas del mismo sexo en la definición de familia.

El problema acerca de cómo se articulan estas diversas lógicas dentro de la sentencias, que fue tratado en el capítulo anterior mediante los repertorios argumentativos de las partes que terminan narrando versiones que la Corte apropia dentro de su gran retórica de la justicia para producir la decisión. El del presente capítulo correspondería al problema de cómo es que cada experticia produce su lógica, que no se limita a un espacio esotérico, sino que permite interpelar a la Corte para incidir en el proceso de decisión; es decir, se trata de la pregunta sobre el cómo las experticias se hacen “ensamblables” al escenario jurídico.

4. Expresiones de experiencia/experticia entre públicos y expertos

Los ESC han problematizado las fronteras de conocimiento entre legos y expertos mostrando que ambos actores pueden incorporar a sus acciones tanto la experiencia como la experticia. De ahí que este capítulo se centre en recuperar el papel de los públicos en el debate sobre adopción gay; específicamente, describiendo la manera en la que los públicos movilizan conocimientos y discuten las expresiones provenientes de los expertos que participan en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, uno de los tópicos relevantes corresponde a la discusión sobre el sentido de democracia que transita y es construido por diversos tipos de públicos asociados a la adopción homoparental, si se trata de algo que remite a las mayorías o que requiere salvaguardar a las minorías particularmente a las pertenecientes a un sector reconocido como LGBTI.

Iniciar el análisis con la identificación de las particulares construcciones de conocimiento de los públicos y sus estrategias de movilización permitirá rastrear las respuestas de grupos interesados pero no citados al debate jurídico sobre adopción gay. Algunos ejes analíticos que permiten complementar esta labor son los siguientes. Primero, describir si los expertos participaron en algún escenario fuera del jurídico y si propiciaron el diálogo con los públicos; segundo, evidenciar de qué manera el público apropió los conceptos expertos y reaccionaron con aceptación o rechazo hacia la adopción gay; tercero, señalar en qué sentido los públicos ampliaban o profundizaban los tópicos tratados por los expertos.

Finalmente, de acuerdo a lo que argumenta Jasanoff (1997) no todos los científicos están dispuestos a ceder ante las prioridades y compromisos de los abogados; pues la admisión

de objetivos estratégicos en la litigación está en contra de las personas que han sido entrenadas para pensarse a sí mismos como observadores imparciales más cuando saben que deben colocar a disposición los datos aun cuando cualesquiera teorías rivales pueden suprimir cualquier “inconveniente” en la observación y los expertos de una misma disciplina se encuentran en la corte en una contienda pública de desacreditación. En ese sentido, será pertinente rastrear si hubo participación pública de “expertos” que no presentaron *Amicus Curiae* pero que hubiesen podido considerarse como tal debido a que cuentan con las características de las instituciones convocadas universidades, organismos públicos, y centros encargados de promover derechos LGBT.

5. El gran debate sobre las familias homoparentales: conocimientos e intereses públicos

El debate sobre lo que en prensa se difundió como la “adopción gay” contó con el cubrimiento por parte de los medios de comunicación masivos; dentro de estos, se encuentran las noticias publicadas en los portales web de periódicos del país como El tiempo y El espectador. La particularidad de estas noticias en internet, es que trataban el tema de forma continua informando rápidamente sobre los temas de la discusión y algunas de las respuestas que suscitaban, la Corte y los expertos, por parte de algunos públicos y de la Iglesia. La revisión de las noticias en línea permite que los intereses de grupos interesados aparezcan, fuera de la Corte, también en forma de producción textual lo cual permite rastrear qué es lo que sucede con los repertorios argumentativos dentro de las sentencias; si son ampliados, si emergen otras producciones discursivas o si son discutidos.

El presente capítulo trataría del problema señalado por Mulkay (1997) acerca de la forma en la que la prensa propicia una interpretación sobre la controversia pública. Es decir, la manera en la que son movilizadas unas versiones de lo que significa la familia homoparental en el país que terminan sustentado un apoyo o rechazo hacia la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Además, dentro de este foro público, también son movilizadas experticias que pueden o no corresponder con las que han sido ensambladas al proceso de toma de decisiones; en este sentido, será pertinente evidenciar cuáles son las experticias que predominan allí y describir los ejes de discusión así como los intereses que promueven sobre la homosexualidad, la familia y la parentalidad.

De esta manera, el análisis de prensa permite discutir la manera en la que el público es incorporado a la gran discusión sobre adopción gay y si es, de alguna manera, participe de la forma “testigo” común en los escenarios jurídicos y que corresponde a la manera en la cual los propios expertos han sido ensamblados al proceso de toma de decisiones. De ahí que dentro de esta dinámica será también relevante mostrar qué significa la autoridad y cómo es escenificada. Finalmente, en un esfuerzo por mostrar el carácter reflexivo del

público el presente capítulo mostrará cuál es el papel que cada uno de los actores, que aparece en el foro público, se asigna a sí mismo dentro de la controversia.

A. Anexo: Proyecto “Retóricas expertas en el debate sobre adopción gay en Colombia”

Descripción del problema

Jasanoff (1996a) explica que el mismo argumento científico puede tener diferentes significados políticos dependiendo de la manera en la que se presenta, como artículo, discurso para los científicos, parte de una comunicación para público general o participación oficial en la toma de decisiones. En este sentido, mientras que los desacuerdos científicos son difundidos a través de medios de comunicación con fines educativos o de entretenimiento; las controversias científicas públicas no solo son articuladas en términos epistemológicos y educativos sino también jurídicos (Crick y Gabriel, 2010). A su vez los tribunales se han convertido en consumidores de discursos técnicos, desde los jurados hasta los litigantes, son público no iniciado que utiliza evidencia científica exagerando su seguridad y seleccionando información útil (Caudill, 2002); por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos puede entenderse como una “entidad de habla” dentro de un proceso discursivo que construye las leyes en las que vivimos (Kleine & Robinson, 2008).

El papel de las cortes es fundamental en la creación del problema social en el que intervienen ya que definen problemas sociales como asunto de derechos y el procedimiento judicial como mecanismo para resolverlo (Rodríguez, 2010). El campo jurídico puede considerarse como productor del ambiente en el que la ciencia y la tecnología llegan a tener utilidad, significado y fuerza, o en otras palabras, se coproducen (Jasanoff, 1997).

En este sentido, esta investigación se pregunta:

¿Cómo se construyen y ensamblan retóricas expertas en defensa y rechazo de la adopción por parte de parejas del mismo sexo en la sentencia C-802-09 de la Corte Constitucional Colombiana

Objetivo general

Analizar la construcción y el ensamblaje de discursos científicos que permiten ironizar y cosificar las posiciones a favor y en contra de la adopción por parte de personas del mismo sexo en Colombia.

Objetivos específicos

Identificar la configuración de grupos interesados a favor o en contra de la adopción gay en Colombia.

Examinar la construcción y el ensamblaje de discursos científicos en el debate de adopción gay en relación a otros discursos expertos (jurídicos, religiosos, morales)

Señalar el papel de la participación de la ciencia en las cortes junto con las construcciones de autoridad experta y reclutamiento de aliados en la controversia sobre adopción gay en la sentencia C-802-09.

Palabras clave: adopción gay, retórica experta, retórica científica, ciencia en las cortes.

Justificación

Ciencia y retórica no son términos opuestos en el sentido de que la ciencia se refiera a la escritura neutra e insípida para comunicar hallazgos científicos y la retórica al arte de la manipulación y el engaño para seducir o aturdir a la audiencia; los estudios sobre retórica de la ciencia socavan esta división y convergen cada vez más con los estudios sociales de la ciencia (Restrepo, 2004). En este sentido, el análisis del papel de la ciencia en la corte permite obtener pistas sobre la manera en la que se construyen hechos no solo en la ciencia sino en el contexto jurídico colombiano y sobre los criterios que funcionan en lo que se considera (y cómo llega a considerarse) evidencia científica o en general evidencia experta válida.

Adicionalmente, la retórica ha estudiado cómo hacer que las personas creen en algo o se comporten de determinada manera y ha señalado las maneras de persuadir a los demás (Latour, 1992). El presente proyecto permite reflexionar acerca del papel de la ciencia en la persuasión de comportamientos en el caso de la adopción gay, ampliando aquello que consideramos ciencia en el sentido de ir más allá del laboratorio preguntándose por lo que sucede una vez se han fabricado hechos en la comunidad, si es necesario fabricar nuevos hechos en otros ámbitos y por medio de qué procedimientos. En términos generales, el problema por la construcción y el ensamblaje de discursos científicos fuera de la ciencia implica el estudio de un conjunto de procesos particulares que permiten visibilizar las relaciones entre público y experticia, en este caso a propósito de las retóricas científico-jurídicas.

El discurso científico está en evolución y es múltiple, emergiendo en relación a especialidades, proyectos, métodos, problemas, configuraciones sociales, y otras dinámicas que manejan las actividades científicas (Bazerman, 1998) la participación de la ciencia en escenarios no científicos nos habla de la configuración de la ciencia junto a otro

tipo de retóricas jurídicas, religiosas y morales. Incluso el hecho de que la ciencia sea llamada a participar en otros escenarios nos manifiesta cuestiones sobre la legitimidad de este tipo de conocimiento que puede ser aprovechada y reforzada en el ámbito jurídico. Además no son campos diferentes, sino un tejido sin costuras (1992)

Enfoque Metodológico

La sentencia C-802-09 sobre discriminación en el proceso de adopción por parte de personas del mismo sexo y sus documentos adjuntos (conceptos científicos de facultades de psicología del país solicitados por la Corte con respecto al “posible efecto que, en el desarrollo integral del menor, puede tener el hecho de ser adoptado y convivir con parejas del mismo sexo, específicamente, indicando su posible incidencia en el proceso de entendimiento de los roles de padre y madre, y en la formación de su identidad sexual”) serán estudiadas en cuanto a: contenido, grupos de interés y artefacto intertextual de construcción de autoridad experta y reclutamiento de aliados de cada una de las posiciones a favor o en contra de la adopción gay.

A continuación detallo la metodología en correspondencia con los objetivos anteriormente descritos:

- Registro de los grupos, personas y conceptos que argumentan a favor o en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo en la sentencia C-802-09 y documentos relacionados.
- Examen de argumentos científicos mencionados en los argumentos de otro tipo de experticias para rechazar o apoyar la adopción por parte de parejas del mismo sexo en la sentencia C-802-09.
- Análisis del contenido de la sentencia C-802-09 en cuanto artefacto intertextual de construcción de autoridad experta y su uso por parte de los diferentes actores.
- Redes de Citación (nacionales, internacionales, Cortes, demandas,) y la traducción del contenido de la sentencia con un sistema de valores general. Sentencia y documentos relacionados.

Estado del Arte

Respecto a las relaciones entre la ciencia y la ley, desde las mismas experticias se han considerado diferentes problemas; se ha argumentado que los psicólogos no solo tienen intereses sino una responsabilidad en la participación activa en el debate. Los psicólogos necesitan asegurar que sus hallazgos son interpretados y aplicados apropiadamente por la ley debido al poder y la autoridad de sus hallazgos. Los psicólogos necesitan ofrecer una crítica cuando los estándares de la ley fallan en interpretar y aplicar apropiadamente sus hallazgos y ser reflexivos del punto en el cual la propia práctica psicológica debe contribuir

a las deficiencias de la ley. Los científicos deben estar dispuestos a ayudar a la ley a desarrollar mecanismos y estándares alternativos y en algunos casos tendrán que tomar el mando en las presentaciones en la ley (y en ocasiones de otros científicos y psicólogos) donde el cambio es necesario. (Zeedyk & Raitt, 1998)

En relación con lo anterior, en el estudio de las relaciones entre la corte y la ciencia pueden emerger intereses normativos. Sin embargo, (Lynch & Cole, 2005) un giro normativo de los STS sobre la “intervención” en controversias públicas de la ciencia y la tecnología involucra una posible contradicción entre usar los STS para desafiar las demandas de la autoridad del conocimiento “científico” y tratar los STS en sí mismos como un recurso epistémico de autoridad. Quizá es posible tomar ambos caminos: deconstruir las demandas positivistas de la certeza intrínseca de los hechos científicos o la eficiencia inherente de la innovaciones técnicas, mientras que al mismo tiempo utilizamos el conocimiento STS como una base para la acción política y las recomendaciones políticas. Los autores no abandonan el giro normativo pero señalan que es difícil de reconciliar con las concepciones construccionistas, reflexivas y relativistas de la ciencia y la tecnología (ej: simetría, dar explicaciones de la prevalencia o distribución de las explicaciones independientemente de su verdad o falsedad).

Para un estudio de los procedimientos retóricos sobre las versiones del mundo Potter (1998) propone el análisis del discurso cosificador, que construye versiones del mundo como si fuese sólido y del discurso ironizador, aquel que se dedica a socavar versiones. La participación de la ciencia en el ámbito jurídico puede entenderse entonces como una estrategia de los grupos interesados para cerrar una disputa acudiendo a repertorios discursivos de expertos. Recientemente en Colombia la Corte Constitucional ha utilizado recursos científicos (conceptos de facultades de psicología del país) en la sentencia C-802-09 archivada en el expediente D-7415 de 2009 sobre discriminación en el proceso de adopción gay.

Por su parte, (Gilbert, 1984) definen el repertorio empirista como aquel que representa las acciones y creencias de los científicos como no problemáticas e inescapables de las características empíricas de un mundo natural impersonal. Por otra parte, el repertorio contingente en contextos informales el estilo es mucho más informal e idiosincrático, presentan sus acciones y creencias dependientes de compromisos intelectuales, características personales, herramientas indescriptibles y miembros de grupo. Su estilo, gramática y léxico es diferente a la utilizada en contextos formales. Esta habla informal es mucho más contingente. El principio de este repertorio es una directa oposición al repertorio empirista, en este los participantes permiten describir que sus acciones y creencias profesionales están influenciadas por factores variables fuera de los fenómenos empíricos.

Así mismo el consenso es un asunto relevante porque la objetividad de la ciencia es un consenso de la opinión racional sobre el amplio campo posible. Además, el consenso de los científicos no puede inferirse directamente a través de sus productos escritos como revisiones, libros de texto y artículos. No solamente es posible, en un caso específico, para diferentes científicos brindar diferentes puntos de vista del estado del consenso cognitivo; sino que cada científico individual, en diferentes contextos interpretativos, pueden suministrar diferentes relatos del grado y la naturaleza del consenso en el campo. Esto ocurre porque el significado de los miembros, la creencia individual y el contenido cognitivo están en sí mismas definidas contextualmente y son contextualmente variables. La

significancia de esta particular diversidad interpretativa es que revela que los datos acostumbradamente usados por los sociólogos como consenso son productos interpretativos contexto-vinculados, surgiendo fuera de las soluciones de los participantes a las tres cuestiones subyacentes (Gilbert, 1984). Con los anteriores elementos es posible decir que el consenso es construido en donde se encuentra ausente, es decir, se puede concebir como la otra cara de una controversia (jurídica por ejemplo) y describe diferentes estrategias para dirimirla a través de repertorios interpretativos.

Desde otra perspectiva Fuchs y Ward (1994) definen cuatro estrategias de deconstrucción análogos en ciencia y en derecho:

En primer lugar, la deconstrucción retórica permite ubicar aquellos agentes confiables y no confiables; en la ciencia la secuencia de pasos y secciones en la escritura científica así como un vocabulario empirista que, minimiza la agencia y la subjetividad, presenta la investigación como una gradual revelación de la verdad. Una afirmación científica debe responder una pregunta reconocida en alguna especialidad y respetar el formato típico de una solución del problema, a la vez que debe decir algo nuevo y diferente. En derecho, la deconstrucción se realiza a través de la atribución de violación de las directrices el vocabulario legal estándar. Otra manera retórica de operar es la fuerza persuasiva de las emociones y los sentimientos morales, lo jueces deben ver como aliados de su grupo o comunidad moral a una de las partes y ver al oponente fuera de esa comunidad.

En segundo lugar, la deconstrucción ideológica problematiza la familias o tradiciones de afirmaciones removiendo la carga de inspeccionar cada afirmación individual. En la ciencia vincular una afirmación con una escuela de pensamiento particular hace posible ubicarla en familias o conjuntos de afirmaciones alrededor de etiquetas convenientes. Mientras que en derecho, se trata de plantar una duda razonable de que la afirmación no es inocente como parece, presentando a su autor como alguien que tiene un interés y que debe estar sesgado en sus juicios y percepciones.

En tercer lugar, la deconstrucción procedimental, reduce la deconstrucción a unos pocos métodos generales y a sus críticas. En la ciencia generaliza desconfianza en los hallazgos y los resultados atacando el método que fue empleado (ej: los indicadores para operacionalizar un constructo teórico, recolección de datos o la replicabilidad). Y en derecho el ataque se dirige hacia los métodos formales para generar conjuntos y familias de afirmaciones, por ejemplo, el mismo procedimiento del jurado en la evaluación e inclusión de evidencia puede deconstruirse y en los procesos de apelación lo que previamente ha sido establecido corre el riesgo de reorganizarse y reinterpretarse.

Finalmente, la deconstrucción reputacional reduce la deconstrucción a cualquier cosa que diga el científico/testigo y no a sus afirmaciones particulares. En la ciencia la reputación de un científico es una clave para la atención selectiva de otros y ganan una autoridad que se extiende más allá de sus herramientas o campo de experticia. Si una afirmación es repetida y generada por personas con reputación, el proceso de producción de hechos y su visibilidad aumenta. En derecho y en ciencia se intenta cuestionar el carácter de testigo o resaltar cuestiones de confiabilidad o inconsistencias; en la deconstrucción se señala que la experticia está limitada a una ciencia y se resaltar la naturaleza incierta y controversial de la ciencia.

El término deconstrucción se ha utilizado, tradicionalmente, para hacer referencia a un tipo particular de práctica filosófica. Fuchs y Ward (1994) se cuidan de presentar el deconstruccionismo como monolítico y no pierden de vista que se trata de un movimiento con diversidad de aproximaciones; la de ellos es una interpretación que lleva al terreno de los actores y las acciones el acto de deconstruir lo cual es de vital importancia en el presente trabajo.

Finalmente, retomo el trabajo de Maldonado (2010) sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que está construido desde la perspectiva de los Estudios Sociales de la Ciencia y describe que las retóricas de cada grupo en torno al debate sobre la IVE, enfatiza que van más allá de posiciones pro-vida y pro-muerte mostrando la manera en la cual las partes reclutan y traducen diferentes formas de experticias, en especial, el uso que hacen de los repertorios discursivos tomados de la medicina.

Las retóricas de la vida están construidas con discursos sobre las definiciones de la vida en el campo biológico y médico. Las tecnologías juegan un papel relevante en la construcción del feto que hacen visible lo invisible, las ecografías resultan en una invisibilización de la madre que en la retórica pro-vida resulta en el feto como dotado de derechos. Por su parte, la retórica pro-elección subestima el tiempo del desarrollo del embrión a feto. Retomando el trabajo de Annemarie Mol, se trata de dos políticas ontológicas fetalizar al infante o infantilizar al feto, la retórica pro-vida sitúa la fuente y el origen de la vida en el vientre materno mientras que las retóricas pro-elección, desmitifican un origen o punto de inicio explica Maldonado.

El repertorio discursivo alrededor de la muerte gira en torno a la destrucción violenta del cuerpo. La infantilización del feto termina en narrativas sobre infanticidio que se hacen visible a través de tecnologías como la ecografía mientras que los discursos a favor del aborto presentan la muerte del feto como la extracción de un cuerpo extraño negando la presencia de dolor fetal durante el procedimiento quirúrgico.

Retóricas de la libertad, mientras en Estados Unidos se debate sobre los límites del control del Estado en la intimidad de la persona; en Colombia el discurso proelección trata con poco detalle y con vaguedad la viabilidad fetal y visibiliza el problema como un asunto de salud pública y se dirige a exigir acciones del Estado en vínculo con la idea de la autonomía individual que a la vez es subordinado a un problema público.

Debido a que en el debate, las partes traducen sus intereses en términos de un sistema general de creencias de la sacralidad de la vida y de la libertad individual en un Estado legítimo en sentido moderno, ninguna de las retóricas desacredita el valor de su contraparte sino que busca hacer su propia interpretación sobre esos valores como la más adecuada. De esta manera, desde los grupos pro-elección la libertad es entendida como vida, calidad de vida para la mujer y para el futuro niño mientras que los grupos próvida entienden la libertad como la lucha por los derechos humanos y la oposición al aborto como medida de democracia real atribuyendo a las Cortes una especie de tiranía frente a la voluntad popular.

Esta controversia muestra la flexibilidad de los valores vida y libertad, y cómo son construidos por los grupos de acuerdo a sus intereses y el papel de los repertorios discursivos médicos, en que el uso de una u otra retórica polariza partes. Pero, la polarización en torno a los temas de discusión no es una simple negación de los valores

de la otra parte sino una reinterpretación que presenta sus intereses como legítimos y auténticos de una sociedad considerada moderna. Por su parte, el derecho, a la vida o a la libertad, es considerado como un saber experto que es interpretado por las partes de la controversia.

En últimas, considero relevante esta perspectiva para un análisis retórico de los cruces entre las diferentes retóricas de la vida, de la muerte y de la libertad en los estudios de controversias, tratándolas como reinterpretaciones de cuestiones altamente valoradas en un sistema general de creencias en el contexto del debate. Este último aspecto, sobre el vínculo de los valores que movilizan la retórica de las partes y el sistema más general de los valores de la sociedad colombiana puede detallarse con respecto a las lecturas que efectivamente se hacen de tales retóricas.

Revisión bibliográfica:

- Bazerman, C. (1998). Emerging perspectives on the many dimensions of scientific discourse. En: Martin, J & Veel, R. *Reading science: critical and functional perspectives on discourses of science*. Londres: Taylor & Francis.
- Caudill, D. S. (2002). *Scientific Narratives in Law: An Introduction*. *Law and Literature*, 14(2), 253-274.
- Crick, N & Gabriel, J. (2010). *The Conduit Between Lifeworld and System: Habermas and the Rhetoric of Public Scientific Controversies*. *Rhetoric Society Quarterly*, 40 (3), 201 — 223.
- Gilbert, N. y. M., Michael. (1984). *Opening Pandora's box: a sociological analysis of scientists' discourse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jasanoff, S. (1996a). *Beyond Epistemology. Relativism and Engagement in the Politics of Science*. *Social Studies of Science*, 26, (2), 393-418.
- Jasanoff, S. (1997). *Science at the bar*. Cambridge: Cambridge University Press
- Kleine, M., & Robinson, C. (2008). *The Dialogic Rhetoric of the Supreme Court: An Interdisciplinary Analysis*. *Rhetoric Review*, 27(4), 415-432.
- Latour, B (1992). *Ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad*. Barcelona: Editorial Labor.
- Lynch, M., & Cole, S. (2005). Science and Technology Studies on Trial: Dilemmas of Expertise. *Social Studies of Science*, 35(2), 269-311.
- Potter, J. (1998). *La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social*. Barcelona: Paidós.
- Restrepo, O. (2004). *Retórica de la ciencia sin retórica: sobre autores, comunidades y contextos*. *Revista Colombiana de Sociología*. 23, 251-268.
- Rodríguez, C. y. Rodríguez., D. (2010). *Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia*. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Zeedyk, M. S., & Raitt, F. E. (1998). Psychological evidence in the courtroom: Critical reflections on the general acceptance standard. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 8(1), 23-39.

Bibliografía

- Anderssen, N. & Hellesund, T. (2009). Heteronormative Consensus in the Norwegian Same-Sex Adoption Debate? *Journal of Homosexuality*, 56 (1), 102 — 120.
- Bazerman, C. (1998). Emerging perspectives on the many dimensions of scientific discourse. En: Martin, J & Veel, R. *Reading science: critical and functional perspectives on discourses of science*. Londres: Taylor & Francis.
- Bernal, M. (2006). Las sentencias inhibitorias y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la justicia. *Revista Derecho del Estado*, 19, 171-181.
- Bloor, D. (1998/ [1976]). *Conocimiento e imaginario social*. Barcelona: Gedisa.
- Bocking (2005). Protecting the rain barrel. Discourses and the roles of science in a suburban environmental controversy. *Environmental Politics*, 14 (5), 611-628.
- Callon, M. (1986). 'Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay'. *Power, Action & Belief. A New Sociology of Knowledge?* Law, J. (Ed). Routledge & Kegan Paul, London: 196-229.
- Callon, M., & Rabearisoa, V. (2003). Research "in the wild" and the shaping of new social identities. *Technology in society*, 25, 193-204.

- Casallas, H. A. (2012). La ciencia en la televisión nacional: Análisis de los comerciales de televisión. Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Caudill, D. S. (2002). Scientific Narratives in Law: An Introduction. *Law and Literature*, 14(2), 253-274.
- Chemmerinsky, E. (2002). The Rhetoric of Constitutional Law. *Michigan Law Review*, 100, (8), 2008-2035.
- Collins, H. M., & Evans, R. (2002). The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. *Social Studies of Science*, 32(2), 235–296.
- Collins, H.M. & T. Pinch. (1993). *The Golem: What You Should Know about Science*. New York: Cambridge University Press.
- Collins, H. M. (1995 [1975]). Los siete sexos: estudio sociológico de un fenómeno, o la replicación de los experimentos en física. En: *Sociología de la ciencia y la tecnología*. Iranzo, Juan., Manuel, Blanco, J. Rubén, González de la Fe, Teresa, Tórres, Cristóba, & Cotillo, Albert. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Collins, H. M. (1997 1983). Un programa empírico de relativismo en sociología del conocimiento científico. En: González García, Marta I., López Cerezo, José A., & Luján López, José L. Barcelona: Ariel.
- Couso, J. (2004). Consolidación democrática y poder judicial: los riesgos de la judicialización de la política. *Revista de Ciencia Política*, XXIV, (2), 2004, 29-48.
- Curiel, O. (2010). El régimen heterosexual de la nación. Un análisis antropológico lésbico-feminista de la Constitución Política de Colombia de 1991. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Endmond, G. (2002). Legal Engineering. Contested Representations of Law, Science and Non-Science and Society. *Social Studies of Science*, 32, (3) 371-412.

- Epstein, S. (1996). *Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge*. Berkeley: University of California Press.
- Epstein, S. (2007). *Inclusion The Politics of Difference in Medical Research*. Chicago: Studies in Practices of Meaning.
- Fassin. (2005). Usos de la ciencia y ciencia de los usos: a propósito de las familias homoparentales, *Debate Feminista*, 16 (32), 52-73.
- Ferejohn, J. (2002). Judicialización de la política, politización de la ley. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, XLV, (184), 13-49.
- Gergen, K. (1998). La psicología social como historia. *Revista anthropos: huellas del conocimiento*, 177, 39-49.
- Goffman, E. (1998). *Estigma: la identidad deteriorada*. Madrid: Amorrortu.
- Golan, T. (2004). *Laws of men and laws of nature: the history of scientific expert testimony in England and America*. United States of America: Harvard University Press.
- Gómez, M. (2009). De las heterosexualidades obligatorias a los parentescos alternativos: reflexiones sobre el caso colombiano, *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia*, 1, 82-103.
- Gutiérrez, V. (1975/[1968]). *Familias y cultura en Colombia. Tipologías, Funciones, y dinámicas de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Hannah, Mark A. (2011) 'Legal Literacy: Coproducing the Law in Technical Communication', *Technical Communication Quarterly*, 20 (1), 5-24.
- Haraway, D. (2004). *Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra@_Conoce_ Oncoración®*. Barcelona: Editorial UOC.
- Imaz,E. (2015). Pensando sobre maternidades lesbianas. Relato de la evolución de un objeto de estudio. *Civitas Revista de Ciências Sociais*, 15, (2), 294-308.

-
- Irwin, A., Rothstein, H., Yearley, S & McCarthy, E. (1997). Regulatory science towards a sociological framework. *Futures*, 29, (1), 17–31.
- Jaraba, B. (2014). Un escritorio para Mercedes: revisando el mito fundacional de la psicología en Colombia. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Jasanoff, S. (1987). Contested Boundaries in Policy-Relevant Science. *Social Studies of Science*, 17(2), 195-230.
- Jasanoff, S. (2003). Technologies of humility: citizen participation in governing science. *Minerva*, 41, (3), 223-244.
- Jasanoff, S. (2004). *States of knowledge*. London, England: Routledge.
- Jasanoff, S. (2005). Law's Knowledge: Science for Justice in Legal Settings. *American Journal of Public Health*, 95(S1), 49-58.
- Jasanoff, S. (2008). Representation and Re-Presentation in Litigation Science. *Environmental Health Perspectives*, 116(1), 123-129.
- Jasanoff, S. (2012). Reason in practice. En Sheila, Jasanoff. (2012). *Science and Public Reason*. New York: Routledge.
- Kleine, M., & Robinson, C. (2008). The Dialogic Rhetoric of the Supreme Court: An Interdisciplinary Analysis. *Rhetoric Review*, 27(4), 415-432.
- Knorr-Cetina, K. (1981). *The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*. New York: Pergamon.
- Kruse, C. (2012). Legal storytelling in pre-trial investigations. arguing for a wider perspective on forensic evidence. *New Genetics and Society*. 31(3), 299-309.
- Latour, B. (1992). *Ciencia en acción: Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad*. Barcelona: Labor.
- Latour, B. (2010). *The Making of Law. An ethnography of the conseil D'état*. Cambridge: Polity Press.

-
- Law, J. (2004). *After Method: an introduction*. New York: Routledge.
- Leigh-Star, S. (1991). Power, technologies and the phenomenology of conventions: on being allergic to onions. En John Law (Ed.), *A sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Sociological Review Monograph*, 38 (pp. 26-56). London y New York: Routledge.
- Lira, A. N., Morais, N. A., & Boris, G. D. J. B. (2016). (In)Visibilidade da vivência homoparental feminina: entre preconceitos e superações. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 36, (1), 20-33.
- Lidskog, R. (2008). Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expert-lay divide. *Journal of Risk Research*, 11, (1-2), 69-86.
- Maldonado, O. (2014). Cortes, expertos y grupos de interés: Movilización y localización del conocimiento experto en la sentencia C-355 de 2006. *Universitas Humanística*, 77, 327-353.
- Maldonado, O. J. (2011). Textualidad, interpretación y construcción del cuerpo: Políticas ontológicas médicas y jurídicas de la despenalización parcial de la Interrupción. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Mol, A. (2002). *The body multiple: ontology in medical practice*. United States of America: Duke University Press.
- Mora-Gámez, F. (2012). *Colombian Psychology: Knowledge, technique and controversies Reconstructions from Science and Technology Studies*. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Moreno, P. (2015). Producción de evidencia psicológica en el debate jurídico sobre adopción gay en Colombia. *Universitas Psychologica*, 14, (2) ,1931-1940.
- Mulkay , M. (1993). Retórica y control social en el gran debate sobre los embriones. *Política y Sociedad*, 14(1) 143-153.

-
- Mulkay, M. (1997). *The embryo Research debate, Science and Politics of Reproduction*. Cambridge University Press.
- Nowotny, H. (2003). Democratising expertise and socially robust knowledge. *Science and Public Policy*. 30, (3), 151-156.
- Pinch, T. (1993). La retórica y la controversia sobre la fusión fría: del Woodstock químico al Altamont físico. *Política y Sociedad*, 14-15, 155-170.
- Potter, J. (1998). *La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social*. Barcelona: Paidós.
- Powell, B., Yurk, N., & Pizmony-Levy, O. (2015). Public Opinion, the Courts, and Same-sex Marriage: Four Lessons Learned. *Social Currents*, 2, (1), 3-12.
- Restrepo, O. (2004). Retórica de la ciencia sin 'retórica': sobre autores, comunidades y contextos. *Revista Colombiana de Sociología*, 23, 251-268.
- Ríos, J., Ordoñez, R., & Ruiz, P. (2011). El concepto de "familia" en el derecho colombiano visto a través de las sentencias de la corte constitucional que reconocen derechos de las parejas Del mismo sexo. *Revista Aletheia Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt*, 1, .97 – 114.
- Rodriguez, C., & Rodriguez, D. (2010). *Cortes cambio social: Como la Corte Constitucional Trasformó el desplazamiento forzado en Colombia*. Bogota: Dejusticia.
- Shapin, S. (1995a). Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge. *Annual Review of Sociology*. 21, 289-321.
- Shapin, S. (1995b). Una bomba circunstancial. La tecnología literaria de Boyle. *Cuadernos del Seminario*, 1(1), 41- 84.
- Shapin, S., & Schaffer, S. (1985/2005). *El leviatan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida experimental*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

-
- Silva, R., Martins, S. (2006). Adoção por homossexuais - uma nova configuração familiar sob os olhares da psicologia e do direito. *Aletheia*, 24, 149-159.
- Turner, S. (2001). On Telling Regulatory Tales: rBST Come to Canada. *Social Studies of Science*, 31, (4), 475-506.
- Woolgar, S. (1991). *Ciencia: abriendo la caja negra*. Barcelona: Anthropos.
- Wynne, B. (2004). ¿Pueden las ovejas pastar seguras? Una mirada reflexiva sobre la separación entre conocimiento experto- conocimiento lego. *Revista Colombia de Sociología* (23), 109-157.
- Zapata, B. (2009). Homoparentalidad en Colombia. Trazas iniciales de una investigación en curso. *Revista Latinoamericana De Estudios De Familia*, 1, 140 – 162.
- Zarate, A., Corzo, P & Valero, H. (2015). Diálogo entre las biociencias del comportamiento y el bioderecho frente al dilema bioético del matrimonio homosexual y la prole en Colombia. *Revista Lasallista de Investigación*, 12 (1), 192-202.
- Zeedyk, M. & Raitt, F. (1998). Psychological Evidence in the Courtroom: critical Reflections on the General Acceptance Standard. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 8, 23-39.